

modos de la historia argentina

Gabriel Di Meglio

¡Mueran los salvajes unitarios!

La Mazorca y la política en tiempos de Rosas



Editorial Sudamericana

Director de colección: Jorge Gelman

Diseño de colección: Ariana Jenik

Di Meglio, Gabriel Marco
¡Mueran los salvajes unitarios! : la mazorca y la política en tiempos
de Rosas. - 1a ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2007.
224 p. ; 23x14 cm. (Nudos de la historia argentina)

ISBN 978-950-07-2875-1

1. Ensayo Histórico. I. Título
CDD A864

En pág. 8: Divisa Federal (Colección Manuel de Anchorena). En Fermín Chávez,
Iconografía de Rosas y de la Federación, Buenos Aires, Editorial Oriente, 1970.

Impreso en la Argentina

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723.

© 2007, Editorial Sudamericana S.A.®
Humberto I 531, Buenos Aires, Argentina

ISBN 978-950-07-2875-1

www.sudamericanalibros.com.ar

A Ximena





Introducción

Los dos cuerpos colgaban y se balanceaban ligeramente, mientras algunos curiosos seguían acercándose para observarlos. Hacía calor, como es habitual hacia fin de año en Buenos Aires. La multitud que había asistido a la ejecución unas horas antes se había dispersado y la Plaza de la Independencia, que muchos llamaban todavía Plaza de la Concepción, recobraba de a poco su aspecto cotidiano. Cuando llegó la noche, los ajusticiados ya habían sido enviados al cementerio. Quedaban sólo unos soldados para evitar incidentes y un tardío grupo de conversadores. El 29 de diciembre de 1853 llegaba a su fin y, con él, las vidas de Ciriaco Cuitiño y Leandro Alén.

Ambos sabían que iban a morir: el juicio, concluido el 9 de diciembre, los había sentenciado al fusilamiento. La decisión fue apelada pero la Cámara de Justicia la confirmó, y añadió que los cadáveres debían ser colgados para profundizar el castigo. Sus esperanzas eran vanas: por una acusación similar habían muerto otros dos hombres; en octubre, fusilaron y colgaron en la Plaza de la Victoria, la principal de la ciudad, a Manuel Troncoso y a Silverio Badía.

El 28 de diciembre, Cuitiño y Alén fueron trasladados desde la cárcel a una vivienda ubicada frente a la Plaza de la Independencia. La residencia había pertenecido a un francés, Juan Pedro Varangot, atacado en octubre de 1840 por un grupo rosista y degollado allí mismo. Quizá no fuera azaroso que los encerrasen ahí. El día de la ejecución, desde muy temprano, unas cinco mil personas de distinta condición social —congregación enorme para la época— aguardaban expectantes. Miembros de la Guardia Nacional, la milicia de Buenos Aires, formaban un cordón que separaba a los presentes de la ruta al cadalso. A las nueve de la mañana la puerta de la casa se abrió, y los condenados salieron por ella acompañados por frailes dominicos. Cuitiño caminaba erguido y miraba desafiante a la multitud. Mientras se acercaba al patíbulo, vociferó que había servido a un gobierno legítimo y vivió a Juan Manuel de Rosas. Algunas voces anónimas lo insultaron a gritos. Por su parte, Alén se veía abatido y debieron auxiliarlo para

que pudiera avanzar. Se le había paralizado un brazo la noche anterior y el peso de las cadenas lo obstaculizaba visiblemente. Al subir al cadalso, el poncho parecía cubrirlo por completo; lo sentaron en un banco. Cuitiño pidió hilo y aguja para coser su camisa al pantalón y así evitar que se le cayera cuando lo colgaran. La multitud hizo silencio. Los tambores redoblaron y los guardias nacionales abrieron fuego. Minutos después, los cadáveres pendían de las horcas. Un dominico, fray Olegario Correa, dirigió un apasionado sermón al público, pidiendo a los padres que enseñaran a sus hijos cuáles eran los errores del pasado reciente. Así concluyó un episodio que provocó gran conmoción en la ciudad. Ciriaco Cuitiño y Leandro Alén habían sido ejecutados por los asesinatos que perpetraron como miembros de la Mazorca.¹

El drástico final de los mazorqueros fue un intento de marcar un corte con el pasado reciente de Buenos Aires. Una buena parte de la población de la provincia había apoyado a Rosas en años anteriores o lo había tolerado sin problemas, pero ahora que había caído se sumaba a las voces que condenaban su gobierno. En la ciudad, algunos referentes rosistas se habían unido a sus antiguos enemigos, los emigrados retornados tras la batalla de Caseros, para enfrentar el predominio de Justo José de Urquiza —y con él, el

de la provincia de Entre Ríos— y defender los intereses de Buenos Aires frente al resto de la Confederación. Con esa alianza, la ciudad resistió un sitio al que la sometieron en la primera mitad de 1853 fuerzas militares de la Confederación y de la campaña de Buenos Aires, sublevada contra su capital. En julio el sitio se levantó y Buenos Aires inició un período en el que estuvo separada del resto del país (que mientras tanto había sancionado una Constitución nacional). La nueva etapa fue abierta en la provincia disidente con los juicios a los ex integrantes de la Mazorca, que comenzaron poco después del final del sitio. Jurídicamente estuvieron llenos de irregularidades e incluso se faltó a la promesa de indulto que había sido dada a Badía y Troncoso por haber colaborado en la defensa de la ciudad; el resultado estaba anunciado antes de empezar. Con la ejecución de los mazorqueros, Buenos Aires “limpiaba” su pasado inmediato. Así, ellos fueron los grandes perdedores del régimen anterior (además del propio Rosas, exiliado y embargado). El resto de los antiguos rosistas se reinsertó en la vida porteña.

La elección de la Mazorca como blanco de la Justicia no fue azarosa: desde 1835, cuando comenzó el segundo mandato del Restaurador, hasta 1846, fecha en la que fue oficialmente disuelta, miembros de esa organización protagonizaron distintas agresiones a personas y bienes con el fin de amedrentar a la oposición —o a quienes se sospechaba de integrarla—

y garantizar así la unanimidad federal. Fueron también mazorqueros los autores de los asesinatos del que fue conocido como “terror” de octubre de 1840 y abril de 1842 en la ciudad de Buenos Aires. Representaban la peor cara del régimen autocrático de Rosas.

Los enemigos del rosismo y los historiadores que más tarde se dedicaron a criticarlo fuertemente tomaron a la existencia de la Mazorca, y de la Sociedad Popular Restauradora, de la cual aquélla era una suerte de brazo armado, como uno de los ejes, quizás el principal, de su ataque. La historiografía que en cambio procuró defender la imagen de Rosas minimizó la importancia de esas agrupaciones o justificó su accionar ante la proclamada gravedad de los hechos producidos por sus adversarios (como crímenes masivos y “traiciones patrióticas” ante potencias extranjeras). Así, cientos de páginas fueron escritas sobre la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca, aunque pocos estudios se dedicaron a explorarlas en profundidad; más bien, las observaciones sobre ellas se encuentran en las obras que trataron a todo el rosismo o a la figura de Rosas.²

Durante décadas, las polémicas en torno de Rosas fueron feroces, y en general acompañaban posiciones políticas divergentes en el presente en el que esos debates se libraban. A partir de los años '80 del siglo XX, esas controversias perdieron fuerza y fueron dejando de despertar las pasiones de antaño. Ro-

sas ingresó por primera vez al panteón principal de héroes nacionales: monumentos y calles con su nombre —algo impensable en épocas previas— surgieron en distintos sitios del país y el Restaurador terminó siendo incorporado a los billetes de pesos argentinos (junto a figuras fundamentales del panteón nacional, como San Martín, Belgrano, Mitre, Sarmiento y Roca). En el mismo período en el que los debates sobre el rosismo perdieron su pasada virulencia se hicieron, de todos modos, importantes avances en la comprensión de sus características y en la contemplación de aspectos del régimen que antes no habían sido considerados. Pero en esa revisión casi no entraron la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca.

Este libro tiene como objetivo hacer una breve historia de esas organizaciones: analizar las razones de su surgimiento —en el cual tuvo un papel preponderante una mujer—; delinear sus características y sus diferencias con otras estructuras como la Policía, el Ejército y la Milicia; reconstruir las biografías de sus líderes e integrantes; describir sus acciones políticas y su intervención en el terror; indagar su relación con Rosas, su grado de autonomía respecto de él y su importancia en la conformación del régimen. Todo esto es útil por un lado para conocer mejor al rosismo, separándolo todo lo posible de la figura omnipresente de su líder. Es decir, el rosismo no fue sólo Rosas. Al mismo tiempo, estudiar a la

Mazorca y a la Sociedad Popular Restauradora brinda información sobre los rasgos de la importante participación popular en la política porteña de las décadas posteriores a la Revolución de 1810. Y la existencia de ambas organizaciones no se entiende si no se tiene en cuenta esa presencia política popular en el federalismo.

El libro cuenta con tres capítulos, divididos a su vez en apartados. Los apartados poseen notas en las que se detallan los documentos de los cuales se extrajeron las citas textuales que aparecen en el relato. El resto del material utilizado —que no se cita— y todos los textos de los cuales se tomó información se consignan en las fuentes y la bibliografía. Dicho esto, preparémonos para internarnos en una de las épocas más complejas, turbulentas y llamativas de la historia argentina.



La estrella federal

I. Donde se explica la participación de las mujeres en la política porteña y la importancia que ella tiene para el desarrollo de este relato

En el origen de esta historia hay una figura decisiva y es una mujer. Eso es algo bastante extraño, puesto que ésta es una narración sobre política, y en la sociedad rioplatense de la década de 1830 que una mujer actuara descolladamente en la escena política no era ciertamente habitual.

Las mujeres, en casi todas las esferas de su vida, estaban subordinadas a los hombres. El ideal patriarcal de la sociedad porteña las confinaba al hogar,

dentro del cual también tenían en general un lugar secundario. Se las consideraba sin responsabilidades legales: si eran solteras, dependían de sus padres hasta los veinticinco años; si eran casadas, tenían que respetar la autoridad de sus maridos. Ciertamente es que cabe matizar esas condiciones: variaban especialmente de acuerdo con su posición social, o por ejemplo, cuando enviudaban, porque en casos específicos su autonomía era mayor. Las integrantes de la elite porteña se hacían cargo del control general de su espacio doméstico y de la servidumbre, las de los sectores medios se ocupaban ellas mismas de sus casas, mientras que las mujeres plebeyas solían trabajar fuera de las suyas —si es que las tenían—: se encargaban de tareas domésticas en residencias en las que algunas también vivían; eran lavanderas, planchadoras y tejedoras, se dedicaban a la venta ambulante o trataban de conseguir lo que pudieran día a día. Sus tareas las alejaban mucho del ideal social de la permanencia en el hogar. Muchas no podían formar uno en toda su vida y las que lo hacían, por sus ocupaciones, pasaban mucho tiempo en espacios públicos: en las calles, en las plazas y en los mercados. Las mujeres de la elite organizaban tertulias, podían participar en actividades de caridad ligadas a la Iglesia o formaban parte de la Sociedad de Beneficencia (fundada en 1823). Ése era el grueso de su actividad pública.

En cambio, la actividad política estaba dominada por los hombres. Si para éstos las décadas anteriores

habían implicado cambios drásticos en ese aspecto, como el fundamental de pasar de ser súbditos de la monarquía española a ciudadanos de una nueva república, las mujeres habían visto modificarse menos su condición. Por empezar, no contaban con derechos políticos (al igual que los esclavos). Sin embargo, eso no significa que no tuvieran ninguna relación con la política. No estaban habilitadas para votar o ser elegidas para gobernar, pero intervenían de otros modos. Y, sin duda, esa participación es importante para entender la política de las décadas posteriores a la Revolución de Mayo. Había muchas mujeres en las manifestaciones callejeras ligadas a la política, como los festejos por el 25 de Mayo, las asunciones de gobernantes o las celebraciones de victorias militares en los períodos en los cuales Buenos Aires estaba en guerra. Eran activas participantes de una práctica clave de la época: la circulación de rumores; en mercados y calles se encargaban junto a los hombres de propagar informaciones. Las de menor condición social podían repartir pasquines en contra de un gobierno, auxiliar en los días de elecciones y realizar tareas de espionaje. Intervenían en discusiones por cuestiones políticas que a veces daban lugar a peleas violentas que llevaban a la realización de juicios (gracias a lo cual hoy sabemos que había una presencia femenina en esos intercambios de ideas). Cuando el gobernador federal Manuel Dorrego fue fusilado por orden del general Juan La-

valle, en 1828, un diplomático inglés informó a su país que había visto a varias mujeres pegando carteles que procuraban lograr un levantamiento contra Lavalle, y a otras intentando convencer a las tropas que le respondían para que se pasaran de bando. Por su parte, algunas señoras de la elite prodigaban reuniones que en ciertos casos eran verdaderos mitines políticos; hubo quienes se hicieron conocidas por ello, como Mariquita Sánchez de Thompson y Melchora Sarratea, en la década de 1810. Otras influyeron en los asuntos públicos representando a sus maridos en reuniones o visitando a gente en su nombre. Por lo tanto, la intervención femenina en la política era algo corriente. Pero no había mujeres que se pusieran a la cabeza de la acción de una facción política en una disputa por el poder. El liderazgo era una tarea masculina.

Sin embargo, una mujer de treinta y ocho años se transformó transitoriamente en dirigente política en 1833; se llamaba Encarnación Ezcurra y pertenecía a una familia de la elite de Buenos Aires (el padre era un rico comerciante que había sido miembro del Cabildo y del Consulado de Comercio). Su relación con la política provino de la asistencia que prestó al que desde dos décadas atrás era su marido: el hombre más poderoso de la provincia en esos años, Juan Manuel de Rosas. Encarnación lo había ayudado en tareas administrativas desde bastante tiempo antes. Él pasaba largos períodos fuera de la ciudad y ella le

manejaba varios de sus asuntos desde la casa que compartían sobre la actual calle Moreno (entre Bolívar y Perú). Así fue internándose en cuestiones de índole política hasta que, en 1833, la ausencia de Rosas de Buenos Aires y el estallido de una crisis entre grupos federales le dieron la oportunidad de mostrar sus dotes de agitadora y organizadora.

Es que 1833 fue uno de esos años, para nada infrecuentes, en los que la política convulsionó a la ciudad. Desde hacía más de dos décadas que Buenos Aires era rica en conmociones. Los fundamentos que llevaron a Encarnación Ezcurra a una poco usual actuación política fueron, entonces, ser la esposa de Rosas y defender sus intereses en un momento de inquietud pública (amén de contar con una personalidad firme y decidida). Pero hubo otro elemento decisivo para esa intervención: su relación con miembros de la clase baja de la ciudad, lo que en esa época se llamaba "la plebe". Tejer relaciones con plebeyos para obtener su apoyo en la lucha política no era algo nuevo. Por el contrario, desde 1810 la política había comenzado a ser un asunto que involucró al grueso de la población porteña. Encarnación acudió a una práctica que se había extendido y era ya uno de los rasgos de la ciudad.

II. *En la que se hace una brevísima descripción de Buenos Aires, el escenario de este drama*

Los acontecimientos a los que haremos referencia en esta narración ocurrieron principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Veamos entonces algunos de sus principales rasgos; así, antes de dar inicio al drama, conocemos el escenario.

Al despuntar la década de 1830, Buenos Aires era una ciudad pequeña si se la comparaba con las grandes urbes europeas o incluso las de América del Norte. Pero era grande en el plano regional; el censo de 1836 registró a más de sesenta y cinco mil personas viviendo en ella. Había un casco urbano bien consolidado, dividido en manzanas estructuradas en damero, cuyo eje era —como en cualquier ciudad hispana— la plaza central, llamada Plaza de la Victoria. En sus alrededores había algunas calles empedradas, pero en el resto de la ciudad eran todas de tierra. Había distintas divisiones administrativas, pero las más usadas por la población eran las parroquias, debido a la gran influencia que tenían las iglesias en la vida cotidiana. Las parroquias eran once: Catedral al norte, Monserrat, Concepción, San Telmo, San Miguel, San Nicolás, La Piedad, Socorro y Catedral al sur (también llamada Colegio) y las nuevas Balvanera y Pilar (o Recoleta). Las parroquias recibían a veces el nombre de barrios, pero en ocasiones había también barrios que eran más pequeños, que estaban

dentro de las parroquias. Por ejemplo: entre Concepción y Monserrat se ubicaba el barrio *del Tambor*, zona habitada fundamentalmente por población negra libre; en el Socorro estaban el barrio *del Retiro* y a su lado el *de las Catalinas*, junto al convento homónimo; dentro de Catedral al sur se encontraba el barrio *de Santo Domingo*, en torno de ese convento y así con otros. Los nombres de las calles se usaban muy poco y la población utilizaba plazas, iglesias o residencias de gente conocida para establecer ubicaciones y distancias. Por ejemplo, podían decir que una pulpería estaba “de San Nicolás a la cuadra para el campo”, es decir desde esa iglesia hacia el oeste (frases como ésa eran muy comunes).

La ciudad se extendía de norte a sur desde la zona del Retiro hasta el extremo de San Telmo, entre los actuales Parque Lezama (una quinta por entonces) y Plaza San Martín (área de cuarteles militares). Más allá, discontinuadas, se ubicaban el matadero del sur —el que haría famoso un relato de Esteban Echeverría, en el que lo presentaba como “el foco de la Federación”—, el caserío de Barracas, zona de quintas de la elite y galpones de almacenamiento de cueros, el pequeño puerto de los Tachos emplazado en la boca del Riachuelo, y, cruzándolo, el área de los saladeros de Barracas al Sur. En dirección septentrional, el Retiro abría el suburbio que llevaba a la Recoleta, donde estaban el cementerio del norte, la iglesia del Pilar y otro matadero; más al norte, ya en

zona de quintas, se levantó desde 1838 la gran residencia de Juan Manuel de Rosas: San Benito de Palermo (frente al actual Rosedal). El crecimiento hacia el oeste había sido muy fuerte en la década de 1820 y había sobrepasado la línea de la actual Callao-Entre Ríos, prolongándose en una zona menos poblada hasta los alrededores del matadero y los corrales de Miserere (actual Plaza Once). Más allá, en todas las direcciones, se ubicaban las quintas que producían frutas, verduras y hortalizas para el consumo de la población porteña. Y luego comenzaba la campaña, el mundo rural, con sus pequeños pueblos (los más cercanos eran Quilmes al sur, San Isidro al norte y San José de Flores al oeste).

Un punto clave de la ciudad eran las iglesias: la más importante era la Catedral y luego las parroquias que dieron nombre a las zonas ya mencionadas. Articulaban la vida cotidiana y además sus atrios eran el lugar en el que se celebraban las elecciones. Las plazas y “huecos”, espacios en los que no se podía construir, eran asimismo fundamentales en la vida social de la población porteña. Cada parroquia tenía una importante y en algunas funcionaban además mercados de alimentos, otro destacado lugar de reunión.

Salvo las torres de las iglesias, Buenos Aires era una ciudad chata y de aspecto monótono. Los principales edificios no religiosos eran el Fuerte, que funcionaba como sede del gobierno hasta que Ro-

sas trasladó sus tareas a la residencia de Palermo; el antiguo Cabildo, ahora sede del Tribunal de Justicia; y la Sala de Representantes, edificio semicircular construido a principios de los años '20 en la llamada Manzana de las Luces de la calle Perú. Las casas céntricas, aun las más ricas, eran bastante modestas. Tenían una o dos plantas, grandes ventanas enrejadas, paredes en general pintadas a la cal y techos de tejas que cada vez más daban paso a la azotea al estilo italiano. En el interior estaban organizadas alrededor de patios y las pudientes tenían aljibes, cuyos pozos acumulaban agua de lluvia que luego las familias usaban para beber, cocinar y asearse. En cambio, en las "orillas" de la ciudad, las viviendas eran de una sola planta y no se construían generalmente una junto a la otra, sino que tenían cierto espacio a su alrededor y las separaban cercos de tuna. Solían tener una sala construida con ladrillo o adobe, una habitación o dos, una cocina y no contaban con un patio en el medio sino que poseían un terreno al fondo; en muchas de ellas los techos eran de paja.

En el centro se ubicaban las familias de la elite, es decir ricos comerciantes y estancieros junto a militares, abogados, notarios y otros que habían dedicado su vida a la política. La parroquia que concentraba al grueso de las familias de la elite porteña era Catedral al sur, aunque algunas residían en Catedral al norte. En el resto de las parroquias vivía entremezclado un heterogéneo conjunto de sectores sociales

medios con la plebe urbana (algunas zonas tenían mayoría plebeya, como el ya consignado barrio *del Tambor*, de población negra). La mayoría de los habitantes se dedicaba a actividades comerciales o artesanales, aunque también había una buena masa de individuos ligados a las actividades agrícolas en las “orillas” y otros muchos que no tenían oficio ni especialización, ni ocupación fija, y se encargaban de lo que podían encontrar a diario o por pequeñas temporadas. Era una ciudad marcada por la movilidad: la población más pobre cambiaba de trabajo —y también de vivienda, puesto que cuando no podía pagar el alquiler se mudaba a otro lado o era expulsada, en una sociedad en la que aún no se usaban casi los contratos escritos—, constantemente llegaban migrantes del interior atraídos por las oportunidades de la urbe, y había además varios habitantes yendo y viniendo de la campaña de acuerdo con las coyunturas laborales.

Por su ubicación estratégica, Buenos Aires había sido elegida en 1776 capital del nuevo Virreinato del Río de la Plata; había sido más tarde capital del sistema revolucionario; luego, capital del breve experimento de unión interprovincial de 1824-1826 (a cuya presidencia llegó Bernardino Rivadavia) y, al iniciarse la década de 1830, era sólo la capital de la más potente de las catorce provincias alguna vez unidas y ahora únicamente ligadas por haber acordado una Confederación. Ciudad capital, ciudad

mercantil, ciudad caracterizada desde 1810 por ser perpetua sede de una agitada vida política.

*III. Donde se inicia el drama, con la división
de los federales, y se enuncian los graves asuntos
que ella ocasionó*

El inicio de nuestra historia coincide con el final del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Rosas era un estanciero que se había labrado una importante fortuna y que había servido como comandante de milicias de la campaña bonaerense durante años, lo cual le había otorgado muchos contactos en el mundo rural, donde construyó su carrera política. En la primera parte de la década del '20 había apoyado políticamente al gobierno del llamado Partido del Orden, cuya figura más conocida fue Bernardino Rivadavia. De hecho, el acceso de ese grupo al poder en 1820 fue posibilitado por la intervención a su favor de las milicias rurales que dirigía el propio Rosas, las cuales vencieron a las milicias de la ciudad, que se oponían a esa facción (llamamos facciones a los agrupamientos políticos de la época, que se caracterizaban por estar poco estructurados, no representar a grupos sociales en particular ni tener un programa político definido). Mientras el Partido del Orden se dedicó a impulsar el desarrollo productivo de la provincia,

creando instituciones para su mejor administración, alquilando tierras a montos bajísimos a los estancieros y volcando el peso militar en la expansión y custodia de las fronteras con los indígenas, Rosas se mantuvo ligado a él. Pero comenzó a alejarse cuando esa facción empezó, a mediados de la década del '20, a llevar adelante una política más aventurera, con la guerra del Brasil y la convocatoria a un conflictivo y fallido congreso constituyente, en el cual una de las medidas propuestas fue dividir a la provincia de Buenos Aires en dos. Rosas se opuso y junto a otros destacados miembros de la elite porteña cambió de bando. El Partido del Orden había sido heredado en el Congreso por el Partido Unitario, propulsor de un sistema de unidad de soberanía y un poder centralista en las Provincias Unidas del Río de la Plata. En frente estaban los federales, que eran mayoría en las provincias: En Buenos Aires, el viejo Partido Popular (tradicional adversario del Partido del Orden) había devenido en Partido Federal. Rosas colaboró con ese grupo, que, en parte por esos nuevos apoyos, en parte por su creciente popularidad, logró instalar en el gobierno de la provincia a su líder: Manuel Dorrego. Cuando los unitarios, desplazados limpiamente del poder por Dorrego, hallaron un sostén en el ejército que en 1828 retornó de la guerra con los brasileños, el gobernador fue destituido por una asonada militar. Perseguido a la campaña, fue capturado y fusilado por orden del nuevo go-

bernador, Juan Lavalle. El hecho generó un levantamiento popular en la campaña de Buenos Aires, el cual fue aprovechado por Rosas para erigirse en líder del federalismo provincial y en campeón, como comandante de la campaña, de las leyes violadas por los rebeldes. Rosas se dedicó a combatir a Lavalle y sus seguidores (llamados decembristas por el mes de su revolución contra Dorrego) y sitió a la ciudad. Tras varias peripecias, los decembristas debieron negociar y terminaron siendo derrotados políticamente. Sus principales referentes se marcharon al exilio en Montevideo.

La Legislatura porteña volvió a ejercer sus funciones y eligió en diciembre de 1829 a Rosas para ocupar la gobernación, con el beneplácito de una gran parte de la población de la provincia. Debido a la situación de guerra civil que se vivía, los diputados decidieron otorgarle al nuevo mandatario facultades extraordinarias (es decir, más atribuciones para el Poder Ejecutivo). Sus tres años de administración fueron dedicados por un lado a devolver el orden a la campaña, alterado por las levas masivas para la guerra con el Brasil y por las luchas civiles que trajo la rebelión de Lavalle. Por otro lado, la prioridad la tuvo la guerra con las provincias que se habían plegado a la Liga del Interior, organización que con sede en Córdoba había sido creada por el general unitario José María Paz. Aliado con las provincias del Litoral y el caudillo riojano Facundo Quiroga, Ro-

sas obtuvo la victoria, y firmó con las otras provincias el Pacto Federal (al cual fueron sumándose todas). En él se establecía una Confederación en la cual no había ningún tipo de poder central, cada provincia era soberana y sólo se delegaba el manejo de las relaciones exteriores en Buenos Aires.

Cuando Rosas estaba terminando su período, la mayoría de los legisladores porteños consideró que concluida la guerra civil no había razones para continuar con el estado de excepcionalidad. Por lo tanto, aunque le propusieron su renovación en el cargo, negaron la posibilidad de que continuara contando con facultades extraordinarias. El mandatario saliente no aceptó y abandonó el poder, pero no se alejó de la vida pública; enseguida organizó una expedición sobre territorio indígena —que debía coordinarse con otras similares en las provincias que limitaban al sur con aquél— dirigida por él mismo. La denominada “campana del desierto” (nombre con el que se llamaba al territorio pampeano no sometido a la sociedad blanca) insumiría tiempo, hombres y recursos, y mantendría a su conductor alejado de la conflictiva ciudad mientras cumplía con una tarea muy bien vista por los habitantes de la campana.

El fin del primer gobierno de Rosas coincidió con una situación de calma en la Confederación, después de un largo período de turbulencias. Su propia provincia aparentaba iniciar una etapa de

paz —condición necesaria para la prosperidad productiva con la que Rosas estaba seriamente comprometido— y el rotundo triunfo federal parecía un reaseguro de ello. Es cierto, los unitarios no existían más como grupo político definido en Buenos Aires, y sus otrora referentes —Rivadavia, Julián Segundo de Agüero y Lavalle— se encontraban en el exterior. La escena estaba, por lo tanto, completamente dominada por los federales, y fue un miembro de ese partido, Juan Ramón Balcarce, el gobernador electo (había sido guerrero de la Independencia y gozaba de la confianza del mandatario anterior). Con todo, el triunfo federal no terminó con la lógica facciosa que dominaba desde hacía ya mucho la vida política porteña, y eso por una sencilla razón: los vencedores se dividieron a su vez, primero un tanto solapadamente pero al poco tiempo en un abierto enfrentamiento, y la nueva disputa volvió a activar las prácticas de agitación en la ciudad.

Los motivos de la ruptura entre los federales se hallaban en diferentes trayectorias políticas, en la pugna por definir quién iba a quedarse con el poder en Buenos Aires y en algunas posiciones divergentes en cuanto a la dirección que tanto esa provincia como toda la Confederación debían tomar. Balcarce fue electo principalmente por su cercanía con el gobernador saliente y porque se lo consideraba un continuador del rumbo de la administración de Rosas. Pero, pocos meses después de su asunción, el

grupo más ligado a aquél empezó a advertir que el nuevo mandatario daba mucha libertad de acción a su ministro de Guerra, el general Enrique Martínez, quien no era dócil a las directivas de Rosas y comenzaba a aglutinar al grupo federal que se había opuesto a la renovación de las facultades extraordinarias del ex gobernador.

Así se delineó rápidamente una facción que se autodenominó liberal o doctrinaria. Sus integrantes querían la organización de la provincia y de la Confederación mediante sendas constituciones, así como la vigencia plena del sistema representativo republicano. Objetaban por eso el liderazgo de Rosas, que era enemigo de ambos anhelos. Las principales figuras liberales tenían diferentes carreras en el federalismo. Pedro Cavia y José Francisco Ugarteche contaban con larga experiencia en la prensa y en la actividad parlamentaria, habían sido activos participantes de la política revolucionaria en la década del '10, habían formado el núcleo del Partido Popular en los años '20 y habían protagonizado la conversión de ese grupo en el Partido Federal durante el congreso constituyente de 1824-1826; estuvieron luego junto a Dorrego en su gobernación. Otros de los que ahora eran federales liberales se habían incorporado al Partido Federal porteño en ese momento: fue el caso del general Tomás de Iriarte y del propio Martínez (quien había servido en las campañas sanmartinianas y era primo de Balcarce, que a su vez tam-

bién había sido dorreguista). Unos y otros fueron perseguidos por los decembristas tras la caída de Dorrego. En ella participó el general Félix Olazábal, un destacado militar de la guerra de la Independencia y del Brasil, el cual rompió con Lavalle cuando éste decidió fusilar al vencido gobernador. Con la victoria federal y la llegada de Rosas al poder en 1829, todos ellos se convirtieron en propulsores de castigos enérgicos contra los unitarios, posición más exaltada que la adoptada por el gobernante. En 1833, Martínez, Olazábal, Iriarte, Cavia y Ugarteche devinieron los líderes del grupo de federales liberales. Sus oponentes los llamaron cismáticos porque se enfrentaban a la supremacía de Rosas, mientras que los adherentes a éste se autodenominaron apostólicos (y también federales netos). La denominación de apostólicos fue utilizada estratégicamente por el grupo rosista de manera de señalar a sus enemigos como adversarios de la verdadera religión y así impulsar la adhesión popular a sus filas.

Las caras visibles del sector apostólico eran figuras de la elite porteña como el rico hacendado Tomás de Anchorena —un veterano de la política rioplatense desde su participación en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810—, Felipe Arana —también presente en aquel mítico episodio— y Manuel Vicente Maza, ministro de Balcarce. Eran más conservadores que los federales liberales y se mostraban partidarios de la solución propugnada por Rosas de

evitar todo intento de organización institucional que, según ellos, pudiera afectar al orden provincial e interprovincial, como había ocurrido en el pasado. Su tarea principal durante la administración de Balcarce fue mantener la preponderancia de su líder. Como ocupaban tres de los cinco ministerios de la provincia su poder no era desdeñable. Sin embargo, los referentes de esta facción fueron muy cuidadosos en sus movimientos, por un lado porque siendo hombres de fortuna y respetabilidad era mucho lo que arriesgaban en su actuación política; por otro, porque buscaron mostrar la imagen que Rosas procuraba encarnar: defensa del orden y la propiedad, que les valió el apoyo pasivo de los sectores de la elite que no pertenecían en ese momento a ninguna facción, como los antiguos unitarios. Al mismo tiempo, cuando empezó a ser claro que Balcarce se dejaba guiar más por Martínez que por los consejos de Rosas, los partidarios de éste llevaron adelante una iniciativa en la Legislatura que desorientó a los federales liberales: representantes apostólicos pidieron que ese órgano sancionara una Constitución provincial —algo a lo que Rosas siempre se había opuesto— quitándole así una de las banderas al grupo rival. De todos modos, los federales liberales prosiguieron su intento de desarrollar una política independiente de las directivas del ahora comandante de la expedición contra los indígenas, y eso llevó a un conflicto cada vez más abierto. Fue en la lucha que

pronto estallaría donde surgió una personalidad clave en el sector apostólico: la mujer del líder ausente, Encarnación Ezcurra.

Las hostilidades se desataron el 28 de abril de 1833, cuando se celebraron —como se hacía habitualmente en ese mes— las elecciones para renovar la Legislatura. Para evitar las desavenencias crecientes, los referentes federales habían negociado la conformación de una lista única, encabezada por Rosas. Pero en la jornada electoral se presentó en la ciudad una supuesta lista opositora, llamada “lista del pueblo”, que terminó imponiéndose (en la campaña no hubo problemas y sólo se pudo votar por la lista previamente acordada). En realidad, no se trataba de una lista opositora sino de una jugada del ministro Martínez para sorprender a los apostólicos. Las listas con los nombres de los candidatos no estaban oficializadas en Buenos Aires; es decir, no había partidos con boletas legales, sino que quien quisiera podía presentar su propia lista y un postulante podía figurar en más de una de ellas (y luego se sumaban todos los votos que obtenía, con lo cual estar en más de una lista proporcionaba más oportunidades de convertirse en representante). La “lista de pueblo” fue también encabezada por el nombre de Rosas, pero los candidatos que lo seguían no eran los de la otra lista sino figuras de la facción liberal, y hubo pasquines fijados a las paredes en los que se llamaba a votar por esta opción.

Los federales liberales ganaron la elección y no solamente porque apelaron a la confusión de los nombres. Desde que el sistema electoral se instaló en Buenos Aires en 1821, las listas patrocinadas por el gobierno habían vencido en casi todas las disputas electorales (sólo habían perdido en una ocasión, en 1824). Estas victorias constantes de las listas que se llamaban ministeriales —hoy diríamos oficialistas— se debían a que el resultado dependía fundamentalmente del control de las mesas donde se votaba. El gobierno podía hacer que los jueces de paz y empleados de la Policía controlaran las mesas y tomaran decisiones cruciales durante el acto electoral acerca de quién podía votar y quién no. Por ejemplo, aunque los esclavos no tenían derechos políticos, algunos iban en grupos a hacerlo. Si el encargado de la mesa lo quería, podía hacerlos pasar por libres y aceptar su participación, pero si eran contrarios a su lista podía prohibirles el sufragio alegando que eran esclavos. Por otra parte, quienes iban a votar no lo hacían individualmente sino que concurrían en grupos organizados. Los ministeriales contaban con la posibilidad de movilizar a los militares y los empleados de la administración, los que sumaban una cantidad de votantes que les aseguraba la victoria. En abril de 1833 el gobierno se encontraba dividido, porque así como en él estaba Martínez, otros ministros eran rosistas y el gobernador Balcarce trataba de mostrarse neutral. Había jueces y militares que res-

pondían a los federales liberales, mientras que otros eran partidarios de Rosas, que además contaba con la adhesión del jefe de Policía. El sector liberal acudió entonces a los empleados del gobierno, a algunos miembros de la Policía que desobedecieron a su jefe, y sobre todo al Ejército, conjunto amplio de votantes con los cuales obtuvo el triunfo después de una jornada tensa en la que hubo algunos incidentes. La victoria fue festejada: un grupo se dedicó a “ensuciarse en las puertas de algunas casas” —es decir, defecar— “y después limpiarse con las listas” de los apostólicos. A Tomás de Anchorena le arrojaron listas destrozadas delante de las puertas y ventanas de su residencia. A la noche siguiente, hubo un desfile delante de las casas de Rosas, de Arana y del gobernador Balcarce, conducido por algunos liberales. Iban haciendo música, acompañados por las bandas de regimientos militares, y gritaban mueras contra los apostólicos.

Éstos se encargaron de denunciar irregularidades. Su periódico *El Lucero* sostuvo que en la parroquia del Socorro un grupo de militares se ubicó en la mesa y trastocó el resultado, anotando sufragios expresados a favor de la lista apostólica como si fueran favorables a los liberales (el voto se expresaba en alta voz). Para muchos de los principales rosistas, el hecho de que desde el gobierno se hubiera favorecido a la lista sorpresa mostraba con claridad que Balcarce no era prescindente sino que protegía a sus

enemigos, y la tensión se hizo clarísima. El conflicto volvería a explicitarse en junio, cuando el gobierno tuvo que volver a convocar a elecciones para completar cargos vacantes en la Sala de Representantes.

Esta vez, los apostólicos estaban preparados. El jefe de Policía, coronel Juan Correa Morales, pertenecía a ese grupo y movió a sus subordinados para que en los comicios triunfara su lista, que se llamaba “Federación o muerte” y estaba escrita en letras coloradas (en cambio, la de los liberales tenía un borde negro, con lo cual surgió otro mote más para cada grupo, respectivamente “lomos colorados” y “lomos negros”). La acción de la Policía fue más efectiva que la de las tropas enviadas a votar por Martínez y que los esfuerzos realizados por jueces de paz que respondían al ministro. El escándalo más importante tuvo lugar en la parroquia de San Nicolás. El juez de paz —que apoyaba a la lista liberal— llegó temprano a montar una mesa en el atrio, acompañado de numerosos hombres, como se hacía habitualmente. Cuando arribó se encontró con que ya había una mesa armada, rodeada de varios individuos. El juez procedió a armar su propia mesa, despertando quejas e insultos entre los grupos. Un comisario que no tenía ninguna relación con esa parroquia llegó al lugar para impulsar a la lista colorada, y los celadores de Policía que lo acompañaban empezaron a seducir a los sufragantes para que votaran en contra de la

lista ministerial y les aseguraban que ése era el camino de todo aquel que fuera amigo de Rosas. Como el juez de paz bloqueaba los votos a favor de la lista colorada, sus partidarios tomaron la mesa y la llevaron a cuarenta pasos del atrio para permitir que votaran los apostólicos. Al promediar la jornada, el desorden era mayúsculo. Al final del día la lista colorada había ganado en cuatro parroquias: Socorro, San Telmo (en ambas había habido disturbios y amenazas); San Miguel y Santo Domingo (también llamada Catedral al sur); la lista de los liberales se impuso en tres mesas: La Merced, Monserrat y Concepción. En esta última el oficial de Justicia Juan José Fernández empezó a romper boletas coloradas, debido a lo cual recibió una advertencia del comisario Andrés Parra; Fernández respondió abofeteándolo y por eso fue atacado por otros policías, que lo golpearon violentamente. El gobierno hizo encarcelar a Parra y a otro comisario rosista, Ciriaco Cuitiño. Luego aprovechó los desórdenes del día para evitar la derrota y suspendió las elecciones.

Los apostólicos estaban furiosos pero no sabían muy bien qué hacer. Tras algunas vacilaciones —en la noche de la jornada electoral la casa de Maza estuvo llena de gente que pedía acción— optaron por esperar. El gobierno parecía haber superado la situación adversa y al día siguiente Balcarce removió al jefe de Policía, que había bregado fuertemente por la victoria apostólica, y lo reemplazó por un decidi-

do federal liberal llamado Epitacio del Campo. Los ministros apostólicos renunciaron, pero la facción no preparó ninguna otra acción inmediata. Un hermano de Rosas comentó que “después de las elecciones corrieron algunos días y se empezó a sentir una especie de calma y apatía entre las personas de categoría”. Pero en ese momento Encarnación Ezcurra empezó a involucrarse más activamente en la contienda y a apelar a un recurso político que había sido fundamental muchas veces en el pasado: la participación popular.³

IV. En la que se trata del liderazgo popular de doña Encarnación Ezcurra y de la Revolución de los Restauradores

La “Mulata Toribia”, así llamaba la prensa federal liberal a Encarnación Ezcurra para mofarse de sus contactos con la plebe. Pero ella no renegaba de esos lazos; por el contrario, durante 1833 los cultivó más intensamente, y apostó a esa relación como forma de triunfar en su disputa con los cismáticos. Tomás de Iriarte, uno de los referentes de esa facción, señaló en sus memorias que Encarnación tenía profundas conexiones con “la hez del pueblo” y que “con ofertas y promesas de grandes recompensas que les dispensaría Juan Manuel, reunió considerable número de prosélitos del más bajo jaez, pero de armas tomar: no

desdeñó a los carniceros ni a los hombres más corrompidos e inmorales perseguidos por sus crímenes en épocas muy recientes”. Sin embargo, no se trataba de algo nuevo: la relación del matrimonio Rosas con el mundo popular venía de mucho antes. En la campaña, él se había revelado desde hacía años como un maestro para establecer vínculos sólidos con sus peones y otros habitantes del mundo rural. Había trasladado la costumbre a la ciudad, en la que además Encarnación y su hermana María Josefa Ezcurra se ocupaban de conservar la amistad de un gran grupo de pobres y no tan pobres, pero sí gente alejada de los círculos de la elite porteña.

Rosas recibió durante su gobierno el apoyo de buena parte de la plebe urbana que había apoyado a Dorrego, un líder muy popular, hasta su muerte. En el momento en que Rosas llegó al poder, diciembre de 1829, muchos de los miembros de la plebe de la ciudad se alineaban con los federales y él, como nuevo jefe del partido, heredó esa adhesión, que se mantuvo, reforzada por la guerra civil con la unitaria Liga del Interior. A la vez, él se encargó de afianzar su ascendencia popular. Por un lado, apenas asumió organizó un imponente funeral para Dorrego. Hizo conducir sus restos desde Navarro, lugar en el que había sido fusilado, hasta la capital de la provincia. Cuando entró a la ciudad, una multitud desenganchó los caballos del carro que portaba el cadáver y lo condujo a pulso, en medio de una enorme concu-

rrencia, hasta la iglesia de La Piedad, en donde se hizo una ceremonia. El cuerpo fue trasladado luego al Fuerte, y al día siguiente, otra vez ante una gran multitud, con las banderas enlutadas y una orquesta que tocaba el réquiem de Mozart, se realizó una misa en la Catedral. Finalmente, los restos fueron enterrados en el cementerio del norte, donde el gobernador hizo un elogio del difunto. Para Rosas, la organización de ese evento constituyó un doble logro: reforzó en la ciudad el lugar indiscutido de jefe federal con el que ya contaba en la campaña y le aseguró la continuidad del apoyo popular que había gozado Dorrego. Por otra parte, a lo largo de sus tres años de *administración* el nuevo mandatario estuvo atento a los reclamos populares —uno de los rasgos decisivos de la popularidad de Dorrego— y se transformó en el único referente de la plebe porteña. Se ocupó especialmente de construir una relación fluida con la colectividad negra, esfuerzo que le valió su fidelidad durante mucho tiempo: cuando en las elecciones de junio de 1833 algunos oficiales intentaron conducir a soldados negros a votar contra los apóstólicos en la parroquia de la Concepción, el barrio con mayor población de ascendencia africana, la mayoría se negó mientras vivaba repetidamente a Rosas.

Uno de los grandes problemas de sus opositores fue precisamente que no lograron —ni tampoco parecen haberlo procurado activamente— el favor po-

pular, ni en la ciudad ni en la campaña. Varios de ellos habían pertenecido en la década previa al Partido Popular, cuya relación con la plebe se había logrado fundamentalmente a partir de la figura de Dorrego y, muerto éste, el favor popular pertenecía a Rosas.

Después de la definitiva ruptura entre los dos sectores federales, los apostólicos recibieron instrucciones por correspondencia de su líder, pergeñadas en un lejano campamento instalado junto al río Colorado. Se referían en particular a cómo mantener de su lado a las clases populares de la provincia. Rosas recomendó que siempre se hablara de él como el Padre de los pobres (sobrenombre que antes había recibido Dorrego) y como el Restaurador de las Leyes (designación que había recibido en 1829). Pidió que se esparciera la noticia de que “una logia” quería acabar con él y que si no se colgaba a un buen número de miembros de ese sector iban a retornar los horrores y la sangre (la memoria de los conflictos civiles estaba muy fresca). Mencionar a una logia no era algo azaroso: el nombre resultaba odioso para buena parte de la población porteña desde la década revolucionaria, porque remitía a los sectores que dirigieron el poder en forma secreta durante esos años, específicamente las dos versiones de la Logia Lautaro que encabezaron el poder: una hasta 1815, dirigida por Carlos de Alvear, y otra desde 1816, liderada por Juan Martín de Pueyrredón (ambas fueron sumamente impopulares en la ciudad y la

campaña). Asimismo, Rosas aconsejó que no había que olvidar la invocación federal cuando se hablaba a los paisanos, puesto que “el nombre que hoy nos corresponde es el siguiente: Federales Apostólicos. Es largo pero peor será que por seguir sólo el segundo vengamos a perder el primero, y a causar un enrede contra de la causa”; no hay que olvidar que ambas facciones eran federales y que esa filiación era muy fuerte entre las clases populares. Por ello, su intención era privar de la identidad federal a los contrarios e igualarlos con los viejos enemigos. “A los cismáticos debe decirseles decembristas unitarios”, porque si sólo se los denominaba cismáticos equivaldría a “confesar que son federales, y en esto darle lo que no les corresponde con perjuicio de nuestra causa, puede desde que ellos han desertado de ella y protegido a los decembristas unitarios con perjurio de los federales restauradores, es claro que ya no deben llamarse federales” (Rosas profundizaría más tarde esa identificación entre todo aquel que se le opusiera con el unitarismo, identificación que constituiría uno de los rasgos clave de su política). Lo que se desprende de este mensaje es la importancia que le brindaba a la participación popular, puesto que invertía mucha energía en asegurarla a su favor. Cuidó, por ejemplo, la relación con los morenos: envió decir a Encarnación y a María Josefa que hablaran con las madres de los negros libertos que estaban bajo sus órdenes en la expedición contra los indios para que les comunica-

ran “que están muy hombres de bien y valientes”, y que pronto volverían a sus casas a ser felices “para que nadie se meta con ellos y trabajen libremente”.

De todos modos, Encarnación había empezado a mover sus nexos sin esperar pautas de su marido. Ante la tibieza de otros líderes apostólicos se dispuso a preparar gente para las elecciones que el gobierno debía llamar antes de fin de año, dada la suspensión de las de junio, y para pasar a la acción violenta si lo consideraba necesario; si no lo hacía era porque quería esperar el visto bueno de Rosas al respecto. Afianzó su relación con tres personajes, rosistas fanáticos, que serán importantes en esta narración de aquí en adelante: Andrés Parra, Ciriaco Cuitiño (ambos ya mencionados) y Julián González Salomón. Los dos primeros conducían dos partidas celadoras de vigilantes a caballo, que eran una suerte de cuerpos excepcionales de la Policía puesto que gozaban de bastante autonomía respecto del jefe de ésta. Como con el correr de los meses la tensión entre las facciones se fue agudizando, el gobierno decidió en septiembre disolver estas partidas y así privar a los apostólicos de dos cuerpos armados.

Sin embargo, a Balcarce le costaba controlar la situación. El 1° de septiembre, Encarnación le escribió a su marido para proporcionarle información acerca del aumento de la tensión política y de que “la mayoría de casaca tiene miedo”; se refería al círculo

dirigente de los apostólicos, puesto que la casaca, como la levita y el frac, eran prendas exclusivas de los sectores pudientes. En cambio, sostenía que “los pobres están dispuestos a trabajar de firme”. En los días siguientes hubo una ola de robos en la ciudad, que quizá fuera promovida por los apostólicos para causar descontento pero que más probablemente obedeciera al enrarecimiento de la escena política, fenómeno que habitualmente daba lugar en Buenos Aires a un incremento delictivo. No fue el único hecho llamativo: las casas de dos editores de periódicos apostólicos, Pedro de Ángelis y Nicolás Mariño, fueron atacadas por desconocidos a comienzos del mismo septiembre; además, la noche del 16 una patrulla de vecinos fue agredida por un grupo de veinte hombres armados sin motivo aparente, en lo que parecía una contribución a desestabilizar la situación. La violencia empezó a apoderarse de la ciudad. El 12 del mismo mes, Encarnación había vuelto a enviar una carta a Rosas, en la que le comunicó su convicción de que iban a triunfar en las elecciones que se avecinaban y le explicaba que si por alguna razón empezaban a perder en alguna parroquia “se armará bochinche y se los enviará al diablo a los cismáticos”. A continuación explicitaba la red política que había ido armando por fuera de la elite, al decir que “las masas están cada día mejor dispuestas y lo estarán mejor si tu círculo no fuera tan cagado”. Ella se mostraba partidaria de la acción: “Yo les hago

frente a todos y lo mismo me peleó con los cismáticos que con los apostólicos débiles, pues los que me gustan son los de hacha y chuza”.

Durante septiembre y el comienzo de octubre, la disputa entre los federales en la prensa se hizo muy fuerte. Los periódicos de ambos bandos se enredaron en una escalada de ataques contra las figuras principales del sector rival, que incluían incursiones en las vidas privadas. Encarnación le escribió a su esposo que “esta pobre ciudad no es ya sino un laberinto; todas las reputaciones son el juguete de estos facinerosos”, y con indignación profetizaba: “Todo, todo se lo lleva el diablo, ya no hay paciencia para sufrir estos malvados y estamos esperando cuándo se matan a puñaladas los hombres en las calles”. Hubo intentos de negociar cierta moderación entre dirigentes de las dos facciones —no Encarnación, por supuesto, que era partidaria de una intransigencia total— pero no fueron acompañados por el éxito. Finalmente el gobierno decidió intervenir, y para mostrar una neutralidad que a Balcarce le era ya muy difícil transmitir (puesto que todos creían que estaba a favor del grupo liberal o cismático), organizó un juicio contra algunos periódicos de las dos tendencias, para ver si habían abusado de la libertad de imprenta. Uno de los citados fue *El Restaurador de las Leyes*, el más virulento de los periódicos apostólicos.

Encarnación y sus acólitos aprovecharon la oportunidad para generar confusión: propagaron la noti-

cia de que se iba a juzgar al “Restaurador de las Leyes” sin aclarar que se trataba del periódico. Muchos se convencieron de que el enjuiciado iba a ser Rosas y el 11 de octubre por la mañana, cuando el editor del periódico debía concurrir al edificio del antiguo Cabildo a hacer su descarga, una multitud considerable se congregó frente a sus arcos en la Plaza de la Victoria; varias figuras de la segunda línea apostólica estaban allí, como Parra y Cuitiño. Alguien gritó vivas al Restaurador de las Leyes y se armó una gritería que la Policía buscó disuadir sin mucho entusiasmo. De pronto, unas trescientas personas conducidas por Cuitiño y otro férreo rosista, el comandante José María Benavente, abandonaron la plaza y se dirigieron hacia las afueras de la ciudad. Cruzaron el Riachuelo y se detuvieron en Barracas al Sur (actual Avellaneda), adonde pronto se dirigieron muchos otros a unírseles. El gobierno no supo cómo responder a la situación: primero envió al general Pinedo a parlamentar, pero éste se pasó a los disidentes. Luego hubo diversas iniciativas para luchar o resistir, pero todo quedó en la nada; incluso Balcarce convocó a Rosas —que no había tenido nada que ver con el suceso— para que le pusiera fin, pero el líder apostólico se negó alegando que la causa era justa. Los rebeldes, que adoptaron el nombre de restauradores, se movieron con rapidez: recibieron la adhesión de casi toda la campaña y al poco tiempo la ciudad estaba sitiada.

La dirección de las operaciones, como no podía ser de otra manera, estuvo en buena medida en manos de Encarnación Ezcurra. Unos días después del comienzo del levantamiento le escribió a uno de los colaboradores de Rosas que constantemente recibía comunicaciones por parte de “los jefes de la línea de afuera”. Estaba segura de la victoria, que finalmente se produjo cuando Balcarce se dio cuenta de que no podía mantenerse y renunció al gobierno. Encarnación estaba exultante: “Estoy familiarizada con esta clase de ocupación y correspondencia, que me hallo capaz de dirigir todas las oficinas del Fuerte. Ya le he escrito a Juan Manuel que si se descuida conmigo, a él mismo le he de hacer una revolución”.⁴

V. Donde se consignan los atentados nocturnos ocurridos en la ciudad y la formación de un club de partidarios fanáticos de Juan Manuel de Rosas

Los restauradores entraron victoriosos en la ciudad el 7 de noviembre, menos de un mes después del comienzo de la revolución. El mote que adoptaron en esa oportunidad ya existía antes, pero desde entonces los identificó más que el de apostólicos (aunque éste siguió usándose). Ese nombre marcaba la participación popular: si antes había habido un restaurador de las leyes ahora habían sido muchos los que la habían hecho, era una restauración colectiva.

Esa sensación mantuvo la agitación popular contra los derrotados y en contra de todo lo que no fuera claramente rosista. El 11 de noviembre la quinta de Balcarce, en las afueras de la ciudad (Barracas), fue atacada y saqueada por un grupo. Poco después, la noche del 15, hombres a caballo balearon las fachadas de las casas de dos cabecillas cismáticos, los generales Olazábal e Iriarte, así como la residencia del ex ministro Ugarteche. El primero se fue enseguida a Montevideo, y las nuevas autoridades le sugirieron al general Martínez que hiciera lo mismo porque no podían garantizar su seguridad.

Estos hechos y la movilización popular alarmaron a los referentes apostólicos (a la vez, las épocas de conmoción política generaban otros episodios de acción popular: varios meses después de los hechos, la Policía descubrió a un esclavo encadenado y con fuertes marcas de rebencazos en su cuerpo, que su amo dijo haberle aplicado “porque fugó en la época de los sucesos de octubre”). La dirigencia apostólica propiciaba el orden y la moderación ante el nuevo gobierno, aunque éste no reflejaba su triunfo totalmente. La Legislatura había elegido como gobernador a Juan José Viamonte —quien ya había ejercido el cargo interinamente en 1829— con los votos de los federales liberales y los representantes que se habían mantenido medianamente neutrales en la contienda. Los rosistas habían votado por otro candidato (el general Pinto), hecho que Rosas no

aprobó al enterarse, puesto que le quitaba influencia sobre el nuevo mandatario. Sin embargo, los apostólicos no veían mal la política conciliatoria de Viamonte y percibían la situación como favorable: el jefe de Policía había sido reemplazado por un miembro de su facción, Lucio Mansilla; Parra y Cuitiño habían sido reinstalados en sus puestos de conductores de las partidas de vigilantes; la lista que los federales iban a presentar en las elecciones que finalmente se realizarían era única, y estaba dominada por figuras claramente apostólicas. Pero un miembro de la facción no compartía esa mirada. Se trataba, otra vez, de Encarnación Ezcurra. Para ella la elección de Viamonte sólo significaba cambiar a alguien malo por alguien ligeramente mejor, que no era amigo de Rosas ni iba a serlo jamás. Encarnación promovió la intransigencia y se dispuso a aprovechar la movilización popular, a la que no sólo no temía sino que incluso promovía, para desestabilizar a la nueva administración.

Uno de los líderes apostólicos, Manuel Maza, decidió solicitar a Rosas que obligara a su mujer a desistir de la beligerancia. Refiriéndose al levantamiento de los restauradores, le escribió que “tu esposa es la heroína del siglo: disposición, valor, tesón y energía desplegada en todos casos y todas ocasiones; mas si entonces tuvo una marcha expuesta, de hoy en adelante debe ser más circunspecta, eso es menos franca y familiar”. Unos días después, visible-

mente más preocupado, le comunicaba a Rosas que pese a que había algunas medidas de Viamonte que no eran acertadas “no merece la pena de alzar el grito”, como hacía Encarnación, y que él “quisiera ver cuanto antes fuera de la ciudad a mi comadre. Abunda en relaciones que la confundirán con cuentos, y con pretensiones”. La alusión era a la gente de baja jerarquía social con la que ella se relacionaba y a “la turba de comisarios y asistentes” con la que tenía un vínculo permanente. “Desearía que le demarcases alguna línea de conducta, para adelantar y no perder”, solicitaba Maza. Su crispación era triple: política, porque no acordaba con hostilizar al nuevo gobierno; social, dado que prefería desmovilizar a los rosistas de baja condición (de cuyo accionar la mayoría de la elite nunca estaba segura); y de género, porque le irritaba la importancia de una figura femenina con la que no sabía muy bien cómo lidiar.

Sin embargo, Rosas no intentó detener a su mujer. Por el contrario, ahora también él se decidió —no explícitamente, pero sí al no decir nada en contra— por el hostigamiento de un gobierno que propugnaba la conciliación de los partidos. Para Rosas eso no era ya posible, no quedaba lugar para el consenso. A fines de noviembre le escribió a Encarnación para encargarle que felicitara en su nombre a cada uno de los que habían cumplido una actuación destacada en el derrumbamiento del gobierno de Balcarce. También le dio instrucciones. “Ya has

visto lo que vale la amistad de los pobres y por ello cuánto importa el sostenerlo para atraer y cultivar sus voluntades.” Rosas buscaba aprovechar nuevamente la adhesión popular como arma fundamental de apoyo para sus planes políticos. “No cortes pues sus correspondencias. Escríbeles con frecuencia, mándales cualquier regalo, sin que te duela gastar en esto. Digo lo mismo respecto a las madres y mujeres de los pardos y morenos que son fieles. No repares, repito, en visitar a las que lo merezcan y llevarlas a tus distracciones rurales, como también en socorrerlas con lo que puedas en sus desgracias. A los amigos fieles que te hayan servido déjalos que jueguen al billar en casa y obséquialos con lo que puedas.” Como se ve, un excelente manual para un líder popular del siglo XIX.

De todos modos, Encarnación no necesitaba esas indicaciones. Ella continuaba con el acoso y seguía los lineamientos que se había trazado: alianza estrecha con rosistas decididos de media y baja condición social; desconfianza hacia los dirigentes apostólicos, varios de los cuales —como Arana y Anchorena— se habían alejado de la escena política durante la Revolución de los Restauradores, acrecentando ese recelo. El 4 de diciembre le envió una carta a su esposo en la cual le decía que “no se hubiera ido Olazábal, don Félix, si no hubiera yo buscado gente de mi confianza que le han baleado las ventanas de su casa, lo mismo que las del godo Iriarte y el facineroso

Ugarteche, esa noche patrulló Viamonte y yo me reía del susto que se habrían llevado”. A partir de entonces iban a ocurrir varios atentados contra los que habían sido cismáticos, y también contra los antiguos unitarios.

Pero aquí necesitamos detener el relato y centrarnos en esa gente de confianza de Encarnación Ezcurra. ¿Quiénes eran? No sabemos los nombres de quienes dispararon contra los domicilios de los cismáticos, aunque podemos adivinar entre ellos a Cuitiño, Parra, Benavente... los rosistas a ultranza que habían liderado el desencadenamiento de los acontecimientos de octubre y mantenían una relación muy cercana con la mujer de Rosas (en enero de 1834, Parra y Cuitiño le comunicaron al Restaurador que nunca darían un paso “sin estar de acuerdo con nuestra señora doña Encarnación”). La dirigente rosista más extremista contaba entonces con un grupo de choque.

Ahora bien, los restauradores más exaltados no pasaban a la acción sólo por indicaciones de la impetuosa esposa de su líder. Lamentablemente, cuando los historiadores pretendemos conocer al mundo popular encontramos grandes limitaciones para hacerlo, por la falta de documentos. Pero en esa oportunidad podemos inferir que había muchos que estaban decididos a actuar contra los enemigos de Rosas y que encontraron un aliciente en la tutela de Encarnación Ezcurra. No fue ella la que inventó la

movilización, lo que hizo fue aprovecharla y estimularla. ¿Qué motivaba la participación de estos fogosos adherentes? Posiblemente hubo razones diversas y combinadas. Una de ellas podía ser la voluntad de ascender en las consideraciones de Rosas para así lograr una buena posición si él regresaba al poder; pero existía también una fuerte identidad federal que para muchos se había transformado en un eje vital.

Ésas fueron las condiciones para el surgimiento de una agrupación de rosistas fanáticos. Lo que hizo Encarnación fue organizar la voluntad de varios individuos, de quienes hablaremos en breve, para actuar a favor de la causa federal restauradora. No conocemos exactamente el proceso de conformación de esa asociación, porque no hay documentos al respecto. El único testimonio, que es verosímil, sostiene que un tal Tiburcio Ochoteco, protegido de Encarnación, “le propuso organizar una especie de club en el que entraría sólo lo más brutal y ciegamente decidido del partido de Rosas”. El objetivo sería actuar a favor de “la elevación de Rosas y para aterroizar a sus enemigos”. Encarnación aceptó y con su patrocinio se formó el club. La fecha no está clara, pero probablemente fue en noviembre o diciembre de 1833. El nombre que se adoptó fue el de Sociedad Popular Restauradora.⁵



Gente de rojo

I. Donde se explican las características de la Sociedad Popular Restauradora y de la Mazorca, así como las diferencias entre ellas

El largo período del segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, que corre entre 1835 y 1852, se hace muchas veces confuso cuando leemos sobre él: luchas feroces, levantamientos constantes, intervenciones europeas, bloqueos, sitios, asesinatos, fusilamientos, degüellos, exhibiciones de cabezas cortadas, batallas tan numerosas que se pierden en la memoria. La política marcada a fuego por la violencia. Mucha violencia. Por

momentos, la imagen que obtenemos es la de un caos, que se profundiza cuando los ojos se posan en Buenos Aires y encuentran a un conjunto de nombres que se mezclan y son todos importantes: Sociedad Popular Restauradora, Mazorca, celadores, serenos, vigilantes, milicianos, soldados y oficiales del ejército de línea, alcaldes, tenientes alcaldes, jueces de paz... Tratemos de dar un poco de orden a este calidoscopio.

La Sociedad Popular Restauradora fue un club de adherentes fervorosos de Rosas, dispuestos a la acción a su favor. Como vimos, se fundó con el auspicio de Encarnación Ezcurra a la propuesta de Tiburcio Ochoteco (hay quien asegura que en realidad el ideólogo fue José Rivera Indarte, un entusiasta rosista que después se convertiría en un vehemente antirrosista). Al principio se trató de un grupo reducido. Su primer presidente fue aparentemente Pedro Burgos, que era teniente coronel de la milicia de la campaña y colaboraba con Rosas desde hacía años; en 1832 había fundado el fuerte de San Serapio Mártir —origen del pueblo de Azul— en la frontera con los indígenas. Burgos no duró en el cargo, probablemente porque como desempeñaba sus funciones en la campaña no podía hacerse cargo de una organización que operaba en la ciudad. Fue reemplazado por el vicepresidente, el pulpero Julián González Salomón. Según Rivera Indarte, la Sociedad nunca tuvo un reglamento; José María Ramos Me-

jía, en un libro sobre Rosas publicado en 1907, citó la existencia de uno, al que desde entonces nunca se halló, y es posible que no hubiera tal reglamento.

La idea de Ochoteco tenía un modelo: las sociedades patrióticas que conoció en Cádiz, España, ciudad en la que vivió durante la revolución liberal de 1820. Cádiz contaba con una tradición política importante: en 1808 los franceses habían obligado al rey español Fernando VII a abdicar y habían instalado en su trono al hermano del emperador Napoleón Bonaparte, José. La respuesta española fue una serie de insurrecciones populares que combatieron a los franceses y formaron juntas, las que a su vez se agruparon en una Junta Central ubicada en Sevilla. En 1810, Napoleón invadió exitosamente el sur de España y ocupó todo su territorio, con la excepción del puerto de Cádiz, protegido por la flota inglesa; en esa ciudad se congregaron las Cortes españolas que en 1812 sancionaron una Constitución. El regreso del absolutista Fernando VII al trono en 1814, con la derrota de Napoleón, terminó con el experimento constitucional, pero en España —y en Cádiz en particular— quedaron muchos liberales. El rey Fernando buscó infructuosamente recuperar sus dominios americanos, que habían comenzado un proceso de autonomización cuando él fue apresado por los franceses y que ante la intransigencia de los partidarios del monarca se volcaron cada vez más decididamente a favor de la independencia absoluta. A

partir de 1815, el rey consiguió reestablecer su dominio sobre buena parte del territorio americano, con la excepción del que había sido el Virreinato del Río de la Plata. En 1818, entonces, comenzó a organizar en Cádiz una gran expedición contra Buenos Aires, principal foco revolucionario rioplatense, pero los preparativos se fueron dilatando (el ministro de Marina que la impulsaba era Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien había sido el último virrey del Río de la Plata). La expedición no se realizó nunca: cuando al comenzar 1820 el embarque de las tropas se hizo inminente, algunos oficiales liberales levantaron en armas a una parte del ejército que iba a partir y reclamaron el reestablecimiento de la Constitución. El pronunciamiento fue secundado por muchos otros en diversas ciudades españolas y Fernando VII se vio obligado a aceptar el reclamo. Se inició así un período que pasó a la historia como “el trienio liberal”, porque al término de tres años un ejército francés volvió a invadir la Península, derrotó a los liberales y restituyó al rey en su trono; Fernando abolió la Constitución.

Las sociedades patrióticas eran clubes liberales que surgieron en 1820, algunos más radicales y otros más moderados, que reunían a sus adherentes en casas, tabernas o conventos desocupados. Se esparcieron por toda España, llegando a haber doscientas setenta. Su objeto era abogar por la difusión del liberalismo y atemorizar a sus enemigos. Estaban di-

rigidas generalmente por personas de buena posición social pero contaron con una importante participación popular, principalmente de artesanos. En Cádiz, uno de los lugares más convulsionados de España en esos años, tuvieron mucha importancia. La existencia de los acontecimientos peninsulares, y por lo tanto la aparición de esas sociedades, eran bien conocidos en Buenos Aires. Por ejemplo, en España se utilizó en esa época el mote "pastelero" para llamar a los moderados; el mismo fue empleado por Encarnación Ezcurra para referirse a sus aliados más tibios antes de la Revolución de los Restauradores. Cuando en 1835 Juan María Gutiérrez describió la participación de la Sociedad Popular Restauradora en un acto público, la relacionó con los "anilleros" españoles. Éstos formaban una de esas sociedades del trienio liberal, que se caracterizaba por el uso de un anillo con el cual se identificaban sus miembros.

Buenos Aires no había albergado hasta entonces sociedades políticas de este tipo. En 1811, los seguidores de la orientación revolucionaria del recientemente fallecido Mariano Moreno habían formado una suerte de club que funcionaba en un café (el Café de Marco) y que fue al poco tiempo disuelto por la Junta de Gobierno. En ese club los integrantes eran hombres jóvenes de la elite porteña; no incluían ni fomentaban la participación popular. Lo mismo sucedía en otro que se organizó en 1812 con el nombre de Sociedad Patriótica, y con el objetivo

de impulsar los cambios revolucionarios y la independencia rioplatense. Esa organización en principio abierta —a todo aquel que fuera letrado— dio paso a otro tipo de club que se impuso entre la dirigencia revolucionaria: la sociedad secreta. La Logia Lautaro, de inspiración masónica e introducida en Buenos Aires por oficiales llegados de Londres como Carlos de Alvear y José de San Martín, absorbió a la Sociedad Patriótica y se convirtió en la conductora del gobierno hasta 1815; tras una crisis, volvió a hacerlo entre 1816 y 1820. Ese tipo de sociedad secreta, que también fue exclusiva para la elite, se volvió algo muy mal visto por los porteños después del derrumbe del sistema revolucionario. En la década de 1820 aparecieron otras asociaciones, como una literaria o las sociedades africanas —que agrupaban a los negros de acuerdo con sus etnias de origen con fines de asistencia mutua y de facilitar la liberación de los esclavos— pero no se formó ninguna abiertamente política, ni tampoco secreta (de todos modos, algunas de las sociedades africanas actuaron políticamente, movilizándose para votar en las elecciones).

La creación de la Sociedad Popular Restauradora fue, por lo tanto, una novedad en la escena política de Buenos Aires. Por un lado, porque era un club que se afiliaba abiertamente con una facción, algo que antes se intentaba evitar explícitamente (dada la condena discursiva a las facciones en la prensa y en los debates parlamentarios desde 1810.) A la vez, la

Sociedad Popular tenía un importante elemento distintivo: la presencia entre sus integrantes de individuos que no formaban parte de la elite de Buenos Aires. Rivera Indarte dijo que “muy pocas personas decentes se inscribieron como socios de la Sociedad”. Es decir que era la primera vez que la gente decente no era mayoría en una asociación política. Esto era claro en la adopción del término popular en el nombre de la organización. A partir de su edición de 1803, el diccionario de la Real Academia Española definía popular como “el que es del pueblo o de la plebe”. Desde la década de 1820, en Buenos Aires se lo usaba cada vez más claramente para referirse a los que eran ajenos a la elite. La participación de ese tipo de personas en la Sociedad la asemejaba a los ejemplos españoles de principios de la década de 1820. Ahora bien, si Ochoteco sugirió ese modelo y Encarnación Ezcurra lo aceptó, su éxito obedeció a la existencia de una tradición de participación popular en Buenos Aires. Los momentos en que la intervención de la plebe y los sectores medios de la sociedad porteña en la política tuvo más importancia fueron siempre aquellos en los cuales la elite estuvo más dividida. Ése fue el caso con la disputa entre federales liberales y federales apostólicos, y la Sociedad Popular Restauradora fue una de las consecuencias de ella. Más adelante nos ocuparemos de describir a algunos de los socios; aparentemente no eran muchos en un principio y es posible que para entrar hu-

biera que ser recomendado por alguno de los integrantes. Al menos así era años más tarde. En 1840, el presidente Salomón seleccionaba minuciosamente las candidaturas a ingresar.

La actividad política rutinaria de la Sociedad consistía en reuniones de los miembros que se llevaban a cabo en una sede. No es claro dónde estaba al principio, puede haber sido una casa frente a la iglesia de San Miguel o haber tenido locaciones rotativas. Después de un tiempo se instaló en la pulpería de su presidente, ubicada en la esquina de las calles Corrientes y del Cerrito, en diagonal a la iglesia de San Nicolás (que se encontraba donde hoy se levanta el Obelisco). Los otros menesteres del club eran principalmente dar muestras de apoyo a Rosas en distintos contextos: gritaban a su favor en las calles, importunaban a sus enemigos, concurrían a la Sala de Representantes a presionar a los antirrosistas. Su componente popular los hizo chocar en sus primeros tiempos con algunos federales: en una oportunidad insultaron a Nicolás Anchorena, un rico hacendado que pertenecía al grupo apostólico pero tenía una participación secundaria en la escena política (a diferencia de su hermano Tomás). El episodio muestra las diferencias que existían entre la dirigencia apostólica que apostaba a la moderación, formada por los Anchorena, Arana y Maza, y los ro-sistas que seguían a Encarnación Ezcurra, partidarios de acciones directas para lograr el regreso de Rosas

al poder. Su plan era que Viamonte renunciara y que el general Pinedo (que tuvo un rol destacado en la Revolución de los Restauradores) fuera nombrado gobernador delegado hasta que concluyera la campaña del desierto, y así el líder pudiera regresar. Maza le escribió a Rosas para que desestimulara esa posibilidad, pidiéndole que le marcara la conducta a seguir a Salomón y a otros impulsores de esa idea.

Pero los estremecimientos políticos continuaron más allá de las acciones de la Sociedad Popular Restauradora. Los acontecimientos que desembocaron en la caída de Balcarce habían legado un clima de inestabilidad en la ciudad. Un nuevo sacudimiento ocurrió el 28 de abril de 1834, cuando Rivadavia —figura clave del partido unitario— desembarcó en Buenos Aires después de varios años de ausencia. Al correr la noticia, según le notificó Arana a Rosas, “se sintió en el pueblo una gran agitación de que informó al Gobierno el Jefe de Policía asegurándole que no respondía de la tranquilidad pública”, por lo cual se le ordenó a éste que lo hiciera reembarcar. Rivadavia estuvo sólo cinco horas en la ciudad. A la noche siguiente “dos grupos de hombres a caballo se presentaron uno sobre la casa del Ministro García y otro sobre la de Vidal, e hicieron varias descargas que pusieron en consternación a toda la ciudad”. El canónigo Pedro Vidal estaba ligado a los federales liberales o cismáticos, mientras que Manuel García era un veterano de la política porteña: había sido minis-

tro de Hacienda del Partido del Orden en la primera mitad de la década del '20 y otra vez durante el primer gobierno de Rosas (había sido también el autor del primer tratado de paz con el Brasil, que le entregaba la Banda Oriental a ese imperio y que tras ser rechazado causó la caída del presidente Rivadavia, en 1827). Un ataque contra este ministro —que sorprendió a Arana— marcaba un rechazo a la política de conciliación del gobierno de Viamonte, que procuraba retornar a las épocas más calmas en las que García había dirigido la economía porteña. La oposición a esas intenciones era la del grupo que respondía a Encarnación, la responsable de los atentados. “Tuvieron muy buen efecto los balazos que hice hacer el 29 del pasado”, le escribió ella a su marido, “pues a eso se ha debido se vaya a su tierra el facineroso canónigo Vidal”. Su tierra era la Banda Oriental, donde desde hacía años se encontraba la mayoría de los unitarios que se habían exiliado y que ahora se estaba volviendo un refugio para los federales antirrosistas. La desestabilización surtió efecto y al poco tiempo, en junio, Viamonte renunció (coincidiendo con el final de la exitosa “campana del desierto” comandada por Rosas).

Es altamente probable que los autores de los disparos que impulsó Encarnación en abril fueran miembros de la Sociedad, aunque no los hicieron en nombre de ésta. Estas acciones, y las similares del año anterior, constituyeron el inicio de las actividades

que luego serían propias de una parte de la Sociedad Popular, que pasaría a la historia como la Mazorca. De hecho, la primera muerte ligada con el grupo tuvo lugar durante esos eventos de abril. Cuando la casa de García fue atacada, en ella se llevaba a cabo una tertulia. Uno de los concurrentes era un joven llamado Enrique Bedlam —sobrino de Manuel Moreno, un federal rosista— quien salió a la calle para recriminar a los agresores. Uno de ellos le disparó, causándole la muerte.

El asesinato nos permite marcar las diferencias entre la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca. Algunos contemporáneos siempre las consideraron una sola entidad, lo cual se debe a que en un principio eran lo mismo. El enigma del significado de “mazorca” contribuyó a la confusión. Una de las versiones sobre la aplicación de ese término indica que al enterarse Rosas de la invención de la Sociedad, le envió a sus integrantes una mazorca de maíz como regalo, y ella se convirtió en su símbolo a través de un uso muy concreto: servía como elemento para introducir en el ano de los enemigos. Ése es el sentido que más contemporáneos asignaron al nombre “mazorca”. Hubo quien en cambio sugirió un significado más poético: que los granos apretados de la mazorca significaban la unión de los federales. Otros creían que el nombre auténtico era “más-horca”, una amenaza contra los opositores de Rosas. No es posible saber cuál fue la acepción exacta, o si “ma-

zorca" condensaba todas estas posibilidades. Lo cierto es que con el tiempo ese nombre se empezó a aplicar a una especie de brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora.

La separación entre ambas, de todos modos, tardó bastante en producirse. Tras la caída de Viamonte, la Sociedad no protagonizó escenas de violencia y se dedicó más que nada a realizar celebraciones para exponer la adhesión a su líder. El 11 de octubre de 1834 una multitud se reunió para festejar el aniversario de la revolución del año anterior. Se hicieron presentes el jefe de Policía Mansilla, el general Pinedo y el gobernador provisorio que había reemplazado a Viamonte, Manuel Maza; la Legislatura había elegido a Rosas, que ya había concluido su campaña contra los indígenas, pero éste no aceptó porque no le daban facultades extraordinarias, por lo cual el cargo terminó siendo ocupado interinamente por el presidente del cuerpo legislativo, que en ese momento era Maza. El centro de la fiesta lo ocupó la Sociedad Popular Restauradora, que concurrió al acto después de reunirse en la casa de uno de sus miembros más destacados, Martín Santa Coloma.

Los anhelos de la Sociedad se cumplirían unos meses más tarde, cuando finalmente Rosas fue elegido gobernador. Más de dos años de zozobras llegaban así a su fin, a causa de una nueva conmoción: el asesinato del riojano Facundo Quiroga. El caudillo

federal se encontraba en Buenos Aires y le fue encomendada una misión mediadora entre los gobernadores de Salta y Tucumán. Al volver de ella fue atacado en Córdoba por una partida que le dio muerte, por encargo de los Reinafé, familia federal que manejaba por entonces los destinos de esa provincia y estaba enemistada con Quiroga. La noticia llegó a Buenos Aires en marzo de 1835 y generó un gran miedo entre la elite porteña, temerosa de que regresaran los malos vientos de la guerra civil. Para evitarlo, los representantes se resignaron a otorgarle a Rosas lo que éste pedía, y que hasta ese momento incluso algunos legisladores partidarios del Restaurador se negaban a darle para no destruir el sistema institucional: las facultades extraordinarias, que implicaban la posibilidad del gobernador de no respetar las garantías individuales si así lo consideraba necesario. Le dieron más aún: la suma del poder público; a partir de entonces, Rosas podía cumplir funciones legislativas y judiciales junto a las ejecutivas. Sólo se le encargó defender la religión católica y sostener la causa federal. El Restaurador quiso refrendar su victoria en las urnas y convocó a un plebiscito en la ciudad; nadie se atrevió a dudar del gran apoyo con el que contaba en la campaña bonaerense, que se suponía unánime (aunque no era totalmente así, era más sólido que el de la ciudad). El plebiscito se realizó a fines de marzo y confirmó con más de nueve mil votos a favor una fuerte adhesión;

sólo una decena de personas votó en contra (los opositores se inclinaron por la abstención).

La Sociedad Popular Restauradora estuvo movi-
lizada en ese mes de marzo y luego tuvo un rol pro-
tagónico en los festejos por la asunción de Rosas, el
13 de abril de 1835. La concurrencia fue extraordi-
naria, los balcones desbordaban de gente que cele-
braba ruidosamente el regreso al poder del hombre
fuerte de la provincia; telas rojas colgaban por do-
quier. La Sociedad Popular se mostró exultante:
veinticinco de sus miembros desataron los caballos
del carruaje que traía al nuevo gobernador y lo
arrastraron ellos mismos tirando de cuerdas rojas. Ese
día los socios afirmaron algo que venían acentuan-
do paulatinamente: se presentaron vistiendo chale-
cos colorados, principal símbolo federal, y todos
luciendo bigotes. Como algunos no los tenían natu-
rales, usaron bigotes postizos (de tafetán o directa-
mente pintados). Esto no fue meramente un hecho
pintoresco. La adopción del bigote como distintivo
federal —que evidentemente fue una invención de
ese momento, puesto que algunos rosistas fanáticos
no habían hecho a tiempo de dejárselo crecer—
marcaba un hito en la conformación de una opinión
unánime, que fue uno de los principales objetivos de
Rosas en su segundo gobierno. El mandatario alen-
tó entonces ciertas iniciativas, como ésta, que muy
probablemente no fuera sugerida por él sino por la
misma Sociedad, que se diferenciaba así del uso de

la cara despejada que supuestamente distinguía a los unitarios. El uso del bigote mostraba la identificación del federalismo con lo popular, a lo cual se sumaba la adopción del poncho y la chaqueta como trajes genuinamente federales y la desconfianza que generaba la levita, la prenda distintiva de la elite.

Ahora bien, Rosas, Arana, Maza, Anchorena y otros referentes apostólicos estaban en el centro de la elite de Buenos Aires, no usaban bigote y rara vez se ponían un poncho. Sin embargo, pese a tener entre sus dirigentes a riquísimos estancieros, como los Anchorena y el propio Rosas, el federalismo se planteaba como popular y enfrentado a los “aristócratas”, epíteto que se aplicaba no tanto a los que tenían dinero como a los encumbrados que se mostraban distantes u hostiles al resto de la sociedad, como habían hecho los unitarios en los años '20. El otro adversario en la consideración popular eran los “extranjeros”, que también fueron asociados popularmente con los unitarios, porque éstos mostraban un carácter europeizante y mantenían buenas relaciones con las potencias del Viejo Continente. En las poblaciones de esa época, todos los forasteros despertaban cierto recelo hasta que se instalaban (se “avecindaban”) y comenzaban lentamente a integrarse con los habitantes del lugar. En Buenos Aires esto ocurría con cualquiera que quisiera vivir en ella, fuera oriundo de la campaña circundante, de alguna provincia rioplatense o de otro país americano. Pero la

mayor animosidad era hacia los europeos. Los españoles generaban un odio especial, producido en años de tensiones en la época colonial y exacerbado por la guerra de la Independencia, aunque los que todavía residían en la ciudad en los años '30 no eran ya hostilizados (no obstante, el insulto "godo", con el cual se despreciaba a los peninsulares, siguió siendo empleado y era muy injurioso). Con los portugueses, y desde su independencia con los brasileños, había una enemistad fuerte y tradicional. Los franceses, cuya presencia en Buenos Aires era cada vez más importante desde la década de 1820, generaban gran desconfianza, cuyos antecedentes se remontaban a la invasión napoleónica a España y a varios incidentes protagonizados a fines de la década del '10 por algunos ex oficiales bonapartistas arribados al Río de la Plata. Por último, los ingleses concitaban mucho rencor. Por un lado, habían sido enemigos durante todo el siglo XVIII y habían realizado las invasiones de 1806 y 1807; por otro lado no eran católicos, lo cual los convertía en herejes ante la plebe porteña. Su dominio casi total del comercio ultramarino desde 1809 causaba una gran irritación entre varios comerciantes porteños —mucho de ellos pertenecientes a la elite—, al tiempo que la afluencia de sus manufacturas provocaba el profundo resentimiento de los artesanos, que no podían competir con esos precios. Además, el afianzamiento del republicanismo afirmó la antipatía al europeísmo, al identificar-

lo con la monarquía (era el período en el que toda Europa había vuelto a tener reyes). Cuando en 1830 el viajero francés Arsene Isabelle desembarcó en Buenos Aires, los que lo condujeron a la costa —en las incómodas carretas de grandes ruedas que suplantaban la inexistencia de un muelle— lo insultaron con las palabras “gringo” (extranjero que habla mal el castellano), “carcamán” (inútil pretencioso), “godo” y “sarraceno” (usado en la guerra de la Independencia para referirse despectivamente a los españoles: aunaba los sentidos de “moro” y “hereje”).

La Sociedad Popular Restauradora surgió en ese clima, pero se cuidó muy bien de meterse con los extranjeros, a quienes Rosas siempre protegió. Sus enemigos por antonomasia fueron los unitarios, con los que fueron identificando a todos los enemigos del rosismo (como los federales cismáticos). La figura del unitario fue armada con la carga de ser aristócrata, adversario del pueblo, y de ser amigo de los extranjeros. Rosas explotó y estimuló esto, así como aumentó la homogeneidad cromática. Desde septiembre de 1835 todos los escritos oficiales pasaron a estar rubricados con un distintivo colorado. El uso de la divisa punzó, una cinta colorada y ancha de pocos centímetros de largo, era obligatorio para la población porteña desde 1832, el último año del primer gobierno del Restaurador de las Leyes. Sin embargo, la mayor parte de los porteños no cumplía esa medida. A partir de 1835 la presión para respetar

esa obligatoriedad se volvió fuerte. Los hombres lucían la divisa en el pecho o en el sombrero; las mujeres, generalmente en el pelo. Se fue volviendo frecuente el agregar inscripciones al distintivo, como la corriente “mueran los salvajes unitarios” (a veces alargada con otros adjetivos: “asquerosos inmundos”). El celeste, y también por aproximación el verde, identificados con el unitarismo, se volvieron sospechosos. La Sociedad Popular Restauradora se dedicó crecientemente a controlar que el uso del símbolo se cumpliera y a hostigar a quienes llevaran los colores del enemigo. Los socios no protagonizaron escenas de violencia como las que habían realizado en el período inmediatamente anterior —ahora hubieran contrastado con la intención de crear un orden por parte de Rosas— pero sí mantuvieron una alerta para asegurar la unanimidad a favor del líder. El gobernador premió a algunos con puestos en la administración pública y mostró buena predisposición hacia esos entusiastas adherentes.

Todo esto le fue quitando independencia a la Sociedad, fenómeno que se profundizó con el tiempo, en especial después del inicio de la crisis del régimen rosista. Entre 1838 y 1843, el gobierno porteño debió hacer frente a una compleja madeja de conflictos. Fueron los años en los cuales la Sociedad Popular Restauradora y, especialmente, la Mazorca, ganaron celebridad fuera de Buenos Aires. En el próximo capítulo nos ocuparemos largamente de ese com-

plicado período; por el momento sólo nos interesa adelantar cómo esa etapa influyó en el perfil de ambas organizaciones.

Cuando estalló la crisis, Rosas comenzó a darle órdenes directas a su fiel club de adictos, que se volvió cada vez menos espontáneo y por momentos se asemejó a una dependencia del gobierno. Las indicaciones eran principalmente vigilar a personas sospechadas de simpatías unitarias o de oposición al régimen. Las demostraciones de adhesión se hicieron más expresivas y la violencia llenó los discursos y, de a poco, fue ganando otra vez las calles. La tirante situación provocó un aumento de la membresía de la Sociedad Popular Restauradora y cambió su perfil social. Cada vez más, eran individuos de lo más granado de la elite porteña los que solicitaban ser incorporados. Algunos de los nuevos adherentes deben haberse acercado por su convicción en cuanto a las virtudes del gobierno o tocados en su fibra patriótica por la agresión extranjera (el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840). Pero en la mayoría de los casos, la principal causa estuvo seguramente en que con el auge de los conflictos y el consiguiente aumento de la violencia en la ciudad, muchos miembros de la elite de Buenos Aires temieron por sus vidas y bienes, y varios de ellos consideraron que una afiliación a la Sociedad Popular Restauradora podía ser un seguro contra cualquier duda acerca de su fidelidad federal y la gran posibilidad de

sufrir una agresión. A esto apunta un pasaje de *Amalia*, en el que se describe una supuesta reunión de la Sociedad Popular Restauradora. En esta novela, José Mármol hizo una semblanza de la vida política en Buenos Aires durante 1840, cuando todavía el autor, más tarde exiliado en Montevideo por su oposición a Rosas, residía en la ciudad. El héroe del relato se encuentra en el mitin; se trata de un personaje ficticio llamado Daniel Bello, al que Mármol presenta como un antirrosista que se hace pasar por un fanático partidario del gobernador para contribuir desde adentro a desestabilizarlo. Cuando en la asamblea, celebrada en la pulpería del presidente Salomón, se lee el listado de unos doscientos miembros de la organización pertenecientes a “todas las jerarquías sociales”, Bello dice para sus adentros que “en esta lista hay hombres por fuerza”. Ello fue explicitado también por el propio Salomón en una carta a Rosas escrita ese mismo año: “En las extraordinarias circunstancias que sobrevinieron, cuando el traidor asesino Lavalle pisó nuestra provincia muchos ciudadanos se presentaron voluntariamente a inscribirse en la Sociedad”. Ese recurso tenía antecedentes. Desde 1818 la ciudad había albergado un gran temor colectivo, debido a las constantes noticias acerca de la invasión que Fernando VII preparaba en Cádiz. A lo largo de ese año y el siguiente, los españoles residentes en Buenos Aires, procurando no ser objeto del odio de sus vecinos, habían solicitado masi-

vamente la ciudadanía rioplatense y muchos se habían dedicado a sostener a viva voz su oposición al rey.

Por eso, cuando en 1841 *La Gaceta Mercantil* publicó una lista de miembros de la Sociedad Popular Restauradora, una buena parte de ellos pertenecía a familias del patriciado porteño (como Riglos, Iraola, Pereyra, Unzué y Piñeyro, entre otros). Algunos historiadores han tomado este listado para sostener que la Sociedad estaba compuesta tanto por integrantes de la elite como por otros que no pertenecían a ella, mientras que la Mazorca habría sido más plebeya. En cuanto a la primera afirmación, eso fue sin duda así a partir del período crítico. Pero 1840 no era 1833. En los inicios, los socios tenían un origen menos lustroso.

Los mazorqueros —si no todos, al menos sus líderes— eran originalmente miembros de la Sociedad Popular Restauradora, federales decididos. Lo que los convirtió en un ala ejecutora de ella, una entidad separada, fue la reaparición de la violencia política abierta. Después de los atentados encargados por Encarnación Ezcurra en 1833 y 1834, los ataques contra adversarios desaparecieron durante años; existía el antecedente y la amenaza del uso de la violencia que la Sociedad sugería, pero no violencia directa. Ésta retornó, aumentada, con la crisis del rosismo. Ya en 1839 hubo algunos asesinatos, pero sería 1840 el año en el cual los degüellos se hicieron co-

munes en la ciudad, hecho que dio a sus ejecutores una macabra celebridad. Los momentos de mayor violencia fueron los meses del terror: octubre de 1840 y abril de 1842, en los cuales la Mazorca asesinó a unas cuantas personas por su oposición al régimen —real o supuesta—. He ahí lo que distinguió a los mazorqueros: ellos eran miembros de la Sociedad Popular Restauradora, pero los otros socios no cometían asesinatos. Esto por momentos se hace confuso debido a que había integrantes de la Sociedad que podían realizar amenazas públicas de represalias contra los unitarios y los colaboradores de los franceses, o que podían romper los vidrios de una casa o destruir algún objeto o vestuario de color celeste. Pero las muertes eran causadas por un pequeño grupo, que terminó siendo denominado la Mazorca, no sabemos si por sus mismos integrantes, por otros rosistas o por sus enemigos, aunque éstos parecen haber sido los que terminaron achacándole el nombre. ¿Cuántos eran? No es posible saberlo. Seguramente no muchos más que tres decenas, aunque es altamente probable que no fueran un grupo monolítico sino que a un pequeño elenco estable se sumaran en diversas ocasiones otros mazorqueros más periféricos e incluso ocasionales.

Cuando la fama del grupo creció a nivel internacional y se convirtió en el principal elemento de condena hacia Rosas, el gobierno de Buenos Aires se sintió obligado a dar explicaciones. En una publica-

ción que se encargaba de exponer la posición rosista ante el exterior, llamada *Archivo Americano*, Pedro de Ángelis presentó en agosto de 1843 una descarga al respecto en un artículo titulado "La Mazorca". Allí explicitaba lo que sus enemigos decían en Montevideo y en el Viejo Mundo: "Se estremecían las madres al considerar que sus hijos se hallaban en Buenos Aires en contacto con la Mazorca: se preguntaban los amigos con inquietud por la suerte que habían corrido sus compañeros, entregados al furor de la Mazorca: recelaban los comerciantes por sus expediciones que habían tenido la imprudencia de hacer al Río de la Plata, en un momento en que la ciudad de Buenos Aires se hallaba bajo el yugo de la Mazorca; ¡y hasta en la tribuna francesa se deploraban los excesos que había cometido esa terrible y furibunda Mazorca!". De eso se acusaba a Rosas. "¿Qué pensar de un hombre, decían sus detractores, que necesita el apoyo de la Mazorca para mantenerse en el mando, y qué respetabilidad puede tener un gobierno, que llama por auxiliares a los Mazorqueros?" Este es el concepto que se han formado de nosotros". El artículo intentaba mostrar que todo eso era inexacto. "Todo cuanto se ha divulgado sobre la pretendida sociedad de la Mazorca, incluso su nombre, es un embuste." La verdad, sostenía De Ángelis, era que en Buenos Aires había una porción de ciudadanos "adictos al Gobierno, amantes de su país", que en los días de peligro se reunían en acuerdo con

las autoridades y dejaban sus ocupaciones y familias de lado por dedicarse a tareas patrióticas para enfrentar a los perturbadores del orden. Formaban la Sociedad Popular —Mazorca era un nombre que la prensa montevideana le dio “por escarnio”— y habían sido fundamentales para poner fin a los desórdenes en las crisis de octubre de 1840 y abril de 1842, salvando a muchos unitarios. Pero la Sociedad “no es un club, ni una logia: al contrario, esos virtuosos ciudadanos son los enemigos más decididos de las sociedades secretas, y el sólo nombre de la logia o de logista, los llena de indignación y horror. Esta sociedad no es otra cosa que una reunión de ciudadanos federales, de vecinos y propietarios, amantes de la libertad, del honor y de la dignidad de su patria”. Aquí se ve con claridad la imagen de la Mazorca en el mundo, que tomó sin duda las exageraciones de los enemigos del régimen —pero también las observaciones de viajeros que no tenían problemas con el gobierno porteño—, y el esfuerzo rosista para negarla. La estrategia del *Archivo Americano* era delinear algo real, los rasgos de la Sociedad Popular Restauradora, para negar la existencia de una rama especial de esa organización, que tomó a su cargo la ejecución del terror en los breves períodos en el cual éste se desarrolló.

Lo que en verdad distinguió a los mazorqueros de otros restauradores no fue que estuvieran dispuestos a llevar su fervor por Rosas hasta las últimas

consecuencias, sino que casi todos ellos eran a la vez parte de la Policía. La Mazorca fue un grupo que podemos llamar parapolicial, integrado mayormente por empleados de la Policía en actividad. Hemos visto que Parra y Cuitiño dirigían partidas extraordinarias de la Policía. Otros mazorqueros destacados también estaban en esa institución, pero en cargos de menor importancia. En el próximo capítulo buscaremos las razones de la existencia de esa particular agrupación autora de crímenes políticos y nos ocuparemos de sus acciones, que se extendieron hasta 1846, año en la que se anunció públicamente su disolución. Lo que importa ahora, y que se verá a continuación, es señalar sus diferencias con otras organizaciones institucionalizadas.⁶

II. En la que, para evitar confusiones, se señala lo que distinguía a la Mazorca de la Policía, la Milicia, el Ejército y otros

Los mazorqueros eran casi todos empleados de la Policía de Buenos Aires, pero no todos los que trabajaban en la Policía eran mazorqueros. La institución era pequeña y se remontaba al período revolucionario inicial; fue creada en diciembre de 1811. Antes esas funciones las cumplía el Cabildo de Buenos Aires, porque la Policía no era una institución sino un principio: el buen orden que debía observar-

se en la ciudad, cumpliendo las leyes. El primer Triunvirato consideró que era necesario un cuerpo que se encargara de vigilar el mantenimiento del orden y la seguridad de los habitantes, controlar las entradas y salidas de la ciudad y ocuparse del fundamental reclutamiento de soldados para el Ejército (persiguiendo a los que eran considerados vagos). Así surgió la Intendencia de Policía, dependiente del gobierno, que existió hasta la caída del Directorio, en 1820. En el complejo período subsiguiente, el Cabildo retomó las tareas de Policía, pero en 1821 el gobierno disolvió el Cabildo y creó un cuerpo de Policía. El jefe de Policía dirigía a los comisarios de la ciudad y de la campaña, que a su vez tenían a sus órdenes a los celadores; todos los empleados eran asalariados. En el ámbito rural la Policía no arraigó y tuvo corta vida; sus funciones quedaron allí en manos de los jueces de paz. En cambio, en la ciudad, la Policía —no se hablaba en esa época de “los policías”— fue muy importante, porque era el brazo armado del Poder Ejecutivo provincial (salvo en pocas excepciones, como durante la administración de Balcarce, cuando la Policía fue durante un buen tiempo dirigida por los apostólicos y, por lo tanto, poco dependiente del gobernador).

En 1834, durante la gobernación de Viamonte, se anuló la figura del celador. Se hizo una reorganización, por la cual fue creado un cuerpo de vigilantes de día y un cuerpo de serenos para la vigilancia noc-

turna. Éste no lo costeaba el gobierno, sino que se financiaba con aportes de los vecinos de la ciudad. Los serenos cuidaban la seguridad nocturna, comenzando sus tareas cuando terminaba la de los vigilantes. Así reemplazaron a las patrullas que los vecinos debían realizar por las noches, sistema que se utilizaba hasta entonces y que no siempre se cumplía con eficiencia.

Los serenos aumentaron entonces el control policiaco sobre la ciudad. Funcionaron a la vez como herramientas del régimen, puesto que vigilaban las calles y casas en horarios clave, proporcionando información al gobierno. No en vano, en la jefatura del cuerpo fue nombrado Nicolás Mariño, uno de los hombres fundamentales del rosismo. En la época de la disputa entre los federales, Mariño había sido el responsable del periódico *El Restaurador de las Leyes*, el que con el juicio en su contra desencadenó la revolución de octubre de 1833. En el segundo gobierno de Rosas fue uno de los principales publicistas del régimen; junto con Pedro de Ángelis, estuvo a cargo de la redacción de *La Gaceta Mercantil*, que funcionó como diario oficialista. Su lugar como jefe de los serenos, además de constituir un premio para él, mostraba la importancia de ese cuerpo para el gobierno (incluso tuvo un cuartel propio).

Una gran rivalidad se generó pronto entre ellos y los vigilantes en cuanto a la jurisdicción y atribuciones de cada uno. En julio de 1835 un vigilante

conducía al anochecer a un individuo —un pardo— al que había apresado por insultar a un oficial, cuando un sereno “se lo quitó diciendo que ningún vigilante podía llevar ningún preso de noche”. El caso fue aprovechado por el jefe de Policía para denunciar que eso ocurría porque los serenos eran independientes de la Policía, después de lo cual le fue otorgada cierta autoridad sobre ellos, aunque nunca la misma que tenía sobre los vigilantes. Éstos cumplían sus funciones en las cuatro comisarías de sección en las cuales estaba dividida la ciudad, cada una a cargo de un comisario. Todos estaban bajo las órdenes directas del jefe de Policía. De todos modos, los conflictos internos no desaparecieron y durante años hubo choques entre serenos y vigilantes, o entre serenos y alcaldes de barrio.

Tras la llegada de Rosas al poder, el jefe de Policía Lucio Mansilla renunció porque era cuñado del gobernador y consideró que eso era incompatible con el ejercicio de la función. Lo reemplazó Bernardo Victorica, quien ya había ejercido el cargo durante un año en la primera administración del Restaurador, y que ahora lo mantuvo por una década, hasta su muerte en 1845. Había además dos comandantes extraordinarios (cada uno tenía el cargo militar de sargento mayor), a quienes en la reorganización se les asignó la conducción de sendas partidas volantes de vigilantes a caballo: Cuitiño y Parra. Aunque estaban bajo las órdenes de Victorica, le informaban a

él y le pedían autorizaciones, los dos contaban con una autonomía especial. Entre 1834 y 1836 armaron sus partidas, para lo cual reclutaron a los efectivos teniendo en cuenta un factor crucial: la política. Por ejemplo, Cuitiño propuso como vigilantes a caballo a un tal Juan Rosas porque “es honrado y federal pues ha tomado las armas voluntariamente en las ocasiones que ha triunfado la Federación”; a otros tres porque “son federales decididos”; a José María Aranda porque “ha servido bajo las ordenes del Señor Comisario Don Andrés Parra; en la primera contra los amotinados el 1° de diciembre, igualmente con el mismo, en la del 11 de octubre”; a Venancio Vivas porque “como verdadero Federal se presentó a servir en la del 11 de octubre, a las ordenes del Comandante Castro, igualmente, lo manifiesta el Comisario Don Andrés Parra, quien acredita ser uno de los Federales decididos”; a Silvestre Reyes “en razón de ser uno de los Servidores que ha tenido el sistema Federal, él sirvió contra la facción del 1° de diciembre, capitaneada por Juan Lavalle”, y también “en la del 11 de octubre sirvió bajo las ordenes del que firma”. Los servicios prestados al federalismo eran entonces los méritos necesarios para ingresar en la fuerza. Para reputar a alguien como federal decidido, Cuitiño y Parra tomaban la participación en los dos eventos clave del federalismo: la lucha contra Lavalle en 1829 y la Revolución de los Restauradores. Todos los miembros de la Policía tenían que

mostrar adhesión al federalismo, desde el jefe para abajo; los dos comandantes extraordinarios le agregaban a eso algo más: había que ser un federal fanático y haberlo demostrado en la acción.

Mientras Victorica se encargó de manejar al cuerpo en sus funciones más habituales —seguridad urbana, control, denuncia de opositores al sistema, reclutamiento de vagos para el Ejército— Cuitiño y Parra cumplieron esas tareas pero sumaron un mayor énfasis que ningún otro comisario en la vigilancia política. Esa rama especial de la Policía, las dos partidas volantes de los comisarios extraordinarios, fueron las que devinieron en la Mazorca. Silverio Badía, Manuel Troncoso, Fermín Suárez y Leandro Alén, los mazorqueros más famosos que serían ejecutados por eso en 1853, eran los dos primeros vigilantes de la partida de Parra, y de la de Cuitiño los otros dos. ¿Cuándo dejaban de actuar como policías y se volvían mazorqueros? En los momentos en que procedieron por fuera de las disposiciones o la normativa del Departamento de Policía; sin órdenes o con indicaciones orales del gobernador, algo que nunca llegó a dilucidarse y sobre lo cual volveremos luego.

La diferencia entre Policía y Mazorca no es tan sutil como puede parecer a primera vista. La Policía podía perseguir a opositores al régimen si lo ordenaba el gobernador, que estaba habilitado para hacerlo apelando a sus facultades extraordinarias; incluso alguno que otro podía ser fusilado sin un proceso or-

denado apelando a la situación de crisis. Pero no podía matarlos a mansalva, acción que hubiera justificado plenamente la acusación de tiranía que los emigrados enemigos de Rosas le achacaban. En cambio, la acción de la Mazorca podía ser presentada como un conjunto de excesos populares.

El poder de la Policía era enorme respecto de un sector de la población: los pobres que podían ser considerados vagos. Éstos no eran todos los pobres, sino aquellos que no contaban con relaciones locales, generalmente los que no vivían permanentemente en la ciudad y los migrantes recién arribados. Eran los capturados por comisarios y vigilantes, para luego ser alistados en el Ejército o en la Marina. Pero no toda la población estaba sujeta a las arbitrariedades de la Policía. En la sociedad porteña de esa época los vínculos barriales eran fundamentales, y aquellos que tenían años de residencia en una zona podían conseguir defensores en unos personajes fundamentales de la ciudad: los alcaldes de barrio, los tenientes alcaldes y los jueces de paz.

Los alcaldes existían desde el siglo XVIII, cuando la ciudad fue dividida en cuarteles. Cada cuartel era un cuadrado que solía cubrir entre doce y veinticuatro manzanas, de acuerdo con su ubicación más o menos cercana al centro (con el tiempo se reorganizaron y modificaron de tamaño). En cada cuartel el Cabildo elegía a un vecino destacado para que fuera el alcalde, ocupándose de la policía, el orden,

la higiene y el cuidado de moralidad en su jurisdicción. En cada manzana había además un teniente alcalde para auxiliarlo. No eran funcionarios, es decir que no recibían dinero por su tarea; estos quehaceres se realizaban generalmente por razones de respetabilidad, en una sociedad en la cual ser respetable era muy importante. Cuando en 1821 desapareció el Cabildo, el cargo de alcalde y el de teniente alcalde se mantuvieron, subordinados al jefe de Policía.

Además, se creó una nueva figura, la del juez de paz. Éste cubría jurisdicciones más amplias, en las que había varios cuarteles (y por lo tanto, varios alcaldes). Un juez de paz se encargaba de los asuntos civiles y penales de menor entidad, que luego, para la resolución, debía elevar a los jueces de primera instancia. Ahora bien, en los hechos la Policía se apropiaba del manejo de la justicia penal menor y los jueces de paz quedaron ligados sobre todo a lo civil. Como las reglas no estaban claras, la competencia entre jueces y empleados de la Policía se hizo frecuente. A diferencia de éstos, los jueces no recibían una paga por su trabajo, y su nombramiento tenía que ver —como en el caso de los alcaldes— con su posición de prestigio en un barrio. Por lo tanto, si la policía respondía siempre a las autoridades, los jueces de paz jugaban un rol de mediación entre éstas y la población. Por ejemplo, intervenían muchas veces a favor de alguien a quien la Policía consideraba vago y quería, por ende, incorporar al Ejército, sos-

teniendo que conocían a esa persona y podían asegurar que no era vaga. Ese papel de bisagra era un freno para las actividades de la Policía.

Por lo expuesto vemos que quienes estaban arraigados en la ciudad contaban con relaciones comunitarias que les daban cierto reaseguro frente a la acción del gobierno, a través de la acción de alcaldes y jueces de paz. Y había aun otro elemento fundamental: la Milicia. Ésta era una institución clave, que provenía de una tradición española: la organización militar de los pobladores con el objeto de defenderse de posibles agresiones externas. En teoría —no siempre se respetaba— los milicianos cumplían algunos años de servicio activo, en el cual debían realizar entrenamientos periódicos. Al terminar el servicio, pasaban a integrar la Milicia pasiva. Formar parte de la Milicia era un deber para los hombres adultos, pero sólo para los que tenían un domicilio reconocido, es decir que estaban en un padrón (si eran movilizados recibían un estipendio por eso, pero fuera de esos momentos no se le pagaba). Pero también otorgaba derechos: un miliciano no era un militar, era un ciudadano en armas y por lo tanto había que respetarlo como tal; por ejemplo, estaba exento de ser enviado a integrar las tropas que marchaban a las campañas de las frecuentes guerras.

Un vigilante, un alcalde y un juez de paz podían examinar a un particular al que encontrasen de noche o al que consideraran en actitud sospechosa. La

única forma de identificación que existía —además de los testimonios de los vecinos de un barrio, que eran fundamentales ante cualquier diferendo— era la papeleta, una prueba de que alguien cumplía una función útil y no era un vago (el que era considerado así podía ser enviado al servicio de las armas). Esa papeleta podía señalar que su portador contaba con un empleo regularizado o podía mostrar que pertenecía a la Milicia, lo cual le otorgaba el derecho a no ser reclutado aunque no tuviera una ocupación fija. Un ejemplo: de una persona que fue detenida por robar en 1839, la policía dijo que “este individuo no es arreglado en la Milicia ni tiene contrata”, es decir que le faltaban las dos posibilidades de contar con alguna protección. Estar en la Milicia otorgaba un amparo, la de los pares y la de los oficiales, que también eran parte de la sociedad porteña (por ejemplo, muchos capitanes milicianos eran pulperos).

Desde 1820, la Milicia urbana era débil en el plano militar; se trataba de una organización de infantería (la milicia de caballería estaba en la campaña), pero su poder de fuego era bajo y la instrucción de muchos de sus potenciales integrantes, nula. Esto no era casual. A partir de las invasiones inglesas, la Milicia había jugado en Buenos Aires un papel central. Los cuerpos voluntarios formados después del primer ataque británico, en 1806, se convirtieron en el factor de poder más destacado en los años subsiguientes y su adhesión al grupo revolucionario fue

decisivo para el triunfo de éste el 25 de Mayo de 1810. La estructura miliciana fue transformada en la base del ejército revolucionario que la Primera Junta envió al interior del Virreinato para hacerse obedecer, y durante casi dos años la Milicia dejó de tener una existencia definida (pese a un levantamiento del Regimiento de Patricios que buscaba seguir siendo miliciano y no parte del Ejército). Tras algunos experimentos fallidos, en 1812 empezó a funcionar una nueva organización miliciana en la ciudad, dividida en tres tercios cívicos. En 1815, esa Milicia pasó a depender directamente del Cabildo, que se ocupó de fortalecerla. Así, en la segunda mitad de la década, los cívicos se volvieron una presencia destacada en la ciudad y empezaron a tener un papel descollante en la vida política. El tercer tercio, formado por pardos y morenos, realizó un importante motín en 1819. Al año siguiente, el segundo tercio cívico (cuya tropa era fundamentalmente plebeya) jugó un rol central en las disputas políticas que se sucedieron después del derrumbe del sistema revolucionario. En octubre de 1820, el levantamiento de ambos tercios generó un gran temor social entre la elite porteña y provocó la disolución de los tercios una vez que fueron vencidos; de esta manera fueron reemplazados por otra organización miliciana más restringida: la Legión Patricia. Si en la campaña la Milicia cobró una importancia creciente (y parte del ascenso de Rosas se debió a su cargo de comandan-

te de milicias rurales durante el gobierno de Dorrego), en la ciudad las autoridades se cuidaron mucho de no volver a darle el poder que tuviera en años anteriores. Pero aún así su existencia continuó y tenía un lugar importante para los habitantes de Buenos Aires.

En el Ejército, llamado “regular” o “de línea”, los soldados, suboficiales y oficiales (a todos los cuales se les decía “veteranos” para diferenciarlos de los milicianos) recibían un salario: trabajaban de militares. Los oficiales eran por lo general de extracción “decente”, aunque hubo quienes ascendieron a la oficialidad por sus méritos en escenas bélicas (pero debían saber leer y escribir, lo cual constituía un freno para el progreso de muchos). La tropa —sargentos, cabos, soldados, tambores, trompetas— la integraban las clases populares, reclutada entre aquellos que no pertenecían a la Milicia. El Ejército de línea no tenía una presencia destacada en la ciudad. Había tropas en los cuarteles de Retiro y otros puntos de la urbe (como el cuartel del batallón de “restauradores”, formado por negros, en la esquina de Defensa y México), pero el grueso estaba concentrado en el campamento de Santos Lugares, cuartel general de Rosas y centro de la defensa de Buenos Aires.

En pocas palabras: la ciudad tenía una complicada trama de personajes y organizaciones que podía poner algunos límites a la acción del gobierno y a la fuerza de su principal brazo, la Policía. Aun en un período en el cual el gobierno contaba con más po-

der que el que nunca había tenido, la existencia de tantas organizaciones entrecruzadas era un freno para sus maniobras legales. En cambio, la Mazorca no tenía límites. Nadie podía ponérselos a un cuerpo que actuaba fuera de todo orden, vinculándose sólo a la persona de Rosas y con la Sociedad Popular, a la que pertenecía.⁷

III. Donde se exploran los rasgos de los líderes de la Sociedad Popular Restauradora a través de la trayectoria y las relaciones de Julián González Salomón

Ya hemos establecido qué eran respectivamente la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca; es tiempo entonces de ocuparnos de quiénes las integraban. Para ello empezaremos con el presidente de la primera, Julián González Salomón, porque no sólo nos permite entender a la Sociedad Popular, sino que también nos facilita la comprensión de toda la política porteña de la época.

La trayectoria de Julián González Salomón fue una continuación de la de su hermano Genaro. Éste había heredado la pulpería de su padre, un peninsular llamado Miguel González, que la había instalado a fines del siglo XVIII, ubicada en las actuales Cerrieto y Corrientes, frente a la iglesia de San Nicolás. En un juicio criminal celebrado en 1813 se consigna que Genaro González tenía un alias: Salomón. No se

conocen las razones del mote, aunque algún autor supuso que era por su barba bíblica. Genaro se transformó en la década de 1810 en un líder popular de alcance barrial; un contemporáneo lo definió como un “tribuno de la plebe”. Para lograrlo fue fundamental su pulpería.

Las pulperías ocupaban muchas de las esquinas de Buenos Aires, y de hecho a veces se les decía directamente “esquinas”. Eran almacenes en los cuales se vendían al por menor pan, aceite, yerba mate, tabaco, arroz, azúcar y carbón, y en donde al mismo tiempo se despachaban bebidas. Funcionaban por lo tanto como lugares de reunión, donde se tomaba alcohol (caña o vino carlón), se conversaba, se jugaba a las cartas, se tocaba música y en las que algunos parroquianos leían la prensa en voz alta (para los analfabetos). Además, las pulperías también eran casas de empeño, a las cuales muchos pobladores de pocos recursos acudían en épocas malas para conseguir un poco de dinero; algunas también daban pequeños créditos o fiaban mercaderías. Todo esto les otorgaba un lugar crucial y volvía a los pulperos personajes destacados en la ciudad. Muchos eran alcaldes de barrio y tenientes alcaldes. Ahora bien, a finales del período colonial, alrededor de la mitad de los dueños de pulperías eran nacidos en España y eso, después de 1810, les quitó la posibilidad de ocupar cargos de cualquier tipo. La otra mitad, los pulperos criollos, acrecentó entonces su importancia en la es-

cena pública y algunos se labraron una carrera política empleando ese importante rol social como punta de lanza (para lo cual tenían que tener años de permanencia en un mismo lugar, uno de los aspectos que hacían importante a un pulpero). Pero si hubo quienes consiguieron cierta ascendencia, pocos trascendieron al punto de que hoy podamos tener algunas —escasas— noticias de ellos. Uno fue Genaro González, alias Salomón.

Los primeros datos que tenemos de Genaro son de 1812, cuando la milicia de la ciudad fue reorganizada. Continuando la costumbre que caracterizó a la milicia surgida en Buenos Aires tras las invasiones inglesas, en la cual los oficiales eran votados por la tropa, Genaro fue elegido teniente del segundo tercio cívico; con ese dato queda claro que en ese entonces ya tenía influencia en su barrio, donde vivían los soldados de ese tercio (uno de ellos, el repartidor de pan Laurencio López, contó en un juicio que vivía en esa zona y era “cívico de Infantería de la Compañía de Don Genaro Salomón”). En 1815, el pulpero ya era capitán. Desde ese año, el segundo tercio se involucró frecuentemente en la política, y Salomón —como lo llamaba la mayoría— se convirtió en un personaje de cierto peso, puesto que podía movilizar a unos trescientos milicianos y eso, en una ciudad que contaba con el grueso de su ejército combatiendo lejos de ella, no era desdeñable. De allí que él se enredara o que buscaran incluirlo en

distintas conspiraciones contra los gobiernos de la época. Un miembro de la elite sostuvo que era uno de los “pulperos pudientes” que lideraban a los “vagabundos del segundo tercio”.

Cuando cayó el Directorio, en 1820, el segundo tercio ocupó un lugar importante en la ciudad. Por ejemplo, en marzo se movilizó para evitar que Carlos de Alvear, que era muy impopular, lograra imponerse como gobernador; la Plaza de la Victoria fue ocupada por los milicianos, cuyo referente clave era Salomón. Ese mismo año, en octubre, el segundo y el tercer tercio se levantaron en armas contra la designación en el gobierno de Martín Rodríguez, un militar a quien no querían por considerarlo parte de la impopular facción directorial, la que había dirigido a Buenos Aires desde 1816. Rodríguez logró el apoyo de los milicianos de la campaña, que dirigía Juan Manuel de Rosas, y con ellos atacó a los rebeldes, que estaban atrincherados en la Plaza de la Victoria. La victoria fue de los rurales; Genaro fue capturado y enjuiciado por ser uno de los organizadores del motín. Lo fusilaron al poco tiempo.

¿Cómo había construido ese liderazgo que concluyó tan trágicamente? Combinando tres elementos: su comercio, su puesto de capitán miliciano (al que llegó por el anterior) y su carisma. Tenía una gran relación con los habitantes de su zona, muchos de ellos plebeyos, que se reunían en la pulpería. En

1817 fue denunciado por “la concurrencia en ella de vagos, y mal entretenidos y fuegos prohibidos que permitía, de que dimanaban varios insultos que recibían los vecinos y transeúntes por la Esquina”. Algunos de los milicianos que él capitaneaba eran sus dependientes y vivían en su casa. Salomón era un personaje con respetabilidad social, señalada en que recibía el distintivo don antes del nombre. El don o doña no se le daba a cualquiera, marcaba una pequeña distinción. Los miembros de la plebe porteña no lo recibían y sí lo hacía toda la elite. También eran denominados don aquellos que ocupaban un lugar intermedio en la sociedad, como Genaro. La noción de “clase media” casi no se usaba en esa época, pero este tipo de personas se encontraban en una posición entre los extremos sociales. Sabían leer y escribir, eran respetables, tenían una posición económica no despreciable y contactos fluidos con integrantes de la elite. Al mismo tiempo alternaban con la plebe y compartían varias de sus prácticas. Salomón protagonizó en una ocasión un enfrentamiento con cuchillo cerca de su pulpería, en el que fue herido. Esto era muy común entre los hombres de la plebe pero no en los de la elite, que se batían a duelo con otras armas y en forma programada, no al calor de un conflicto coyuntural. Individuos como Genaro no usaban levita o frac como la elite, en general llevaban chaqueta y también lucían el poncho.

La muerte de Genaro Salomón no implicó la de la influencia y el papel central de su pulpería. La heredó su hermano menor, Julián, que agregó el Salomón del apodo a su apellido. En un almanaque comercial elaborado en 1826 se consignaba que la pulpería de Cerrito y Corrientes estaba en manos de Julián González Salomón, y en un sumario realizado el mismo año se hizo una mención a “las cuatro esquinas de Salomón”. Pero no fue solamente la pulpería el bien heredado por Julián: también se apropió del capital político de su hermano. Aunque su carrera no es fácil de seguir en los años '20, ocupó puestos en la Milicia y es muy probable —aunque no hallamos pruebas de ello— que estuviese vinculado con el llamado Partido Popular que conducía Dorrego, más tarde devenido en Partido Federal, tradicionalmente enfrentado con el sector político que había fusilado a su hermano (el Partido del Orden y su sucesor, el Partido Unitario). Su papel político fue de todos modos muy modesto hasta 1829. Con la llegada de Rosas al poder, Salomón se puso a su servicio e inició su ascenso, convirtiéndose en juez de paz de San Nicolás (su acercamiento al nuevo gobernador fue sin duda facilitado por el hecho de que éste, que había dirigido el ataque contra las tropas de su hermano Genaro en 1820, se había desvinculado del viejo Partido del Orden y se había convertido en el líder del federalismo). Actuó decididamente en el bando apostólico durante la lucha entre los federa-

les. Hasta ese momento no era conocido fuera de ese círculo: el gobernador Balcarce envió una carta a Rosas contándole que algunos apostólicos lo habían visitado de mala manera después de las reñidas elecciones del 16 de junio de 1833; entre ellos estaba “un hombre emponchado que luego supe llamarse Salomón”. Rosas sabía perfectamente quién era, dos meses más tarde le escribió a Felipe Arana desde el río Colorado y le dijo que “estoy bien impuestado de los servicios de nuestro apreciable paisano Don Julián Salomón, a quien si usted ve le he de estimar que lo salude y felicite a mi nombre”. Como ya vimos Salomón tenía un fuerte vínculo con Encarnación Ezcurra y era miembro fundador de la Sociedad Popular Restauradora, de la cual devino rápidamente el presidente. Ahí comenzó a hacerse conocido; Juan María Gutiérrez contó en una carta la presencia de la Sociedad Popular en la fiesta que acompañó al juramento de Rosas como gobernador y comentó: “Su presidente se llama Salomón, abastecedor corpulento que si en algo se parece al de la Escritura, será en lo castizo y esforzado como varón...”, ironizando así sobre los talentos intelectuales del personaje.

En los años que siguieron al retorno de Rosas al poder, Julián González Salomón fue ganando importancia. Sus acciones a favor del régimen fueron desde organizar y conducir las manifestaciones callejeras que mostraban el apoyo al Restaurador, hasta

amenazar a sospechosos de unitarios, vigilarlos y en ocasiones asaltar sus propiedades (por ejemplo, dirigió a un grupo que atacó la casa de Juan Manuel Beruti, autor de unas memorias fundamentales para conocer la historia de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, destruyendo sus objetos celestes y verdes, además de muchos vidrios). Estas tareas le eran en ocasiones encargadas por el mismo Rosas, aunque no podemos saber si eso era siempre así. Lo fue en septiembre de 1840, al iniciarse el primer período del terror, cuando Salomón le informó al gobernador: “Con respecto a las casas unitarias que Vuestra Excelencia me encargó vigilar, no sólo las he hecho observar con asiduidad, sino que yo personalmente a toda hora las he vigilado; y, sea por que se han apercibido de ello, a pesar de nuestra cautela, o por otras razones, créame V.E. que nada he podido sorprender; por cuya razón no he procedido contra ellas según era justo. Sin embargo, Señor Gobernador, si V.E. por otros medios adquiere o tiene la menor noticia, yo agradeceré a V.E. me lo indique porque sin mas que su indicación, yo mismo personalmente, aun a medio día, procederé contra cualquiera de dichas casas de Salvajes, a quienes es preciso exterminar, para que podamos vernos libres de esta sabandija, que nos mina. Sí Señor Excelentísimo, estos son mis deseos y los de toda la sociedad”.

En esta carta Salomón mostraba su fidelidad incondicional pero también algunos límites: no proce-

día sin alguna prueba y no iba contra las personas de los unitarios —a los que decía que había que exterminar pero no se ofrecía para hacerlo— sino contra sus casas. De hecho, los autores que se refirieron a los crímenes de la Mazorca no lo incluyeron entre los asesinos, sino que limitaron sus acciones a las antedichas. Eduardo Gutiérrez, quien en folletines escritos en la década de 1870 describió con grandes exageraciones a sangrientos personajes mazorqueros (tomando tradiciones orales de la ciudad y consultando los archivos de la Policía), presentó en cambio a Salomón como un rosista fanático pero que no protagonizaba asesinatos; se paraba delante de las casas de los considerados unitarios y los insultaba un buen rato con fuertes amenazas, permitiendo así que las familias en cuestión huyeran. Esto no sólo habla de una mayor benevolencia de Salomón respecto de otros rosistas, sino que sobre todo ilustra las diferencias que ya hemos delineado entre la Sociedad Popular y la Mazorca. Los integrantes de la primera que no estaban en la segunda no se encargaban de los asesinatos.

El punto clave es que Salomón no estaba en la Policía, su carrera se ligaba a organizaciones diferentes: la Milicia —de la cual llegó a ser coronel con el rosismo— y a su cargo de juez de paz de San Nicolás. En 1836 fue reelecto en ese puesto, tras haber recibido un informe favorable de la Policía, que como hemos visto se encargaba de catalogar a los ciudada-

nos. La clasificación policial lo consideraba federal neto, decía que tenía buena conducta y que “ha prestado servicios de consideración en defensa de la Santa Causa de la Federación desde el año 1829 hasta la fecha con predilección”; señalaba también que era hacendado. Es que Salomón aprovechó su ascenso político para mejorar su situación: adquirió una propiedad no muy extensa en el partido de Magdalena, en la cual criaba ganado (en cantidades modestas). Además, con los años fue comprando algunas residencias en la ciudad, que usaba para obtener rentas.

Como juez de paz mantenía ese papel de bisagra entre el Estado y la comunidad barrial que ya he esbozado. Es decir, era un personaje que obedecía las órdenes gubernamentales pero debía también tener en cuenta a la sociedad local, en la que contaba con influencia, y que le había permitido llegar a ocupar cierta posición. He ahí una razón posible para su mayor moderación y sus reticencias respecto de las casas que vigilaba en 1840 por indicación de Rosas. Esa atenuación del fanatismo federal del presidente de la Sociedad Popular facilitó que encumbrados personajes porteños pudieran ingresar a ese club sin que eso implicara relacionarse directamente con los crímenes mazorqueros. Esto no quiere decir que no hubiera afiliados de esa organización vinculados con los asesinatos políticos. Martín Santa Coloma, socio fundador, fue famoso por sus degüellos, aunque generalmente los cometió en las luchas civiles en el In-

terior y el Litoral, en las que actuó entre 1840 y la caída de Rosas. Antes fue juez de paz de los Corrales, en los suburbios porteños, entre 1835 y 1839, puesto en el que se destacó como un clasificador político, dedicando gran energía a detectar adherentes y supuestos enemigos del federalismo en la ciudad. Peleó en la batalla de Caseros y fue capturado; Justo José de Urquiza ordenó que “para que pagara tantas muertes que había cometido”, fuera degollado por la nuca... Otro socio famoso en esta cuestión fue Mariano Maza. Era un miembro de la elite, sobrino del referente apostólico Manuel Maza, que participó activamente en la Revolución de los Restauradores. En 1840 fue nombrado coronel y marchó en la expedición que condujo Manuel Oribe al Interior para combatir a los enemigos de Rosas. Allí, Maza se hizo célebre por la dureza de las represiones que ordenó. También estuvo en Caseros, pero salvó su vida. Un tercero en la misma situación fue Antonino Reyes, uno de los responsables del campamento de Santos Lugares, que fue acusado (y juzgado por ello en 1853) de haber hecho torturar, fusilar y matar de hambre a muchos prisioneros que pasaron por ese cuartel. Sin embargo, ni Santa Coloma ni Maza ni Reyes fueron imputados por crímenes en la ciudad, como ocurrió con los mazorqueros; en Buenos Aires parecen haber seguido una conducta similar a la del presidente de la Sociedad Popular Restauradora.

Salomón se transformó en un personaje famoso en la ciudad. Su aspecto parece haber sido imponente; en *Amalia*, claramente exagerando, José Mármol lo describió así: “Alto y de un volumen que podría muy bien poner en celos al más gordo buey de los que se presentan en las exposiciones anuales de Estados Unidos; cada brazo era un muslo, cada muslo un cuerpo, y su cuerpo, diez cuerpos”. Se casó tres veces y tuvo varios hijos, de los cuales sólo lo sobrevivieron dos. Murió en 1846, a los 65 años. Un episodio legendario siguió a su muerte. La Sociedad Popular quiso tener un retrato de su presidente recién muerto, que le fue encargado al artista italiano Eustaquio Carrandi. Éste hizo poner el cadáver parado dentro del féretro, pero en medio de la tarea el cuerpo se cayó de pronto sobre el pintor, quien por la impresión se volvió loco. La historia es seguramente apócrifa, pero es una buena muestra del halo de terror que rodeó a los restauradores y mazorqueros a partir de esa época. En los años posteriores a la caída de Rosas, los episodios que ellos protagonizaron, verdaderos y ficticios, poblaron la memoria colectiva y se transmitieron oralmente.

Las vidas de Genaro y Julián González Salomón nos permiten entender cómo la Sociedad Popular Restauradora se anclaba en prácticas políticas que provenían del período revolucionario y se afianzaron a lo largo de treinta años. La política porteña se había ido moldeando desde la década de 1810 con

una participación social amplia; la elite, los sectores medios y la plebe se involucraban de distinto modo pero activamente en la vida política. Eso dio un lugar decisivo a los pequeños líderes, de alcance local, que articulaban a los habitantes de los barrios con dirigentes de la elite, por ejemplo Dorrego o Rosas. Estas figuras eran fundamentales en la articulación de la movilización popular y aumentaban su importancia política en los momentos en que la elite se polarizaba pronunciadamente; eso ocurrió en 1833 con la disputa interna al Partido Federal, en la cual los líderes barriales se dividieron a su vez.

Es que el caso de los hermanos Salomón no fue una excepción: hubo otros líderes como ellos, de la misma extracción social y con prácticas políticas similares, que tuvieron distintos destinos de acuerdo con sus apuestas políticas. Un muy buen ejemplo es el de Epitacio del Campo. Era pulpero en la calle Santa Cruz (hoy Arenales) de la parroquia del Socorro, en las "orillas" septentrionales de la ciudad. También él basó su carrera en la Milicia: en 1814 era teniente y luego se transformó en uno de los capitanes del segundo tercio cívico, donde llegó a tener la misma importancia que Genaro Salomón. Asumió un papel destacado en el levantamiento miliciano de octubre de 1820, pero a diferencia de Salomón salvó su vida y fue condenado a ir preso a las islas Malvinas, aunque finalmente quedó detenido en la ciudad hasta que fue incluido en un indulto dos años

más tarde. Desde entonces trabajó para el Partido Popular de Dorrego, y en 1828, cuando éste ya estaba en el poder, Del Campo fue elegido representante en la Legislatura provincial. Tras la caída de Dorrego, los unitarios lo obligaron a exiliarse en la Banda Oriental junto con otros dorreguistas, con el fin de evitar conspiraciones en nombre del gobernador depuesto y fusilado. Volvió después de la victoria federal y fue representante otra vez en 1830-1831. Fiel a su trayectoria, devino un operador fundamental de los federales liberales cuando se produjo el enfrentamiento: integró la lista que se impuso por sorpresa en las elecciones de abril de 1833, gracias a lo cual volvió a ser designado representante, y fue nombrado jefe de Policía en junio de ese año, cuando el conflicto llegó a su clímax. Después de la Revolución de los Restauradores renunció y pasó a un segundo plano. Pero la memoria de Rosas era larga y cuando volvió al poder ordenó encerrarlo en prisión. Lo dejaron libre en febrero de 1836, y de acuerdo con una costumbre de la época, le dieron “la ciudad por cárcel”, es decir que se le prohibió salir de Buenos Aires. Pero el experimentado “tribuno de la plebe” logró huir a Montevideo, donde murió cinco años más tarde. Su estilo político fue el mismo que el de los Salomón, sólo que él quedó en el bando perdedor.

Además de ligarse a distintas facciones, los líderes intermedios como los que hemos descripto compe-

tían entre sí. Por ejemplo, Epitacio del Campo y Genaro Salomón, aunque compartían la orientación política, mantuvieron una férrea rivalidad mientras éste vivió. Algo similar ocurrió con José María Benavente, otra figura de este tipo. Benavente era pulpero y, no debe sorprendernos a esta altura, había hecho carrera en la Milicia; en 1833 era sargento mayor. Partidario de los apostólicos y con una relación fluida con Encarnación Ezcurra, fue una de las figuras más destacadas de la Revolución de los Restauradores. Ahora bien, tenía al mismo tiempo un enfrentamiento constante con otros apostólicos: Ciriaco Cuitiño y Julián González Salomón, conflicto que venía de antes de la lucha abierta entre los federales. En marzo de ese año, Cuitiño presentó una nota al jefe de Policía, quejándose de que Benavente lo había difamado “en conversaciones públicas y privadas”, diciendo que era “un juez sin principios, ni educación, y que no debe ocupar el empleo que desempeña” (Cuitiño era juez de paz en ese momento, además de conducir una partida de la Policía). Le respondieron que fuera a la justicia ordinaria “para salvar su buena reputación”. Ese mismo mes, otro comisario informó que un celador encontró a la una y media de la mañana “la pulpería de Don José María Benavente; y habiendo intimado el que se cerrase por ser hora intempestiva, contestó este último que no quería cerrarla; y que lo haría cuando quisiese, pues nadie podía en su casa poner-

le ley alguna”. Unos días más tarde, Cuitiño denunció que Benavente, “con una partida de siete hombres armados de tercerola y sable, ha recorrido los lugares donde cela dicho Cuitiño con la suya, y este cree que será con intención de batirlo”. El comisario advertía que “creyendo que Benavente pueda reunirse con hombres dispuestos al desorden, advierte no poder responder de lo que hará en su defensa caso de verse acometido por dicho Benavente”. La disputa quedó latente por la pugna que ocupó la escena política en los meses siguientes, en la cual los dos estuvieron del mismo lado. Pero en marzo de 1834 Cuitiño volvió a denunciar a Benavente, que ahora había ascendido a teniente coronel, porque se interpuso a un vigilante de la Policía y le quitó “a un paisano que llevaba” tras detenerlo a causa de que había galopado por las calles, debido a lo cual le iban a cobrar una multa. El vigilante fue a la casa de Benavente a quejarse pero éste “le contestó con impropiedades e insultos”. Es muy posible que el paisano fuera un miliciano bajo el mando de Benavente y ese tipo de enfrentamientos entre la Milicia y la Policía no eran raros. Sin embargo, es evidente que la enemistad de este oficial con Cuitiño iba más allá. Quizá por extensión terminó enfrentado con otros restauradores. En febrero de 1835, Salomón presentó una queja contra Benavente, “por haber oído decir que en la barbería de Hermenegildo frente al Colegio, se expresaba siempre diciendo

que tenía un par de pistolas y un puñal para él, pues sabía que la Sociedad lo quería hacer asesinar". Fue-
ra esto cierto o no, la enemistad era clara. ¿Habría
sido por eso que un decidido rosista como Benaven-
te pasó a la oposición en 1836? Emigró a Montevi-
deo, participó activamente en los intentos antirrosis-
tas y se convirtió en un fiel lugarteniente del general
Lavalle durante años; fue uno de los que llevó su ca-
dáver en el famoso periplo hasta Bolivia para evitar
que lo atraparan los federales (Benavente volvió a
Buenos Aires tras Caseros y murió en 1861 en la ba-
talla de Pavón).

El caso de Benavente nos permite apreciar el po-
der que fue adquiriendo la Sociedad Popular en
Buenos Aires. En 1833 y 1834 Cuitiño no lograba
con sus demandas que le hicieran nada a su rival; en
1835, Salomón todavía pedía represalias. No las to-
maban ellos mismos. Pero es posible que una vez que
Rosas volvió al poder, los miembros de la Sociedad
se sintieran más seguros, más fuertes, y pudieran
creerse autorizados a ajustar cuentas con sus enemi-
gos. Con los documentos disponibles, es difícil ir
más allá de estas especulaciones, pero ello permiti-
ría entender por qué un decidido apostólico, pre-
miado después del triunfo de su facción con un as-
censo, huyó al extranjero a enfrentar al gobierno.⁸

IV. En la que se tratan las fragmentadas biografías de los mazorqueros más famosos: Ciriaco Cuitiño, Andrés Parra, Leandro Alén...

Tal como ocurría con la Sociedad Popular Restauradora, los líderes de la Mazorca (que, recordemos, también formaban parte de aquélla) tenían antecedentes en la política popular porteña. La innovación del rosismo fue la vinculación de este tipo de personajes con una violencia política aplicada directamente contra los opositores, un paso a una violencia irrestricta cuando el gobernador lo permitía.

Ya nos hemos referido a que los miembros de la Mazorca eran casi todos integrantes de la Policía y al papel que cumplieron en ella sus principales jefes. El que pasó a la posteridad como el mazorquero más notorio fue sin duda Ciriaco Cuitiño. Nació en Mendoza a fines del siglo XVIII y de joven se trasladó a la campaña bonaerense, instalándose en Quilmes, donde obtuvo una chacra en 1818; se casó con Juana Miralles y tuvo siete hijos que bautizó en esa parroquia bonaerense. Fue alcalde y también integró la Milicia. Durante los años '20 siguió manteniendo un doble rol en la Milicia, donde llegó a ser capitán, y en la función de alcalde (el jefe de Policía lo recomendó en 1825 por su celo en la persecución de los delincuentes, tarea que en la campaña hacían alcaldes y jueces de paz porque no había policía). No sa-

bemos cuándo conoció a Rosas, pero en enero de 1830, apenas aquél había iniciado su primer mandato, Cuitiño fue nombrado comandante de una partida celadora e ingresó así en la Policía de Buenos Aires con el rango de sargento mayor. Además, el gobierno lo eligió como juez de paz del barrio en el que se instaló, San Telmo; vivía en la calle Chacabuco, entre Estados Unidos y la actual Carlos Calvo. Como hemos visto, militó en las filas apostólicas —por lo cual perdió transitoriamente su puesto en la Policía, al igual que Parra— y construyó una relación muy cercana a Encarnación Ezcurra. En enero de 1834 envió junto con Parra una misiva a Rosas, que estaba en la campaña contra los indígenas, en la cual mostraban su adhesión total: “Vuestra Excelencia debe conocer que Cuitiño y Parra siempre marcharán por el camino que V.E. nos ha formado desde que se destronó el pérfido partido Unitario”. Aunque no hay datos concretos al respecto, es evidente que ellos dos organizaron lo que se convirtió en la Mazorca. Además, Cuitiño mantuvo su papel de juez de paz en San Telmo durante años. En 1838 fue ascendido a coronel y su estrella siguió el ascenso: su partida contaba con un cuartel propio, que todo el mundo conocía como “el cuartel de Cuitiño” (que estaba muy cerca de su casa). Más adelante nos ocuparemos de su desempeño en los años en los que actuó la Mazorca, así como de los de su compañero constante, Andrés Parra. Hay una leyen-

da que es posterior al período de apogeo de la Mazorca; Eduardo Gutiérrez la expuso en su libro *Juan Cuello*, de 1880, en el cual narró las aventuras de un famoso bandido y payador de la época, que existió verdaderamente y actuaba entre la campaña y los suburbios de Buenos Aires, enfrentando a menudo a la Policía. Según Gutiérrez, un mazorquero, el sargento Oliden (no hemos hallado a nadie con ese nombre en la Policía), iba a fines de los años '40 a casar a su hija Margarita con Cuitiño. Pero ella se enamoró de Cuello y huyó con él. Cuitiño organizó su persecución, logró capturarla en Luján y la hirió de una puñalada, por la cual murió luego en su casa paterna (que todavía se conserva en Buenos Aires en la calle Carlos Calvo a metros de Balcarce). La trágica historia contribuyó a aumentar la mala fama del jefe mazorquero, incluso después de muerto.

El otro líder de la Mazorca era Andrés Parra, un gallego que no había llegado a la ciudad como un inmigrante común sino como desertor de la armada española en la guerra de la Independencia. Apparentemente, fue parte de la tripulación de la fragata "Trinidad", que había partido de España en mayo de 1818 como parte de un convoy que se dirigía a Chile a reforzar a los realistas que combatían contra el ejército de José de San Martín. El viaje se hizo muy largo porque los barcos entraron en una zona de calma chicha que los inmovilizó durante semanas, lo cual generó problemas en la disciplina de los pasa-

jeros de algunos buques. En el “Trinidad” viajaban ciento ochenta integrantes de un regimiento, que fueron en su mayoría persuadidos por algunos sargentos de sublevarse; lograron sorprender a los oficiales y mataron a los que entre ellos no se plegaron al motín. Luego decidieron poner proa hacia Buenos Aires —sin duda sabiendo que era la región menos amenazada en ese momento por el ejército realista— y fueron recibidos en triunfo en la ciudad, por la que desfilaron llevando la bandera celeste y blanca. Algunos de los “nuevos hijos de la patria”, como fueron llamados, se incorporaron al Ejército. No parece haber sido el caso de Parra, a quien sí encontramos cumpliendo las tareas de teniente alcalde en 1821, en la zona del Socorro. Al poco tiempo ingresó en la Policía, en la que fue ascendiendo. En 1828 era comisario y participó activamente a favor de la lista del gobernador Dorrego en las disputadas elecciones de mayo de ese año entre unitarios y federales, en las cuales fue acusado por un diario opositor de haber amenazado con “sacar los ojos a bofetadas a los ciudadanos” que votaban contra la lista federal. Siguió evidentemente ligado al Partido Federal y se integró en la órbita de Rosas; como Cuitiño, recibió el mando de una partida especial de Policía. Hemos visto que en las elecciones de junio de 1833 luchó por los apostólicos y protagonizó un hecho de violencia. Era un católico muy ferviente, miembro de la cofradía llamada Hermandad de la Buena Muerte, y

se decía que en sus rezos en la iglesia de San Miguel terminaba muchas veces llorando. Su carrera se desarrolló de una manera muy similar a la de su camarada: fue nombrado coronel y se transformó en un mazorquero muy temido. Ganó fama de ser especialmente cruel y los enemigos de Rosas emigrados en Montevideo lo denominaron “el Marat de la Mazorca” (en alusión al líder de la Revolución Francesa Jean-Paul Marat, famoso por impulsar el terror en París contra los aristócratas y otros enemigos). Una leyenda dice que su crueldad era tan excesiva que cuando a Rosas le contaban de algún crimen mazorquero particularmente terrible, éste decía que indudablemente el autor debía ser el gallego Parra. Murió antes del fin del rosismo, en 1850; en los funerales que se le hicieron en la iglesia de Monserrat recibió honores por parte de la Policía, en la que trabajó a lo largo de tres décadas.

Cuitiño y Parra no diferían mucho en su nivel social de los personajes que hemos considerado en el apartado anterior, Salomón, Del Campo o Benavente, aunque partieron de un poco más abajo en la escala social y su ascenso en la ciudad se debió fundamentalmente a su labor en la Policía, más que a su desempeño en otras actividades; además, ninguno de los dos era porteño de nacimiento, lo cual hacía las cosas un poco más arduas en la sociedad de la época. No eran líderes surgidos de los barrios —como los pulperos antedichos—, sino figuras que se cons-

truyeron en relación con el Estado y, por lo tanto, no tenían un rol mediador tan claro como el de los jueces de paz (aunque Cuitiño llegó a serlo, su vinculación más importante fue siempre con la Policía). De allí que fueran los dirigentes del principal instrumento represivo del gobierno.

Las vidas de sus colaboradores en la Mazorca son difíciles de seguir. Algunos tenían un perfil social semejante al de los jefes y otros provenían de sectores más bajos, de la plebe porteña. Los que eran considerados vagos y por eso reclutados para el Ejército o la Marina pertenecían a los estratos inferiores de la sociedad. En ocasiones, si hacía falta, podían ser remitidos a servir en la Policía; en los años '20 hubo casos de ladrones que fueron enviados como castigo a servir en la Policía como celadores. No sabemos si eso pasaba en las partidas de Cuitiño y Parrá, la base de la Mazorca, aunque parece que más bien ellos seleccionaban cuidadosamente a su gente. Es claro que muchos de los miembros de sus partidas —y por lo tanto de la Mazorca— eran plebeyos. Por ejemplo, entre los propuestos por Cuitiño para ser uno de sus vigilantes estaba Venancio Vivas, a quien presentaba como un “honrado y pobre paisano”.

Algunos de los mazorqueros se hicieron célebres en Buenos Aires. Cuatro de ellos fueron vigilantes y estaban en la partida de Andrés Parra: Silverio Badía, Manuel Troncoso, Fermín Suárez y José María Martínez. No tenemos casi datos de ellos pero los vere-

mos actuando en el próximo capítulo. Los tres primeros fueron juzgados por mazorqueros, condenados a muerte y ejecutados en 1853 (Martínez fue declarado inocente en esos juicios). De otros mazorqueros nos han quedado sólo los nombres y datos sumamente escasos: Manuel Gaetán protagonizaría algunos asesinatos célebres; Benito Aldana era pulpero y en 1838 se consignó que era teniente alcalde de su manzana, más tarde entró en la Policía, al igual que Jerónimo Lugones y Manuel Maestre; Manuel Leiva, Estanislao Porto, Torcuato Canales, Manuel Gervasio López y Floro Vázquez fueron procesados con diferente suerte en los juicios de 1853. Vicente Parra mandaba una de las dos compañías en las que se dividía la partida de vigilantes de Cuitiño (murió en 1847 y no hay datos acerca de si estaba en la Mazorca, aunque es posible porque era muy cercano a su jefe).

Otro personaje que fue sindicado como mazorquero fue un sereno llamado Moreira, de origen español. Una persona que vivía en Buenos Aires en 1840 —Santiago Calzadilla— consignó en sus memorias que una noche de ese año oyó un griterío y se refugió en su casa. Al día siguiente le dijeron que Moreira, embriagado, había degollado al dueño de una pulpería que frecuentaba al preguntarle éste cuándo le iba a pagar lo que le adeudaba; un dependiente quiso intervenir y también lo degolló. Luego puso ambas cabezas en una carretilla y se marchó gri-

tando que vendía buenos duraznos... La Policía lo capturó y Rosas lo hizo fusilar inmediatamente, por ésa y otras matanzas sin sentido. Eduardo Gutiérrez relató otras de sus supuestas andanzas y sostuvo que se trataba del padre de un célebre personaje sobre quien él también escribió: el gaucho Juan Moreira.

Por último, hay uno de los miembros de la Mazorca que ha llamado más la atención que todos los otros, con la única excepción de Cuitiño. La obtuvo más que por sus acciones por las de sus descendientes. Se trata de Leandro Antonio Alén, padre de Leandro Alem (quien se cambió el apellido años más tarde para escapar al estigma de mazorquero de su padre), el fundador de la Unión Cívica Radical. Otra de sus hijas, Marcelina, fue madre del futuro líder radical Hipólito Yrigoyen. Este legado hizo que quedaran más rastros biográficos y que muchos historiadores profesionales y aficionados se volcaran a dilucidarla. Sabemos por eso que Alén nació en 1795, de madre criolla y padre gallego, y fue bautizado en la iglesia de Monserrat. Su padre tenía una pulpería y había conseguido una buena posición social, puesto que poseía varios esclavos. Leandro Antonio trabajó en la pulpería y en la quinta de su padre, se casó en 1825 con Tomasa Ponce y compró una quinta en las cercanías de los Corrales de Miserere, en la zona que después sería llamada Balvanera; en uno de los extremos de la quinta (actuales Matheu y Rivadavia) abrió una pulpería y próxima a ella fue construyendo pe-

queñas casas para alquilar. Como muchos pulperos, Alén hizo carrera en la Milicia (y por lo tanto, como hemos visto, en la política); al menos en 1827 era alférez y apoyaba al gobernador Dorrego. Tras su caída tuvo un enfrentamiento con dos celadores de Policía en una pulpería, tras el cual pasó a la campaña y se sumó a las tropas con las que Rosas estaba sitiando la ciudad. Después del triunfo federal, Alén obtuvo un puesto en la Policía, que le fue quitado en 1833 por los federales liberales. Aparentemente participó en la Revolución de los Restauradores y en 1834 volvió a la Policía como vigilante a caballo; condujo una de las dos compañías del cuerpo que estaba a las órdenes de Cuitiño. En 1835 Alén sufrió algunos trastornos psíquicos que lo alejaron por un tiempo de la Policía y lo mismo le ocurrió en 1847. Ese año atacó violentamente a un alcalde de Balvanera en su casa y fue denunciado por el juez de paz, Eustaquio Jiménez, que también era un “federal neto” pero con quien tenía una importante enemistad; Rosas hizo que lo perdonaran. Ya hemos hablado de su muerte.

Todos ellos fueron protagonistas de una época muy particular en Buenos Aires, que abordaremos en el próximo capítulo: los años comprendidos entre principios de 1838 y 1843. Una etapa en la cual los vaivenes de la política y la violencia ligada a ella fueron una parte indisoluble de la vida cotidiana. Fue el período marcado a fuego por la acción de la Mazorca.⁹



El ojo de la tormenta

I. *Donde se describe cómo el afán de Francia de volver a ser una gran potencia provocó una crisis de gran alcance en el siempre agitado Río de la Plata*

El señor Remontel era francés, había emigrado al Nuevo Continente y se había convertido en propietario de una fonda. Unos oficiales del ejército entraron en 1832 en su local, comieron unos pasteles y se marcharon sin pagar, llevándose con ellos algunas botellas de vino y parte de la vajilla. Remontel pidió al gobierno que lo indemnizara con una gran suma de dinero y ante la negativa se quejó en 1837 al cónsul de su país. Por esa época Francia había pre-

sentado reclamos similares a favor de algunos de sus súbditos que habían sufrido distintos perjuicios a lo largo de los conflictos políticos posteriores a la independencia. Los reclamos devinieron exigencias y fueron sostenidos por una escuadra francesa de diez barcos de guerra, que lanzó un ultimátum para su aceptación. El gobierno se negó a negociar si no se retiraban los buques, con lo cual el 16 de abril de 1838 la escuadra estableció el bloqueo del puerto y dio inicio a un conflicto que sería conocido como “la guerra de los pasteles”.

El país agredido era México y el puerto cercado era Veracruz, pero el episodio era similar al que tan sólo dos semanas antes tuvo lugar en Buenos Aires: un entredicho entre el gobierno y los enviados franceses que culminó con el bloqueo de su puerto por parte de barcos de guerra de esa nacionalidad. El parecido con lo ocurrido en México no es casual: las razones de la intervención francesa en el Río de la Plata obedecieron a un intento de ese país por recuperar su rol de gran potencia. La monarquía que encabezó Luis Felipe de Orleans desde que en 1830 una revolución quitó del trono al último rey de la dinastía borbónica, Carlos X, prohió una serie de tentativas de acrecentar la presencia internacional de Francia sin chocar con las otras potencias europeas. Así, con una excusa débil, su ejército invadió Argelia en 1830 y comenzó una lenta conquista de su territorio, al tiempo que procuró volver a obtener in-

fluencia en Cercano Oriente, en desmedro del imperio Otomano. Su prepotente aparición en México y el Río de la Plata obedeció al interés por recuperar su papel como primera potencia y fue por lo tanto independiente de las realidades políticas locales. Pero sus efectos en ellas tuvieron gran intensidad: en el caso rioplatense la intervención francesa se interrelacionaría firmemente con los conflictos preexistentes en la región, dando aliento así al arranque de una crisis en el sistema de poder que Rosas estaba construyendo y a una serie de enfrentamientos bélicos que se prolongarían por años.

El origen del conflicto con Francia provino de su exigencia de contar con el mismo trato de "nación más favorecida" del que gozaba Gran Bretaña. Eso incluía ventajas comerciales pero, en lo particular, la exclusión de los franceses residentes en Buenos Aires de cualquier servicio militar; por una ley de 1821, los extranjeros que tenían más de dos años viviendo en la provincia eran susceptibles de ser movilizadas. Sólo los ingleses, protegidos por un tratado firmado en 1825, estaban libres de esa posibilidad. Francia comenzó a presionar para obtener lo mismo, y apeló a un episodio para fortalecer su posición: la muerte de César Bacle, un artista francés que había instalado un taller de litografía y pintura en la ciudad a fines de la década del '20. Bacle y Cía. confeccionó mapas, litografías para ilustrar periódicos, hizo trabajos para particulares y consiguió de

Rosas la dirección de la Litografía del Estado. Sin embargo, Bacle viajó a Chile, consiguió un nombramiento similar y decidió radicarse en ese país. Retornó a Buenos Aires para buscar sus elementos de trabajo y llevarse a su familia, y aceptó algunos encargos de conocidos suyos, opuestos al gobierno, para gestionar su emigración a Chile. Alertado, Rosas lo acusó de portar documentación valiosa para los enemigos y lo mandó encarcelar. Su salud se deterioró rápidamente y fue liberado, pero murió en los primeros días de enero de 1838. El vicecónsul francés Aimé Roger —el cónsul había fallecido— presentó una protesta airada que fue desestimada por el gobierno porteño, que lo intimó a dejar la provincia. Así comenzó una rápida escalada diplomática, en la que las exigencias francesas se hicieron más perentorias e incluyeron un reclamo de indemnización económica para los franceses perjudicados por el gobierno porteño, que culminó cuando la escuadra francesa que estaba en Río de Janeiro al mando del contraalmirante Louis Le Blanc se hizo presente frente a las costas porteñas y declaró el bloqueo hasta que se aceptaran sus condiciones.

Del lado porteño, el bloqueo puso fin a un manejo hasta entonces no muy claro de las relaciones exteriores, el único componente de la soberanía de las otras provincias que éstas habían delegado en Buenos Aires. El ministro Felipe Arana había procurado moderadamente debilitar la gran influencia in-

glesa en el Río de la Plata. En esta empresa era apoyado por Tomás de Anchorena, quien representaba a un sector de la elite porteña que deseaba disfrutar de algunos de los beneficios del comercio internacional desde y hacia Buenos Aires que los ingleses controlaban casi en su totalidad. Ligados con Londres y el puerto de Liverpool, los comerciantes británicos no tenían rival, y la elite de Buenos Aires había descubierto ya hacía años que la producción ganadera —muy lucrativa por las bajas inversiones iniciales que implicaba y la rapidez en las ganancias— era mucho más conveniente que enfrentar —con gran desventaja— ese predominio. Pero Rosas nunca apoyó un hostigamiento a la gran potencia mundial del momento. Si finalmente el enfrentamiento puso a Francia como enemiga no fue por iniciativa del Restaurador y los suyos sino por la acción de los enviados de ese país.

De todos modos, el camino al conflicto fue alimentado por una clave de la política rosista: la búsqueda a ultranza de la unanimidad, el ideal de una única identidad política, la eliminación del disenso. A comienzos de 1838 esto se había cumplido sólo en parte en Buenos Aires y aún mucho menos en el resto de la Confederación. Las otras trece provincias eran sin duda federales, pero no todas interpretaban esa posición política de la misma manera que se hacía en Buenos Aires, y Rosas no podía imponer su postura como lo hacía en su tierra. Sus esfuerzos

iban dirigidos a lograr que en cada una de las provincias ascendieran líderes de menor peso local que los que había habido en el pasado cercano, personajes que podrían volverse más dependientes de las directivas porteñas. La desaparición de Quiroga había facilitado ese proceso, pero todavía existía una gran figura federal en la persona del gobernador de Santa Fe, el veterano Estanislao López, y las elites provinciales seguían procurando en todos lados preservar su autonomía.

Ahora bien, si en el interior la política de Buenos Aires fue cautelosa, no ocurrió lo mismo respecto de los países limítrofes. En una época en la cual no eran claras ni siquiera las fronteras, y con las configuraciones nacionales en lento proceso de construcción, los vecinos solían proteger e impulsar sin demasiados reparos a los enemigos de los gobiernos. Ése era el caso del mariscal Andrés de Santa Cruz, ambiciosa figura que había logrado crear una confederación entre Perú y Bolivia, quien protegía a viejos adherentes al unitarismo que habían emigrado a tierras bolivianas tras el triunfo federal. La reacción de Rosas fue apoyar los deseos belicistas de Alejandro Heredia, gobernador tucumano que se estaba convirtiendo en un referente del federalismo del interior, y declarar la guerra a Santa Cruz. Por eso pactó una alianza con Chile, que veía con malos ojos la formación de un vecino poderoso en el norte. El conflicto fue en su mayoría financiado con recursos de las

provincias del norte de la Confederación, con colaboración de Buenos Aires, y durante mucho tiempo no tuvo resultados claros.

El otro foco protector de emigrados era la joven república ubicada en la orilla este del Río de la Plata, el Estado Oriental. Su capital, Montevideo, siempre había sido el refugio privilegiado para quienes escapaban de Buenos Aires por política, y allí se habían ido los unitarios porteños, los federales liberales y otros enemigos del Restaurador de las Leyes. Para debilitarlos, Rosas empezó a intervenir en los conflictos orientales tomando partido por el presidente Manuel Oribe, quien era hostigado por su predecesor en el cargo, Fructuoso Rivera, muy poderoso en la campaña (ambos habían tenido hasta entonces buenas relaciones con grupos emigrados de Buenos Aires). En el primer enfrentamiento militar entre las fuerzas de uno y otro habían surgido dos divisiones que a partir de entonces los distinguieron: los colorados eran los seguidores de Rivera y los blancos los que luchaban por el presidente. Cuando éste obtuvo el auxilio de Rosas, comenzó a marginar o a desterrar a los adversarios del gobernador porteño. Por su parte, también Rivera empezó a buscar un poderoso protector: Francia; aunque el apoyo de ésta al caudillo oriental fue en un principio esquivo y limitado, marcó su ingreso en las luchas rioplatenses e inició sus fricciones con Buenos Aires, que terminaron en el bloqueo.

De esta forma, en abril de 1838 el sistema que Rosas había ido creando entró en crisis: porque tenía que lidiar con la presión de una potencia europea que ahogaba con sus intimidantes cañones la llave de la economía porteña; porque las provincias vacilaron en su adhesión al principal líder federal y varios de sus dirigentes le achacaron a su política la culpa de una medida que afectaba a todas; porque los enemigos emigrados del Restaurador terminaron por aprovechar —tras dudarlo bastante— la intervención francesa para luchar contra él; porque incluso en la provincia en la que su poder parecía ilimitado las oposiciones surgieron con fuerza. Comenzó entonces una etapa conflictiva y compleja de la historia rioplatense.

Cuando el bloqueo francés se estableció delante de los ojos un tanto sorprendidos del gobierno porteño —que posiblemente creyó que sólo era una amenaza— Rosas hacía ya tres años que estaba en el poder en Buenos Aires. Antes, eso hubiera implicado el fin de su mandato, pero junto con la entrega que se le hizo en 1835 de las facultades extraordinarias y de la suma del poder público, el período gubernamental se extendió legalmente a cinco años. En 1838 el régimen rosista era fuerte en la provincia, pero no estaba aún consolidado del todo. Ése es un punto fundamental y que a veces se hace confuso: el rosismo no fue siempre igual, es decir, no fue una realidad inmutable. No sólo el primer gobierno

del Restaurador de las Leyes fue diferente al segundo, sino que dentro de la larga extensión de éste hubo diversos momentos. Lo que sí se mantuvo sin muchos cambios a lo largo de todo el período en el que Rosas fue la figura principal en la política rioplatense fue la metodología que empleó para construir su poder. Como explicó el historiador Tulio Halperin Donghi, Rosas supo aprovechar hábilmente la participación política popular, y al encauzarla conjuró el peligro que la elite percibía en la agitación plebeya constante y en sus tendencias igualitaristas. El Restaurador advirtió con claridad el potencial político de esta activación: la movilización popular podía usarse para evitar que la indisciplina social se eternizara, por un lado porque si un líder conseguía un genuino apoyo de las masas obtendría una fuerza tan grande que nadie podría oponérsele; al mismo tiempo, si la plebe sostenía unánimemente la causa federal, ésta se fortalecía muchísimo y ganaba cohesión.

Ese recurso fue paralelo al objetivo de lograr un orden en la campaña que permitiera el progreso de los productores, tanto de los grandes hacendados como de los pequeños pastores y labradores, lo cual daría al régimen un apoyo de larga duración. Continuó para ello la práctica empleada en Buenos Aires desde 1821: la persecución de posibles delincuentes y el uso del Ejército como instrumento de disciplina social, al enviar a sus filas a los hombres

considerados vagos. Simultáneamente Rosas resolvió un problema serio de la década previa: la conflictividad de la frontera. Junto a su campaña militar para asegurar la expansión que se había hecho hacia el sur, inauguró la política de “indios amigos” e “indios aliados”. Los amigos eran parcialidades indígenas a las que se les daban tierras y cierta asistencia del lado criollo de la frontera. Los aliados se mantenían fuera, pero con un sistema de entrega de bienes se aseguraba su apoyo para frenar a las parcialidades no amistosas con la sociedad bonaerense. Esto funcionó acabadamente a lo largo de todo el período rosista e incluso muchos indígenas fueron movilizados para participar en enfrentamientos militares a favor del gobernador. En 1838, entonces, el poder de Rosas en la campaña —en la cual había fundamentado su carrera política— parecía inquebrantable (pero los hechos, poco después, demostrarían lo contrario).

II. *En la que se explican los desvelos del Restaurador de las Leyes para afianzar su poder en la ciudad*

En la ciudad el gobernador se sentía menos seguro: allí había encontrado hasta 1835 los mayores obstáculos a su proyecto. Al concretarse su regreso al poder, concentró su política en el ámbito urbano en cinco puntos: afianzar una autoridad incontrastable

a través de la eliminación del disenso y de la competencia política; vigilar que se cumpliera la pretendida homogeneidad de opinión a lo largo y ancho de la ciudad; robustecer su relación con la población de origen africano; aumentar su popularidad entre los artesanos; y, por último, disciplinar a la poco confiable elite porteña.

Del primer punto se ocupó apenas tuvo el mando. En los días posteriores a la asunción hizo arrestar a quienes habían formado el núcleo federal liberal (entre ellos, el ex jefe de Policía Epitacio del Campo) y no se marcharon a Montevideo, como habían hecho los principales referentes del mismo grupo. Un mes más tarde avanzó sobre lo que consideraba dos posibles focos de descontento: la oficialidad del ejército regular y la administración pública, despidiendo a varios empleados de una y otra. El afianzamiento de su autoridad institucionalmente ilimitada fue garantizado, además, porque la Legislatura porteña, que hasta entonces había sido una pieza clave de la política provincial, vio reducido su papel a una existencia poco más que decorativa, que prácticamente sólo servía para asegurar la legalidad del régimen. Las elecciones pasaron a contar desde entonces con una lista única, que armaba el gobierno y “bajaba” luego a los jueces de paz para que los ciudadanos la votaran; no hubo así más competencia de candidatos.

Los fusilamientos, limitados al principio, recordaron los peligros de escapar a la homogeneidad de

opinión. En mayo de 1835, dos supuestos conspiradores fueron fusilados en la Guardia de Monte, en la campaña, y otro —el coronel Paulino Rojas— perdió la vida del mismo modo en la ciudad, en los cuarteles del Retiro. En julio del año siguiente más de ochenta indígenas, capturados en la “campaña del desierto”, fueron masacrados en un solo día en ese mismo cuartel. Los hacían pasar de a seis, encadenados, los sentaban y recibían una descarga. Caían en grupos, algunos soldados retiraban los cadáveres y entraban a los seis siguientes. La matanza generó escasa preocupación; el británico John Mandeville —que fue ministro plenipotenciario de su país en Buenos Aires entre 1836 y 1845— escribió a su gobierno que “esta carnicería produjo poco o ningún efecto entre los habitantes, a quienes, cuando yo les preguntaba, me daban siempre la misma respuesta: ah, sí, los bárbaros. Sí, los indios, siempre los destruyen...”. Sin embargo, semejante hecho no era habitual en la ciudad y marcaba que había una nueva dureza gubernamental (años más tarde, las víctimas del terror no superarían en cantidad a las de esa jornada macabra, pero, claro está, tuvieron un impacto mucho mayor). De todos modos, en esos años, la amenaza sobre la vida de la población porteña todavía no era tan clara. En octubre de 1836 fue fusilado en el Retiro un oficial a quien se encontró con correspondencia comprometida, pero al comenzar 1837 algunos opositores que estaban en prisión fueron

liberados, con lo cual el clima no era aún de total rigor (sí lo fue con los asesinos de Quiroga, que en octubre de ese año fueron ahorcados en la Plaza 25 de Mayo).

El gobierno consideraba que la unanimidad federal era una absoluta prioridad y la vigilancia de que eso ocurriera quedó en manos de la Policía, los jueces de paz, los alcaldes de barrio y sus tenientes alcaldes. Como ya hemos comentado, el uso de la divisa punzó pasó a ser controlado severamente. Además, los jueces de paz elaboraban "clasificaciones", informes en los cuales se establecía el perfil político de los vecinos porteños; los considerados unitarios quedaban excluidos de cualquier función pública o militar y recibían vigilancia especial por parte de las autoridades. El control apuntaba a que más allá de que Rosas hubiese accedido al poder rodeado de una gran popularidad, había muchos desafectos a su figura. Eso quedó claro en un episodio ocurrido al cumplirse un año del ascenso del gobernador. Un tal Eulogio Blanco estaba en la puerta de su casa (en las actuales Piedras e Yrigoyen, en el barrio de San Miguel) acompañado por otros que portaban instrumentos musicales, y para celebrar el aniversario se puso a gritar vivas a favor del Restaurador de las Leyes. En ese momento apareció un grupo de diez vecinos que empezó a gritar, de acuerdo con varios testigos, "mueran los vivas de Blanco, muera Blanco y viva Lavalle y su espada". Lavalle estaba en ese mo-

mento exiliado en la República Oriental y no tenía ningún medio de influir en la situación porteña, pero era quien había quedado en la memoria colectiva como el principal referente unitario (por la revolución de 1828). El caso muestra muy claramente que un sector de la población mantuvo su oposición al régimen, y que en los primeros años del segundo gobierno de Rosas algunos se animaban en ocasiones a mostrar su disgusto, aunque sólo fuera para burlarse de un particular como Blanco. Pero también grafica la existencia de partidarios entusiastas del gobernador, que organizaban pequeños festejos por su cuenta (no por iniciativa oficial) para celebrar la figura del Restaurador. Había asimismo gente que buscaba quedar afuera de la política y no reconocía filiaciones: una noche de 1837, un ex vigilante entró ebrio a una pulpería insultando a los gritos a los unitarios; al rato, uno de los presentes, el pardo Máximo Salguero, se disponía a irse cuando fue increpado por el borracho, quien le preguntó “amigo usted es unitario o federal”, a lo cual Salguero “contestó que él no era nada”. Respuestas de ese tipo iban a volverse cada vez menos sensatas a medida que la crisis comenzara a desplegarse.

Un hecho muy importante fue que las presunciones de antipatía hacia el sistema federal empezaron a ser determinantes en decisiones de la Policía sobre cuestiones que no tenían que ver con la política. Si una persona era acusada de un delito y se

agregaba que era sospechoso de unitario o de haber sido federal cismático, ese último aspecto era un poderoso agravante. Un ejemplo es muy claro al respecto: en enero de 1836, Ciriaco Cuitiño le escribió al jefe de Policía para hacerle saber que un matrimonio le había solicitado intervenir porque un “amigo” de la mujer hacía peligrar su tranquilidad. Ella aseguraba que lo había despedido en varias ocasiones pero él se negaba a alejarse. Se trataba de un capitán de la milicia de caballería llamado José Pantaleón de los Ríos, cuya conducta, según Cuitiño, “es muy mala a la sociedad; el oficio único que tiene es el juego, andar vagante”. Hasta acá no hay diferencia respecto de los típicos argumentos de la Policía para justificar arrestos, castigos o reclutamientos forzados para las tropas. Pero Cuitiño agregaba algo más sobre De los Ríos: “Igualmente sirvió en la del 11 de octubre en las fuerzas de la ciudad y salió afuera la víspera que las fuerzas Federales entraban a la ciudad”. Es decir que el capitán miliciano había estado del lado de los cismáticos durante de la Revolución de los Restauradores de 1833. Esa actuación era en la mirada de Cuitiño un elemento decisivo para definir a la persona implicada, y era por lo tanto determinante para decidir su destino (de perdón o castigo).

Durante esos años, los comisarios presentaron decenas de partes en los cuales a las denuncias por delitos típicos, aquellos de los que la Policía se había

ocupado desde su fundación, se añadían como agravante las posiciones políticas. Los ejemplos son varios, pero consignamos algunos para que se vea la fuerza que fue adquiriendo la práctica entre 1835 y 1838: de un acusado por ladrón se dijo que “es uno de los perversos cismáticos, que cometió varios excesos en la primera administración del Señor Balcarce”; un acusado de ser vago fue presentado diciendo que “no se le conoce ocupación alguna útil, y el infrascrito está informado que ha servido a la Administración anterior de Don Juan Ramón Balcarce”; de otro se dijo que tenía las “recomendaciones de un vago, y ser amigo de embriagarse muy continuamente”, al tiempo que hablaba “algunas cosas sobre la causa de la Federación”; a un cuarto se lo acusó porque “es lomo celeste, fue escrutador en la mesa electoral de la Parroquia de San Nicolás (cuando era Gobernador Don Juan Ramón Balcarce) y el más empecinado: vago, y ebrio de costumbre”. En esta referencia se ve cómo el antiguo “lomo negro” usado para denominar a los cismáticos se tornó en “lomo celeste”: ahora cualquier enemigo del sistema pasaba a tener una identidad única, la de ser unitario.

Así como en el capítulo anterior vimos que haber prestado servicios a la causa de la federación permitía acceder a cargos y era el principal mérito para los rosistas, quien hubiera sido cismático o unitario estaba en problemas si se lo acusaba de otro delito. Esto es importante: salvo pequeñas excepciones y los

casos de abierta oposición al sistema, no se hacía una persecución de los opositores en los primeros años del segundo gobierno; pero aquel que era acusado por una razón no política tenía en la política un “prontuario” que contribuía a dirimir su situación. Por eso mismo, varios asuntos privados pasaron a zanjarse por la filiación política de los implicados. Por ejemplo, el abastecedor Marcos González acusó al paisano Juan José Martínez de hablar mal del gobierno. No había testigos del hecho, “por haber sido conversaciones privadas”, pero el comisario Cuitiño sostuvo que él no dudaba de que fuera cierto, porque Martínez “es hombre muy díscolo, mal intencionado y uno de los Unitarios mas empecinados”. Así, muchos encontraron en el federalismo la posibilidad de solucionar conflictos de otro orden, o apelaron a su fidelidad a la causa para lograr beneficios no ligados a la política.

Eso hizo en 1836 una de las sociedades africanas que había en Buenos Aires, la “nación Banguela”, que quería abrir un nuevo local para sus bailes. Sus miembros le escribieron al jefe de Policía para hacer la solicitud, y usaron como argumento que caracterizaba a “los que componemos esta sociedad el ser restauradores de las leyes y defensores de la causa nacional de la Federación”. Aunque en este caso la Policía no dio lugar al pedido, al gobernador le importaba mucho la relación con esas organizaciones. Las sociedades africanas mantenían vínculos con los go-

biernos desde su formación en la década del '20, pero en lo que Rosas se esforzó —tal cual había hecho Dorrego— fue en ganarse la adhesión de los negros. Se trató de una práctica que parece haber ido delineando de a poco. En 1831, por ejemplo, Rosas había permitido la reinstalación del tráfico de esclavos en Buenos Aires. Eso sin duda debe haber causado descontentos entre la población de origen africano; las sociedades, de hecho, tenían como principal fin prestar ayuda mutua pero también facilitarle el acceso a la libertad a los esclavos que quedaban en la provincia. Sin embargo, Rosas fue construyendo una política de acercamiento a los negros porteños: con donaciones y gestos de buena voluntad se fue ganando el favor de las sociedades. Como hemos visto, muchos de los que integraron la tropa de la “campana del desierto” fueron negros, y tanto él como Encarnación Ezcurra mantuvieron relaciones fluidas con los soldados y sus familiares directos. Consciente de la importancia del apoyo de la población de ese origen, que rondaba el 25% de la población total de la ciudad, Rosas reanudó en su segundo gobierno la asistencia financiera a las sociedades africanas y se dedicó a escuchar las demandas de la población negra y tratar de darles curso. En consecuencia tomó algunas medidas, como cuando en 1836 derogó una ley que establecía que todo libertado (es decir todo ex esclavo) tenía obligatoriamente que ingresar al servicio de las armas al cumplir quin-

ce años; la respuesta fueron manifestaciones callejeras para celebrarlo. Tanto él como su esposa, su hija y su cuñada concurrieron en ocasiones a los bailes que organizaban las sociedades, gesto muy importante que les valió una gran influencia, puesto que no era nada común que los miembros de la elite hicieran eso. La colectividad negra porteña en esos años lo llamaba “Nuestro padre Rosas”.

Tras su caída, los opositores denunciaron que Rosas había estimulado la realización de tareas de espionaje por parte de la población negra. Como muchas familias de la elite tenían esclavos integrando su servicio doméstico, se dijo que aquellos criados que habían denunciado a sus amos por opiniones unitarias o por conspirar contra el gobernador, habían obtenido a cambio su libertad. Es posible que eso ocurriese en alguna oportunidad, pero no hay datos de que haya sido algo extendido; más bien funcionó como una de las leyendas que sucedieron a la caída del régimen. De todos modos, el hecho de que se formulara esa acusación se apoyaba en sucesos verídicos: al comenzar la crisis rosista hubo domésticos de las familias de la elite porteña que hicieron denuncias (veremos ejemplos más adelante). Esas denuncias no eran aisladas, sino que se insertaban en una red de contactos que, como vimos, manejaba Encarnación Ezcurra. Cuando ésta murió, en 1838, su hermana María Josefa mantuvo esas relaciones. La red funcionaba como una especie de asistencia social

privada: los que llevaban noticias útiles a las señoras Ezcurra lograban algunos beneficios, no necesariamente como un pago directo sino que en otro momento podían obtener ayuda de ellas para conseguir bienes, perdones, favorecer a algún familiar, etc. Aunque esta red —que horrorizaba a los opositores, como es claro en la novela *Amalia*— implicaba a muchos negros, no era sólo para los descendientes de africanos, sino que incluía a otros plebeyos de ambos sexos. La mujer y la cuñada de Rosas se convirtieron por este medio en figuras muy populares. Una tarde de 1836, un tal Manuel Zaragoza llegó “de su trabajo a tomar mate en la cocina en donde estaban unas jóvenes de menor edad jugando con unas muñecas de trapo; y preguntó Zaragoza con ironía por el nombre que tenían cada una de dichas muñecas; y respondieron las jóvenes: que una se llamaba Doña Encarnación y otra Doña María Josefa”; Zaragoza se rió y dijo “unas Señoras con tanta Grandeza andar por las cocinas, vaya, vaya...”. El episodio llevó a que lo tildaran de unitario ante la Policía, lo cual muestra que era cierto que había domésticos, como en este caso los que trabajaban en las cocinas, que hacían denuncias políticas.

Además de cortejar el favor de los porteños de origen africano, otro eje de la política de Rosas en la ciudad fue ganarse el apoyo de los artesanos, categoría en la que entraba una buena parte de la población masculina (incluyendo a muchos negros).

Desde los panaderos hasta los zapateros eran artesanos, pasando por los plateros, sastres, sombreroeros, herreros, carpinteros y lomilleros (fabricantes de monturas y otras piezas para caballos). Había artesanos que tenían una muy buena posición económica, poseían talleres grandes y esclavos, pero otros eran bastante pobres. Para ser artesano se requería una formación brindada por un maestro, que empezaba desde niño y llevaba varios años. Esos aprendices —que solían tener un pasar muy modesto— llegaban a veces a ser maestros, aunque otros se convertían simplemente en oficiales —empleados que sabían el oficio— en los talleres.

Los artesanos habían estado entre los grupos menos favorecidos por el librecambio que comenzó en Buenos Aires en 1809 y se afianzó en los años '10. La apertura de las importaciones fue —de hecho— un gran problema para muchos artesanos. Por ejemplo, en 1815, el maestro mayor de sastres de la ciudad envió una solicitud al gobierno en la que sostenía que “el comercio extranjero que se hace de ropas manufacturadas es perjudicial al Gremio, e indirectamente a la prosperidad y riqueza del Estado”. También los carpinteros presentaron quejas ese año, pidiendo que se cerraran las tiendas de los artesanos extranjeros y que no “consintiese traer obrajes hechos de los que aquí en el país se hacían, pues se nos perjudicaba en gran manera a todos los artesanos”. Seis años más tarde volvieron a manifestar su descontento,

acusando a los ingleses de damnificarlos y defendiendo su posición con el argumento de que “todos los trabajos ingleses está visto que no son más que vista; pero duración y firmeza ninguna, pues está probado que el obraje americano es más sólido, más firme y de triple duración”. Pero ese descontento no dio lugar a acciones importantes a favor de medidas proteccionistas, fundamentalmente porque los artesanos porteños no consiguieron crear gremios que tuvieran un peso destacado en la escena política. En cambio, en otras ciudades hispanoamericanas y coincidiendo con el período rosista, hubo una serie de movimientos importantes de los artesanos a favor del alza de las tarifas para proteger sus producciones. La agitación de los artesanos fue muy fuerte en Bogotá y en Lima, lugares en los que llegó a la violencia declarada, y también en ciudades mexicanas y bolivianas, donde los artesanos se convirtieron en base política de dirigentes que prometían el alza de tarifas. Buenos Aires no tuvo esas movilizaciones corporativas, pero sí existía una suerte de corriente de opinión de los artesanos, favorable al proteccionismo y fuertemente contraria a los extranjeros.

Rosas tomó en cuenta esas posiciones cuando sancionó una ley de Aduana, en diciembre de 1835. En general, cuando se habla de la ley se pone el foco en la intención del Restaurador de mantener una buena relación con las provincias del Litoral y el Interior, donde había sectores perjudicados por el li-

brecambio, y en su deseo de impulsar la agricultura. Pero también fue importante la protección que se hizo a las tareas artesanales, que en ningún lugar eran tan fuertes como en la ciudad de Buenos Aires. Así, las importaciones de ropa, calzado, muebles, guitarras y espejos, entre otros productos, recibieron un recargo del 35% sobre su valor; las monturas uno del 50%. Los sombreros contaron con la protección de un impuesto fijo (\$13 por cada pieza), mientras que se prohibió total o parcialmente importar hierro decorativo, objetos de bronce y hojalata, utensilios de cocina, objetos de madera y algunos tejidos. La ley terminó cumpliéndose insuficientemente, pero su sanción contribuyó a incrementar la popularidad de Rosas entre los artesanos.

Finalmente, el mayor problema de Rosas en la ciudad era la elite porteña. Este grupo, que ocupaba la parte superior de la pirámide social, era amplio: abarcaba a un número importante de personas que en el período colonial se había autodefinido como “gente decente”. A esa elite pertenecían tanto los comerciantes y los estancieros que dominaban la economía de la provincia como los que formaban la oficialidad militar y/o habían ingresado en la carrera política. El grueso de la elite estaba profundamente politizado desde hacía años y las divisiones políticas en su seno eran mayores que en ningún otro sector social. Rosas pertenecía a esa elite y sabía que tenía una fuerte base en los estancieros, una

buena parte de los cuales apoyaban su proyecto. Para las funciones de gobierno contó con el respaldo de un grupo experimentado en la política porteña: el círculo apostólico que formaban Anchorena, Arana, Maza, Pinedo, Mansilla y unos pocos más. Rosas confiaba en la fidelidad de este puñado de dirigentes. Pero el resto de la elite era en buena medida un enigma. Sin duda, en 1835 la mayoría de sus miembros había aplaudido el regreso de Rosas al poder como garantía de orden ante la posibilidad de una nueva guerra civil. Pero esa adhesión no estaba exenta de fisuras y Rosas sabía que los vientos podían cambiar.

Para 1838, no había amaestrado a la elite. Muchos de sus miembros eran genuinamente federales, pero quienes habían seguido a los unitarios o a los cismáticos no eran tan fáciles de conquistar y varios mantenían estrechos vínculos con los emigrados al otro lado del Río de la Plata (quienes a su vez pertenecían a la elite porteña); otros no veían con buenos ojos la prolongación indefinida de un sistema de excepción que dejaba en suspenso el sistema republicano para concentrar todo en manos de un solo hombre. El principal recurso del gobernador para conseguir la aprobación de la elite era el mantenimiento de un orden, el preciado orden que se venía buscando desde que terminó la Revolución, y que había costado mucho construir (con la excepción de la efímera etapa rivadaviana de inicios de la década

de 1820). Pero cuando el bloqueo francés vino a poner en duda si la política rosista verdaderamente garantizaba el orden, la aparente unanimidad empezó a resquebrajarse: por más que no fuera la diplomacia porteña la principal culpable de la intervención francesa, muchos de los contemporáneos sí lo consideraron de esa manera.¹⁰

III. Donde se desarrolla cómo la instalación del bloqueo francés ensombrece el panorama y genera una gran tensión

El bloqueo dio inicio a una pesadilla para el rosismo. Al mes siguiente de su instalación, la provincia de Santa Fe pidió explicaciones. Súbitamente, ese aliado hasta entonces seguro que había sido el gobernador santafecino Estanislao López, pasaba a una oposición bastante sorprendente ante los ojos porteños. El Litoral se veía perjudicado por la medida francesa, a la que suponía resultado de un problema provincial, con lo cual Santa Fe (apoyado por Corrientes) exhortó a Rosas a poner fin al conflicto. Éste decidió dirigirse al conjunto de las provincias para pedir la aprobación de sus decisiones en el manejo de las relaciones exteriores (recordemos que además había iniciado la guerra con Bolivia, la cual continuaba con pocos combates y sin resultados precisos). La respuesta de la mayoría de las provincias

tardó en expresarse, en medio de una tensa calma, mientras los enemigos del Restaurador buscaban lograr una desaprobación conjunta de lo actuado. Y en la propia Buenos Aires encontró resquemores: en la hasta entonces pasiva Sala de Representantes se expresaron voces a favor de tomar el camino de la transacción, incluidas las de algunos diputados que hasta entonces habían formado en las filas fieles del rosismo. Una mañana de mayo ocurrió un hecho también impensable tan sólo un mes antes: la ciudad se pobló de pasquines contra el gobierno.

La respuesta de Rosas al desafío interno fue medida. Rápidamente apeló a un recurso clave que ya le había dado éxito en otras ocasiones: el apoyo popular. La clásica animadversión hacia los extranjeros se incrementó rápidamente, en particular hacia los franceses. Eso no lo inventó Rosas, fue un efecto inmediato del bloqueo. Para la plebe federal era claro que la antigua identificación que se había creado entre unitarios y extranjeros era completamente real; Rosas sabía que podía contar con un fuerte sostén si buscaba abajo en la escala social. Lo que logró el gobernador fue que el odio popular se encauzara no contra los franceses residentes en Buenos Aires (salvo pocas excepciones), sino en una crítica al rey Luis Felipe, a quien gritaban “muera” por las calles tildándolo de “criador de chanchos”, y sobre todo a los aliados rioplatenses de los bloqueadores, a los que se acusó de venderse al “asqueroso oro francés”. Una

agresión contra franceses residentes en la ciudad hubiera dado una excusa perfecta para una intervención directa de Francia en el terreno militar, posibilidad que el gobernador obviamente quería evitar. Era por otra parte una perspectiva que tampoco seducía a los franceses, quienes esperaban imponer su posición con un costo mucho menor: apoyando a los enemigos de su enemigo. Los que deseaban que los federales se lanzaran sobre los franceses de Buenos Aires eran los opositores a Rosas, que también sabían que un episodio así podía marcar su caída (de hecho, el personaje de *Amalia* Daniel Bello intenta en la novela persuadir a los rosistas más exaltados de que cometan una acción por el estilo). Pero la reacción contra los extranjeros no pasó de amenazas verbales. Cuando unos meses después de la instalación del bloqueo un francés pisoteó con su caballo a una morena en una calle de la ciudad, preguntando con soberbia al oficial que lo detuvo si eso era un delito, el comisario Andrés Parra le escribió a su superior: “Señor jefe, esta clase de extranjeros que no temen a la justicia, ni respetan las leyes del país, es preciso bajarles el cogote; para que aprendan a obedecer”. Pero no lo hizo.

El gobierno preparó cuidadosamente la fiesta del 25 de Mayo de 1838 para que fuera una demostración pública de la fidelidad general a la causa y graficara la popularidad del régimen. Tradicionalmente los gobiernos apelaban a las fiestas como modo de

asegurar adhesiones. Desde la Revolución de 1810 habían surgido una serie de celebraciones públicas que se convirtieron en una de las claves de la vida política porteña, un ritual de convivencia colectiva. Se celebraban desde 1811 los aniversarios de la Revolución (las Fiestas Mayas), desde 1817 los de la Independencia (las Fiestas Julias), la toma del mando de los gobernantes (siguiendo una vieja tradición española), la sanción de reglamentos, leyes u otras medidas importantes, y las victorias militares. Durante la guerra de la Independencia este tipo de festejos era muy recurrente y las Fiestas Mayas se transformaron con velocidad en el principal evento del año para la población porteña; su predominio prosiguió en las décadas siguientes. Se conservaron con alta popularidad otras fiestas tradicionales como algunas fechas religiosas —por ejemplo la de la Virgen del Pilar— y el carnaval; pero la celebración del 25 de Mayo atraía concurrencias masivas y recibía mucha atención de parte de las autoridades. Rosas conservó esa práctica, y lo que construyó fue una identificación entre la causa patriótica de 1810 y la causa federal. La liturgia se mantuvo: bailes, repiques de campanas, cañonazos, desfiles, iluminaciones de toda la ciudad, construcciones efímeras realizadas para la ocasión —como arcos de triunfo—, distintos decorados (en los que ahora predominaba fuertemente el color rojo). Hubo un gran esfuerzo gubernamental para ligar ese pasado ya mítico con el presente, pero

también se intentó incrementar el peso en la ciudad de las Fiestas Julias, que en Buenos Aires nunca habían sido muy importantes. Los unitarios se consideraban los más legítimos herederos del 25 de Mayo, y aunque el régimen les disputó ese terreno, en la celebración de la Independencia encontró uno más libre para construir su propia liturgia, asociando fuertemente la idea de independencia con la de federalismo.

La concurrencia a las Fiestas Mayas de 1838 fue muy numerosa y Rosas usó la ocasión para reforzar sus vínculos hacia abajo: invitó a las sociedades africanas a organizar un baile en la Plaza de la Victoria como número fuerte de la celebración. La plaza principal ocupada por los negros era un gesto político muy claro. Podemos deducir cuán importante debió ser el evento para ellos. En cambio, para varios integrantes de la elite la medida fue revulsiva. Una señora escribió a su marido diciéndole que “el día de 25 que ha sido respetado y debe ser mientras Buenos Aires existe, llegó al último grado de vileza y desgracia rebajando un día como ése a términos de poner tambores de negros ese día en la Plaza”. Por su parte, el poeta unitario Juan Cruz Varela, exiliado en Montevideo, publicó unos versos sobre la cuestión, en los que expuso: “Sólo por escarnio de un pueblo de bravos / bandas africanas de viles esclavos / por calles y plazas discurriendo van. / Su bárbara grita, su danza salvaje, / en este día meditado ultraje / del nuevo caribe que el Sud abortó”.

El mismo 25 de Mayo, varios miembros de la elite porteña acudieron a un evento más exclusivo: la presentación del *Credo de la joven generación argentina*. Se trataba de un texto producido por dos escritores que habían ganado un rápido prestigio en la ciudad: el porteño Esteban Echeverría y el tucumano Juan Bautista Alberdi. Junto a otros jóvenes letrados, como Juan María Gutiérrez, Félix Frías, José Mármol y Vicente Fidel López, el año anterior habían creado un salón literario (de ahí que más tarde fueran recordados como la “Generación del 37”), que fue el principal vehículo de ingreso del romanticismo en el Río de la Plata. Hasta la instalación del bloque francés, la intención política de estos escritores —que tenían una mirada muy crítica tanto sobre los unitarios como sobre los federales— había sido la de convertirse en una suerte de equipo de gobierno de Rosas, un grupo que por sus conocimientos y su manejo de las novedades en el pensamiento guiarían el proyecto del Restaurador. Sin embargo, éste no se plegó a esa voluntad: siguió rodeándose de los dirigentes apostólicos y encargando la publicidad de sus acciones a escritores de una generación previa, fundamentalmente a Pedro de Ángelis. El desaire del que se sintieron víctimas y el rechazo creciente del estilo político de Rosas hicieron que pasaran a la oposición. Primero fue tibia: organizaron reuniones clandestinas buscando crear una corriente de opinión que influyera en la dirigencia federal. Con el

bloqueo, y después de sufrir a fines de abril el cierre de su periódico *La Moda* por presión del gobierno, se mostraron más enérgicos y fundaron la asociación que presentaron en la principal fecha patria. Se trataba de una sociedad literaria y política, inspirada en la Joven Italia, una organización con rasgos masónicos creada en la Península Itálica por Giuseppe Mazzini y luego imitada en otros países (Joven Alemania, Joven Francia, Joven Inglaterra). Como ellas, la asociación fundada en Buenos Aires conservó cierto perfil clandestino, para evitar sanciones del régimen.

El gobierno tenía algunas ocupaciones más urgentes: Domingo Cullen, enviado por el gobernador de Santa Fe, llegó a la ciudad a plantear la oposición de esa provincia, Corrientes, Santiago del Estero y Córdoba al conflicto con Francia. El problema para Rosas no era tanto acceder a los vagos reclamos franceses, sino que tenía suficientes elementos para suponer que difícilmente sobreviviera en su puesto a la derrota que ello significaría. Dilató entonces su decisión y se dedicó a fortalecer su lazo con los británicos, neutrales en la contienda, a los que buscó erigir en contrapeso de la presión francesa.

La muerte de Estanislao López, que se conoció en Buenos Aires a fines de junio (y que Rosas esperaba, pues estaba informado de que se encontraba en la etapa final de una tuberculosis), vino en auxilio del Restaurador y marcó el primer paso de su reac-

ción. Enseguida pudo culpar a Cullen, elegido para ser el sucesor del santafecino, de connivencia con los franceses y de responsable de la agitación de las provincias contra su manejo de las relaciones exteriores. Apoyado por su protegido Pascual Echagüe, gobernador de Entre Ríos, el Restaurador desconoció a Cullen como legítimo mandatario de Santa Fe. La presión de ambos vecinos obligó a Cullen —a quien sólo apoyaba Corrientes— a abandonar su cargo y la provincia. El gobernador elegido en su lugar fue José Galisteo, un veterano político federal, que tampoco fue del agrado de Rosas. Éste puso los recursos de Buenos Aires al servicio Juan Pablo López, hermano del difunto Estanislao, quien en octubre invadió Santa Fe desde el sur y se convirtió en su gobernador (Galisteo fue enviado preso a Buenos Aires). El episodio hizo que el frente que parecía armarse contra la provincia más poderosa se desarmara rápidamente; sólo Corrientes mantuvo su posición desafiante.

Simultáneamente, el Restaurador puso orden en su provincia. En julio tuvo conocimiento —según la oposición por la denuncia de “un mulato”— de que se preparaba un levantamiento entre las tropas que custodiaban la frontera sur de la provincia. Se detuvo a su comandante, Zelarrayán, y se lo ejecutó apelando a que supuestamente había querido fugarse. Ahí se construyó uno de los primeros mitos de la crueldad de Rosas: trascendió que Zelarrayán fue decapitado y su cabeza enviada al gobernador, quien

obligó a otros dos conspiradores a contemplarla sin tregua durante tres días, so pena de morir si desfallecían en ese lapso. ¿Hecho verdadero o invento de la oposición? La información disponible no permite afirmar ni una cosa ni la otra. Lo que sí es claro es que la muerte de Zelarrayán mantuvo la quietud en la campaña durante un año más; y, a la vez, proporcionó un mártir a la causa antirrosista.

Ese mismo julio, el gobierno solicitó a la Legislatura que se expresara sobre la situación con los franceses y obtuvo una rotunda victoria; por si acaso, los miembros de la Sociedad Popular se hicieron presentes en la barra de la Sala para asegurar que los diputados no dudaran. La decisión de la Legislatura fue festejada en algunos barrios, que mostraron así su fidelidad federal. El juez de paz de La Piedad solicitó cien faroles para iluminar la iglesia homónima en un tedéum que se organizó “en acción de gracia al Ser Supremo por el beneficio que ha otorgado a la República en el pronunciamiento de la Honorable Sala de esta Provincia al aprobar la conducta de nuestro Ilustre Restaurador de las Leyes, encargado de las Relaciones Exteriores de la Nación, en la cuestión promovida por el Vice-Cónsul y Contra-Almirante Franceses”. Nuevas e importantes muestras de adhesión federal se expresaron en octubre, cuando murió Encarnación Ezcurra (a partir de entonces llamada “la heroína de la Confederación”). Los funerales fueron masivos, y durante varios me-

ses en todas las iglesias de la ciudad se realizaron misas en su memoria. Buenos Aires se manifestaba fiel, pero la crisis no hacía más que comenzar.

En la última parte de 1838 la situación se clarificó: el rosismo tuvo que enfrentar el incremento de la presión francesa. En septiembre regresó Roger con instrucciones y lanzó un ultimátum a Rosas, tras lo cual la escuadra atacó la estratégica isla Martín García y se apoderó de ella luego de derrotar una tenaz resistencia de la pequeña guarnición porteña. A la vez, Francia volcó su fuerza para definir la guerra civil en el Estado Oriental, apoyando ya sin atenuantes a Rivera, después de que éste triunfara a mediados de año sobre el ejército de Oribe y le arrebatara el control de toda la campaña. El presidente, encerrado en Montevideo, terminó renunciando y partió hacia Buenos Aires en octubre. Allí, Rosas lo consideró el gobernante legítimo del país vecino, desafiando abiertamente a los franceses. En diciembre, Corrientes, el Estado Oriental y los agentes franceses acordaron una alianza para “remover del mando de la Provincia de Buenos Aires y de toda influencia en los negocios políticos de la Confederación Argentina, la persona de Don Juan Manuel de Rosas”.

A ese trío se agregó el apoyo de los emigrados que se encontraban en Montevideo. Para activarlos fueron importantes los líderes de la Asociación de la Joven Argentina, que decidieron pasar de una tarea

propagandística —en la cual habían privilegiado al Interior— a una acción política más directa, en la que iban a mostrarse enérgicos. En particular Alberdi, quien en noviembre pasó a Montevideo y se preocupó por unir los esfuerzos de los alicaídos enemigos del rosismo, tanto los unitarios como los federales liberales, que encontraban muchos problemas para lograr acuerdos entre sí, fundados en sus rivalidades pasadas. Alberdi intentó unir a todos los descontentos y contribuyó a urdir una trama que permitió que los emigrados aceptaran aliarse con Francia contra Rosas (ni los unitarios ni los federales liberales querían al principio ligarse a un bloqueo provocado por una potencia extranjera). Para los jóvenes románticos, Francia era un faro, la voz de la civilización, y era la única que tenía la potencia de derribar al poderoso dictador porteño. Sin dudarlo, se dispusieron a aprovechar su intervención para librarse de Rosas: Alberdi en la República Oriental, Echeverría desde una estancia cercana a Luján en la que se instaló y el resto aún en Buenos Aires, a través de actividades secretas.

Al iniciarse 1839, entonces, el rosismo enfrentaba el mayor desafío que había tenido hasta ese momento. No lo hacía en las mejores condiciones: a fin de noviembre había llegado la noticia de la muerte de Heredia, el gobernador de Tucumán, un referente del federalismo del Interior cuya desaparición abría una incógnita sobre el futuro de esa región.

Mientras tanto, el bloqueo francés, que era muy efectivo, empezaba a perjudicar seriamente a la economía porteña. Esa situación podía hartar a la población, y para evitarlo la Policía empezó a actuar con más dureza contra los sospechados de ser opositores. El control se volvió más obsesivo y los sospechados de ser desafectos al sistema empezaron a mostrarse cada vez menos en público. Unos versos prorrosistas publicados en *La Gaceta Mercantil* en enero lo ilustran con claridad: “Un unitario que estaba, / como muchos escondido, / muy confuso y afligido / de este modo se expresaba. / Si voy a casa de tía / Temo hallar la Policía / si voy a la Lotería / Allí está la Policía / por la mañana saldría / Mas temo la Policía / si de noche, y no de día / Temo hallar la Policía / ¿Adonde diablos yo iría / sin hallar la Policía? / Que no era a la Policía / su temor, está probado / que su conciencia el malvado / era lo que le argüía”.

El 11 de enero, el jefe de la Policía de Buenos Aires, Bernardo Victorica, recibió un parte del comisario Cuitiño en el que le informaba que había remitido a la cárcel al paisano Zacarías Puyol por sospechoso. La razón era que lo habían visto varias noches seguidas “parado en un poste al lado del portón del cuartel” donde tenía sede la partida de Cuitiño. Para qué estaba allí no lo sabía, pero el comisario había decidido detenerlo de manera precautoria, dado que podía ser que quisiera apoderarse de las armas guardadas en el cuartel. La suposición obedecía

a las “sospechas que continuamente hay sobre los Enemigos de la Causa Santa de la Federación y siendo éste uno de los que conservan la patilla de U, la misma que en la misma noche de su captura, que fue el 10 del corriente, se afeitó en seco, por abajo de la barba”. En la ciudad, casos como éste no eran raros y nos muestran un poco el clima que se había instalado: una detención podía tener lugar por una vaga presunción y ser considerado unitario; por ejemplo, por la manera de llevar decorada la cara; hacía que se fuera cada vez más violentamente reprimido. La policía veía enemigos por todas partes y los arrestos se hicieron muy frecuentes. Cuitiño se mostraba infatigable en esa tarea: en febrero remitió preso a un antiguo oficial de Lavalle “por haberse expresado que no perdía las esperanzas de que fuese asesinado nuestro Ilustre Gobernador y Capitán General de la Provincia Don Juan Manuel Rosas; como lo fue el Señor General Quiroga”; a otro individuo por “perverso, infame e indigno Unitario, conocido en la del 1º de diciembre, y en la del 11 del mes de octubre”, quien había brindado “diciendo Viva Don Frutos Rivera y muera el tirano Rosas”; a doña Francita Pulido por haber golpeado a una joven, “tirarle de los cabellos y romperle las peinetas”, después de que en una discusión, la agredida la tildara de unitaria. Cuitiño dijo que estaba “muy cansado de varios avisos que han tenido de esta mujer, la que habla con desenfreno contra el Sistema Santo de la Federación,

dándole el trato de Tata en pifia a nuestro Gobernador; y manifestando que la Ilustre Señora finada debía estar en el cielo colorado, dando el título de engrasados a los Federales; las mismas Parientas que se han presentado ante el Infrascrito, a pedir por ella, lo confiesan, y dicen que es muy exaltada en el hablar, y que es cierto que siempre ha hablado contra nuestro Gobierno y que conocen que es muy unitaria”. De los detenidos algunos eran liberados, como el caso de esta mujer, y otros permanecían presos.

Un episodio que tuvo mucha resonancia fue el protagonizado por Manuel Cienfuegos, un ex oficial del Ejército que había sido desafectado porque fue clasificado como unitario. El 31 de diciembre lo encontraron disfrazado junto a la casa de Rosas en la ciudad y fue detenido; se dijo que había sido capturado dentro de la residencia. Cienfuegos alegó que estaba cortejando a una joven que vivía en la misma cuadra, pero no le creyeron y como consideró que el objeto de su presencia en ese lugar era atentar contra el gobernador, éste ordenó que fuera fusilado (según Eduardo Gutiérrez, Cienfuegos cayó en una estratagema del sereno Moreira para ganarse el favor del Restaurador, pero el resto de los testimonios sobre el caso nada dicen al respecto). El caso impactó a los emigrados: Mariquita Sánchez, exiliada en Montevideo, anotó en su diario que “el asesinato de Cienfuegos había hecho grande impresión”. Puede que Cienfuegos hubiera realmente intentado matar

a Rosas: el comandante de una fragata inglesa supo por esos días de parte de los franceses que ese plan existía. De cualquier manera, el acontecimiento causó un impacto fuerte en la ciudad y dejó ver con claridad el endurecimiento de la política rosista: un sospechoso podía llegar a perder su vida, sin un juicio previo.

Mientras tanto, la tensión con la alianza antirrosista había dado paso a un enfrentamiento abierto. Rivera, que tenía buenas relaciones en el Litoral, procuró en vano lograr apoyos para volcar esa región contra el gobernador porteño, al tiempo que envió un agente a Santiago del Estero —donde se encontraba refugiado Cullen— para impulsar un levantamiento en el Interior. Hubo algunos movimientos antirrosistas en Córdoba, pero fueron sofocados por su gobernador en marzo de 1839. Ese mes fue importante: el 10 el gobierno de Rivera —bajo presión francesa— le declaró la guerra a Buenos Aires, pero no lo hizo en un momento auspicioso, puesto que el 31 un ejército entrerriano conducido por Echagüe y Justo José de Urquiza derrotó completamente a sus aliados correntinos en la batalla de Pago Largo. El combate fue un anuncio de que la guerra que comenzaba iba a dar lugar a una violencia inédita en el Río de la Plata: decenas y decenas de prisioneros fueron degollados luego de la rendición correntina, entre ellos el gobernador Genaro Berón de Astrada, nuevo mártir de los antirrosistas.

Junto a las buenas nuevas llegadas de Corrientes y Córdoba, Rosas recibió otra gran noticia: en enero, los chilenos —apoyados por emigrados peruanos— habían vencido en la batalla de Yungay al mariscal Santa Cruz, y con esa victoria provocaron la disolución de la frágil confederación peruano-boliviana. El Restaurador tenía otra victoria para celebrar y el aire obtenido le hizo mostrar algunos gestos de distensión. El principal fue liberar al general José María Paz. Éste había estado preso en Santa Fe desde que en 1831 fuera capturado por partidas de esa provincia (su caída en manos de los santafecinos precipitó la ruina de la Liga del Interior, que dirigía y aceleró el triunfo del federalismo). Luego de varios años, el gobernador López lo había trasladado a Buenos Aires y fue confinado en Luján. Ahora Rosas le permitió vivir en la ciudad, con la prohibición de alejarse más de una legua de la Plaza de la Victoria. El 25 de Mayo llegó entonces con buenas perspectivas para el régimen y eso fue percibido por la población. Una mujer que acudió a una práctica corriente cada año antes de esa fecha, solicitó la libertad de su hijo teniendo en cuenta “las glorias del próximo aniversario que encuentra a Vuestra Excelencia cubierto de laureles inmarcesibles” (su hijo era un albañil arrestado por la acusación de haber robado un caballo). Al cumplirse la fecha patria, Rosas firmó un tratado con Gran Bretaña prohibiendo el tráfico de esclavos. Accedió así a un pedido que los

británicos venían realizando hacía tiempo y al que se había negado hasta entonces. Ahora buscó reforzar su relación con la mayor potencia como contrapeso a los franceses, y la medida le sirvió también para afianzar aún más su vínculo con los negros porteños. De hecho, nuevas demostraciones de apoyo público por parte de esa comunidad siguieron al anuncio.

La situación se encauzaba para el régimen: el Interior se mostró sumiso después de conocerse el resultado de Pago Largo; Santiago del Estero no resistió más las presiones de Buenos Aires y entregó a Cullen (que fue inmediatamente fusilado); Corrientes eligió un gobernador rosista; Echagüe preparó a su ejército para invadir el Estado Oriental y Rosas rechazó los intentos del preocupadísimo Rivera por conseguir la paz. Pero cuando la tensión en la ciudad parecía disminuir, el gobierno fue avisado de que allí mismo se conspiraba en su contra.

Quienes estaban descontentos habían empezado a reunirse al menos desde marzo, pese a la vigilancia del régimen. Muchos eran jóvenes de la elite que habían sido influenciados por la prédica de la Asociación de la Joven Argentina. Un resultado fue la formación del Club de los Cinco: Enrique Lafuente (empleado en la Secretaría de Rosas), Carlos Tejedor (quien sería gobernador de la provincia casi cuatro décadas después); Santiago Albarracín, Jacinto Rodríguez Peña y Rafael Corvalán (hijo de Manuel Corvalán, el edecán de Rosas). De acuerdo con

las tácticas de las sociedades secretas, el club tenía un distintivo: un tajo en el ala izquierda del sombrero. Sus objetivos no eran muy definidos en cuanto a posiciones políticas: “No se trataba por el momento de federación ni unidad, sino de concluir con Rosas”, diría años más tarde Tejedor. Primero proyectaron simplemente asesinarlo, pero luego el círculo del club se fue ampliando y se empezó a planear la realización de un levantamiento militar para apoderarse de la ciudad, que sería acompañado por un alzamiento en el sur de la provincia, donde estaban en comunicación con varios notables de la campaña, y por una invasión de Lavalle. Sabían muy bien, por sus contactos en Montevideo, que desde abril se preparaba allí una Legión Argentina para luchar a las órdenes de dicho jefe contra Rosas. Los conjurados porteños encontraron un líder en otro joven: el coronel Ramón Maza, hijo de Manuel, el dirigente rosista. Por eso, el movimiento pasaría a la historia como la Conspiración de Maza.

Los involucrados confiaban en obtener un apoyo masivo: “El pueblo está sumamente aburrido de la miseria y la esclavitud”, escribió Lafuente en una carta del 7 de mayo, y “las contribuciones, lo que empieza a exigirse, aumentarán el descontento”. Se refería a la contribución directa, impuesto cuyo cobro, que antes se hacía de acuerdo con lo que declaraba el que pagaba, empezó a ser calculado por el Estado. Además, decía, “todo está a más del doble de

antes". La conjura consiguió la adhesión de José Lavalle, hermano del general, y Maza empezó a buscar el apoyo de los comandantes de los batallones del ejército regular para asegurar el éxito del levantamiento. La trama no fue guardada con precaución y según el general Paz, quien fue enterado de ella, "el secreto de la conjuración estaba en miles de bocas". Uno de los que fueron convocados a unirse fue Nicolás Martínez Fontes, cuyo hijo era el segundo en el mando de un batallón del ejército regular que comandaba el decidido rosista Mariano Maza. Como Ramón Maza —que era primo de Mariano— tenía noticias de que en ese cuerpo militar había varios desafectos, tentó al padre del coronel —a quien se suponía opositor a Rosas— para que implicara al hijo en la confabulación. Martínez Fontes delató todos los planes a Rosas, quien inmediatamente hizo convocar a Ramón Maza al Fuerte y cuando entró lo hizo detener. Ese mismo día, 24 de junio, otros pocos conspiradores fueron arrestados también, entre ellos dos miembros del Club de los Cinco: Tejedor y Albarracín. Fueron engrillados, y dado que las familias acostumbraban llevar comida a los presos debido a la pésima calidad de la que se preparaba en la cárcel, el gobernador prohibió que fueran asistidos de esa manera. La pena no era verdaderamente demasiado pesada y sorprende que fueran muy escasos los que sufrieron la persecución del régimen. Es probable que el gobernador no haya dispuesto de todos

los nombres de los implicados, pero además es posible que haya juzgado que no era conveniente descubrir una gran conspiración, lo cual evidenciaría la existencia de muchos descontentos. Prefirió entonces concentrar la atención en Maza, que fue acusado de haberlo querido asesinar. Otro personaje fue incriminado en el asunto: el padre de Ramón, Manuel Vicente Maza. Era el mismo que hasta entonces había sido uno de los hombres clave del rosismo y seguía ocupando el cargo de presidente de la Sala de Representantes. ¿Sabía de la conspiración? Es posible, aunque no hay ningún dato cierto acerca de si participó o no en su organización (parecería que no). Cuando ocurrió la instalación del bloqueo, Maza se había mostrado partidario de negociar, pero nada indicaba que se pasaría a la oposición abierta. Sin embargo, Rosas estaba convencido de que él era parte, puesto que tenía en su poder correspondencia que su antiguo camarada había mantenido con algunos emigrados.

La noticia corrió rápidamente por Buenos Aires y causó conmoción. El 26 de junio se reunió la Sociedad Popular Restauradora. Nicolás Mariño afirmó que habían intentado matar a Rosas, que el culpable del plan era Manuel Maza e instó a que fuera destituido. Esa misma noche un grupo nutrido de federales, sin duda dirigidos por la Sociedad, se dirigió a la quinta del presidente de la Sala y la asaltó buscando a su propietario, quien no estaba allí. Al día siguiente,

para sorpresa de muchos, Maza se hizo presente en la Sala, mientras los jueces de paz urbanos encabezaban una movilización que presentó una petición para que se removiera al presidente de su cargo, por ser culpable de una revolución para entregar al país “a la execrable tiranía de los asquerosos franceses, con cuyo oro ha sido corrompido el expresado infame traidor”. Tres días más tarde, Rosas le escribió a su íntimo colaborador en la campaña, Vicente González, comentándole que varios de los peticionantes entraron a la Sala, “sacaron el retrato de dicho Maza y lo patearon, rompieron, y quemaron públicamente. Era singular la irritación de los federales, desde que vieron a clara luz que el plan era asesinar me vendido al oro francés”. Al caer la noche, dispersada la multitud, Maza se sentó en su despacho a firmar su renuncia. Súbitamente ingresaron tres personas emponchadas: eran los mazorqueros Manuel Maestre, Manuel Gaetán y Félix Padín. Un empleado de la Sala que se encontraba con él logró esconderse, pero Maza no. Dos lo sujetaron y Gaetán lo apuñaló hasta matarlo. Horas después, al llegar la mañana, su hijo Ramón fue fusilado por orden del gobernador.

Para los enemigos de Rosas no había duda de que quien había ordenado el crimen había sido él. Surgió en seguida la leyenda de que el Restaurador había presenciado todo oculto detrás de un cortinado. Rosas, por su parte, acusó públicamente del asesinato a los unitarios. Pero en su carta a Vicente Gonzá-

lez dio otra explicación. Al referirse a las consecuencias de la difusión de la noticia de la conspiración, dijo que “naturalmente la irritación era tremenda entre los que aman nuestra Santa Causa. En fin, el resultado es que esa noche a las siete y media encontraron muerto al Doctor Maza en la Casa de Representantes con dos tremendas puñaladas que le habían dado en el corazón. El Ramón que estaba en la cárcel con dos barras de grillos ya convicto y confeso, lo mandé fusilar al día siguiente porque así era de justicia, y porque no podía ser de otro modo”. Aquí Rosas parecía ignorar lo ocurrido con el padre, al tiempo que aceptaba sin miramientos lo actuado con el hijo. Su explicación parece sincera y eso no implica entrar en una discusión de si fue o no culpable, o si su culpabilidad ya existe por permitir que un hecho así ocurriese (como muchos años más tarde discutieron los historiadores). El punto es que es muy probable que los asesinos tomaran la decisión por sí mismos, o que lo hiciera la Sociedad Popular. Los rosistas temían, y no únicamente su líder. Si bien el gobernador ejercía un poder autocrático y supervisaba lo más posible las acciones de sus seguidores, eso no implica que los manejara como títeres. Por más que los federales netos, como se autoproclamaban, solían obedecerlo ciegamente, tenían también iniciativas propias y hacían sus propias interpretaciones de las órdenes que bajaba el gobierno. El rosismo no se reducía a Juan Manuel de Rosas.

El asesinato de Maza fue el primero que hizo la Mazorca desde el inicio de la crisis. Habían existido fusilamientos, sí, pero eso era diferente. El gobernador los definía usando las atribuciones dictatoriales de las que había sido investido. No había sido, sin embargo, facultado para mandar partidas a atacar una quinta o para entrar en la Legislatura a matar a su presidente a puñaladas. Eso no se había hecho dentro del marco legal, sino que un brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora lo había realizado por su cuenta.

Como reacción al episodio, los federales comenzaron un largo período de banquetes, brindis y bailes organizados en distintas partes de la ciudad y por gente de diferente condición social con el fin de celebrar el fracaso de la conspiración. En varias iglesias se hicieron ceremonias para agradecer la salvación del Restaurador. El retrato de Rosas fue expuesto en el altar de la iglesia de La Merced y luego fue paseado por las calles en un carro del cual tiraban algunas damas de la elite. Las adhesiones a su persona se explicitaron más fervorosamente y las amenazas de violencia se volvieron cotidianas. Por ejemplo, en agosto *La Gaceta Mercantil* publicó una carta que Cuitiño y Parra dirigieron al gobernador, en la cual afirmaban que “el único sentimiento, Excelentísimo Señor, que les queda a los que firman, es que estos indignos traidores y reos criminales de lesa Patria y América, no hayan probado de nuestras manos el

puñal que desnudo conservamos para sostener la ilustre persona de Vuestra Excelencia a costa de nuestra propia sangre, como del mismo modo el nombre santo de la Federación, que hemos jurado sostener con nuestras propias vidas”, asegurando que estaban listos para “ver la sangre argentina de los desnaturalizados unitarios derramada por las calles de Buenos Aires, como vemos correr el agua del Río de la Plata”. No eran los únicos: unos días más tarde otros empleados de la Policía enviaron a su vez una felicitación al gobernador, en la que destacaban cómo los conspiradores, “ni a un solo hombre del Ejército de línea y milicia, ni en la clase de tropa ni en la de Jefes y oficiales pudieron comprar”, y concluían con una terrible aseveración: “Es tal la irritación de los federales que si Su Excelencia no estuviera de por medio habrían amanecido y aún amanecerían hoy mil de aquellos degollados”. Hasta ese momento, ninguno de los considerados unitarios había sufrido un degüello en la ciudad, pero en el discurso ya asomaba esa sombría perspectiva.

La vigilancia sobre el espacio reanudó su tenacidad: la Policía detenía a todo aquel que fuera en algún punto sospechoso. Por ejemplo, un alcalde apresó a un tal Manuel Campo porque cuando la comisión organizadora de una función en la parroquia de Monserrat estaba haciendo una colecta entre los vecinos para solventarla, “al tiempo de contribuir dijo que Don Juan Manuel de Rosas parecía Rey

por tantas funciones que se le hacían”. Le devolvieron su contribución y más tarde fue detenido. No sólo las autoridades ejercían control, sino que las denuncias de particulares acerca del supuesto unitarismo de otros se hicieron cada vez más frecuentes. Como había sucedido anteriormente, la política se usó también para dirimir otras disputas.

Eso ocurrió en una noche al comenzar septiembre, cuando una mujer —la esposa de un capitán llamado Dionisio Farías— llamó al juez de paz de la parroquia de La Piedad para avisarle que en la casa contigua a la suya “había una reunión de extranjeros en la cual se echaban brindis contra la opinión Federal, contra nuestro Ilustre Restaurador de las Leyes, y mueras a Don Dionisio Farías”. Junto a la señora había otra gente que corroboró sus palabras. El juez intentó escuchar sin poder hacerlo, pero uno de sus colaboradores hizo un esfuerzo pegándose a la puerta y afirmó que había oído cómo se brindaba a favor de Lavalle. Convocaron entonces a los serenos y entraron en la casa, que pertenecía a una mujer llamada Antonia Cabello. Allí, once individuos estaban bailando (dos eran gallegos y uno gringo, pero los demás eran porteños) y fueron todos remitidos presos, salvo uno porque era el alcalde de barrio, Antonio Escobar. Como éste era un federal reconocido, se dirigió al jefe de Policía y sostuvo que era todo falso, que en la reunión habían “brindado federalmente”. Y realizó a continuación una muy in-

interesante descripción de qué se gritaba en los brindis (que por lo que se desprende del relato se hicieron cuando ya los presentes habían consumido bastante alcohol). Trascribirlos nos permitirá entender el clima de ideas en la ciudad de esos días.

Escobar sostuvo que él hizo un brindis por Rosas, por Echagüe, por “la Heroína Doña Encarnación Ezcurra de Rosas y para que las damas argentinas imitasen en su heroísmo a tan benemérita y esclarecida patriota”. Otro brindó por las damas correntinas, a lo cual Escobar agregó que “para ellas tomábamos pero no por los correntinos a quienes había batido su primo el general Echagüe en el Pago Largo por que eran unos unitarios cobardes; advirtiendo que a cada brindis se repetían al concluir los vivas a nuestro Ilustre Restaurador de las Leyes, mueran los salvajes unitarios, mueran los asquerosos e inmundos franceses, muera el asesino de Navarro el manco Lavalle y muera el Pardejón incendiario de Paysandú Frutos Rivera, con prevención que a cada vez que se nombraba la benemérita persona de nuestro Ilustre Restaurador todos se paraban”. Un tercero brindó porque se acababa de escarmentar a los indios enemigos en Tapalquén, “dando también gloria a nuestra cara Patria”. La dueña de casa improvisó un verso: “Viva la Federación / y mueran los unitarios / que viva el Restaurador / y Dios le dé la gloria a Doña Encarnación”. El resto de los brindis, sostuvo Escobar, tuvo la misma tónica.

Muchos elementos aparecen aquí. El principal es que es evidente que nadie podía confundir gritos a favor de Rosas con otros a favor de Lavalle. Teniendo en cuenta el contexto, el testimonio preciso del alcalde parece verosímil (y así lo consideró también el jefe de Policía). Resulta difícil imaginar a cualquier ferviente partidario del paladín de los antirrosistas gritando desenfrenadamente a su favor cuando la ciudad vivía bajo mucha presión. Lo que es claro es que los que estaban en la casa de al lado tenían una rivalidad con los que se encontraban en lo de Antonia Cabello, que habían gritado en contra del marido de la denunciante (de hecho, cuando Cabello fue arrestada, dijo al salir que ella era la culpable por no haberse mudado y continuar al lado “de semejante canalla”). Lo importante del caso es que muestra algo que se hizo cotidiano: la persecución política provocó que muchos conflictos de otra índole, como uno entre grupos barriales, buscara ser dirimido a través de acusaciones de infidelidad a la causa.

Por otro lado, los brindis traslucen que en Buenos Aires —en este caso en un barrio alejado del centro— se seguían atentamente los rumores y las noticias políticas: los gritos celebraban el triunfo del gobernador de Entre Ríos, una batalla contra los indígenas, e insultaban a Rivera (que había nacido en Paysandú y era llamado despectivamente “el pardejón”) y a Lavalle, a quien recordaban como fusila-

dor de Dorrego; y en un interesante sincretismo con el otro líder unitario Paz le adjudicaban erróneamente un rasgo que le pertenecía a éste: la falta de una mano. Testimonios así (y que no son tan abundantes por la escasez de documentación disponible) nos dan una idea de la exaltación de la identidad federal en la ciudad de la época. En ese clima se daban las amenazas de violencia ya mencionadas.¹¹

IV. Donde se narra cómo se desencadena la tormenta

En septiembre de 1839 parecía que la tensión descendía. El castigo a los Maza no se había extendido al resto de los complotados, y el padre de Tejedor se animó a pedir su libertad, obteniéndola (y recibiendo una recomendación de que su hijo no se relacionara con unitarios). También Albarracín fue liberado; se le dio la ciudad por cárcel. Así llegó octubre, que se conocía como “mes de Rosas” (la primera intervención suya en política, en 1820, había ocurrido durante ese mes, que era también el de la Revolución de los Restauradores). En el primer aniversario de la muerte de Encarnación su retrato fue paseado por la ciudad por federales entusiastas, quienes seguían en tren de festejos por la causa. Sin embargo, otra vez, si alguien tuvo expectativas de descompresión, no las iba a ver cumplidas.

La derrota de la conspiración de la ciudad aceleró el desencadenamiento de la que se preparaba en la campaña. A fines de octubre, en Dolores y Chascomús se alzaron en armas muchos de los antiguos soportes de Rosas, productores rurales cansados de los perniciosos efectos del bloqueo y amenazados por la nueva contribución directa. Fuerzas rosistas de la misma campaña, con apoyo de los indígenas, se reunieron rápidamente y en una sangrienta batalla concluyeron con el movimiento (y mataron a sus principales líderes). El levantamiento no llegó a durar dos semanas y con él se fue el último intento realizado en Buenos Aires de terminar con Rosas hasta 1852. Esa consecuencia estaría íntimamente ligada a los efectos que ambas conjuras tendrían en la política rosista. El hecho de que en el corazón de la campaña sur, la que había sido una importante base de poder para el Restaurador, hubiera surgido un descontento tal que había dado lugar a una rebelión, hizo que el régimen redoblara sus esfuerzos de vigilancia y acentuara la represión. En la campaña y en la ciudad, sobre la que Rosas era aún más desconfiado, los jueces de paz y los alcaldes ejercieron un control cada vez más severo, que en el ámbito urbano fue reforzado por la Policía y por la movilización de la Sociedad Popular Restauradora.

La oposición había quedado muy debilitada, aunque el gobierno sabía que mientras continuara el bloqueo francés y Lavalle estuviera en campaña, ten-

dría un aliciente para conspirar. Y tenía razón: un personaje ligado a la fallida conspiración de Maza, Andrés Somellera, contó en sus memorias que en noviembre de ese mismo año se reunía con otros opositores en los remates públicos, para evitar que sospecharan de ellos. Asimismo, sostuvo que había gente que guardaba en sus casas, ocultos en roperos, ejemplares del periódico *El grito argentino*, que Somellera y dos compañeros hacían “llegar sigilosamente a manos de los amigos de la causa”. Se trataba de una publicación furiosamente antirrosista editada en Montevideo e introducida clandestinamente en la provincia, que contenía ataques permanentes contra el Restaurador y sus crímenes: la cabeza decapitada de Zelarrayán, el fusilamiento de Cienfuegos, los indios fusilados en Retiro, otras muertes que perpetró en su primer gobierno. Además denunciaba que en el cuartel de Cuitiño ya no se fusilaba a los opositores sino que había dos indios pampa que los degollaban, para no despertar quejas por ruidos en el barrio de San Telmo. Diversas ilustraciones alusivas acompañaban al periódico, ejemplares del cual fueron en distintas ocasiones encontrados por la Policía en las calles de Buenos Aires.

Las actividades de Somellera fueron percibidas por la vigilancia rosista. Una tarde en que había acudido a un remate fue atacado a plena luz del día por un grupo de mazorqueros en el que estaban Gaetán y Cuitiño. Los transeúntes se apartaron y las puer-

tas se cerraron rápidamente alrededor: la población de Buenos Aires había aprendido a vivir con miedo. Somellera forcejeó y logró escaparse. En los meses siguientes vivió escondido. Sus compañeros tuvieron peor suerte: Félix Tiola fue capturado y fusilado por orden de Rosas, mientras que Manuel Bustillo fue atrapado una noche y trasladado por una partida al Hueco de los Sauces (hoy Plaza Garay), donde lo flagelaron de manera tal que tardó meses en recuperarse.

Después de eso fue evidente que cualquier actividad política se había vuelto casi imposible en la ciudad. Por eso, 1839 fue un año clave porque con él terminó prácticamente la acción antirrosista en el ámbito urbano. Somellera estuvo oculto en su casa los últimos días del año; salió disfrazado en enero de 1840 y en seguida pudo “notar en la ciudad un cambio sensible”: calles desiertas, puertas cerradas herméticamente desde las ocho de la noche, un silencio que nada interrumpía, “a no ser los gritos de los serenos que desde las diez de la noche, cada media hora, anunciaban la hora que era, precedida de la frase obligada de ¡Viva la Federación, mueran los salvajes unitarios!”. El temor de muchos se percibía; buena parte de la población, la elite en particular, tendió a encerrarse. Además, la actividad mercantil, eje de la economía porteña, estaba casi paralizada por el persistente bloqueo. “La fisonomía del pueblo de Buenos Aires había cambiado enteramente”, diría más

tarde el cordobés general Paz recordando esos días. “Sus calles estaban casi desiertas; los semblantes no indicaban sino duelo y malestar; las damas mismas parecían haber depuesto sus gracias; el comercio había caído en completa inactividad; la elegancia de los trajes había desaparecido y todo se resentía del acerbo pesar que devoraba a la mayor y mejor parte de aquel pueblo que yo había conocido tan risueño, tan activo, tan feliz en otra época”. La única esperanza que tenían los que eran sospechados de poca simpatía hacia el sistema federal era pasar desapercibidos o fugarse. Políticamente no tenían muchas opciones, salvo que Lavalle se decidiera en algún momento a avanzar sobre Buenos Aires.

La Policía porteña no daba tregua y para cualquier opositor la situación era muy compleja. Aquellos sospechados de unitarismo seguían siendo encerrados en la cárcel y el régimen había ideado un sistema hacia ellos que le era beneficioso: si querían salir en libertad tenían que entregar a uno, dos o más “personeros” para que fueran alistados en el ejército de la Confederación. Por convencimiento o para no ser molestados, muchos mostraban explícitamente su adhesión al régimen. En primer lugar, existía un vestuario federal: antes de fugarse, Somellera se hizo pasar por un partidario del Restaurador y para eso usó una chaqueta, chaleco colorado “y sombrero de unos que usaban los guasos, llamados de panza de burro”. Muchas puertas y

ventanas fueron también incluidas en el furor por el rojo punzó.

Desde el año previo, si una mujer no concurría a la iglesia con la divisa punzó bien expuesta, los mazorqueros podían pegarle en su pelo, con alquitrán, un moño colorado. No sabemos si ésta era una práctica habitual o si ocurrió en alguna oportunidad y el impacto que ocasionó hizo que fuera presentada como algo corriente; de todos modos, marcaba un incremento de la violencia. Llevar la vestimenta típica de la elite se consolidó como sinónimo de identidad unitaria. El archivo policial de ese año está repleto de clasificaciones de gente que fue arrestada en función de su ropa o de su barba. Por ejemplo: un tal Martín Quintana fue detenido por ser “paquete de frac y no llevar la divisa”. Casos como éste son tan frecuentes que a lo largo de 1840 no se encuentran entre los asuntos a los que atendió la Policía más que listados de unitarios y listados de sospechosos; sólo la política importaba en ese momento crítico.

De todos modos, es destacable que aún durante 1840 muchos porteños siguieran utilizando patillas, barbas con forma de U o no lucieran la divisa, como se desprende de los partes de la Policía. Quizá se debía a que la guerra no estaba definida: Lavalle estaba al mando de un ejército en Entre Ríos, Rivera había vencido en el Estado Oriental una invasión rosista, Corrientes había vuelto a expresarse contra el Restaurador y las provincias del norte habían desco-

nocido su manejo de las relaciones exteriores y habían formado una liga (integrada por Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja; Córdoba lo hizo efímeramente). Unas tropas que Rosas había enviado al norte para una misión pacífica al mando de Gregorio Aráoz de Lamadrid, tucumano que había sido unitario pero se puso a las órdenes del gobernador porteño ante la agresión francesa, se plegaron con su jefe al levantamiento. Y el bloqueo francés, asfixiante, proseguía.

En abril de 1840, un grupo de desafectos había logrado fugarse en una embarcación y recalar en Montevideo. Entre ellos estaban Somellera —quien ya había llevado a cabo un fracasado intento de emigrar clandestinamente— y el prestigioso general Paz. La noticia enfureció a Rosas, quien ordenó que se evitaran a toda costa acciones de ese tipo. La noche del 4 de mayo, Isidro Oliden, Francisco Lynch, José María Riglos y Carlos Mason, procuraron hacer el mismo viaje. Todos tenían antecedentes de oposición al régimen (Mason, por caso, era uno de los que consignamos anteriormente gritando muera en 1837 contra una persona que lanzaba vivas al Restaurador de las Leyes). Fueron traicionados por su guía, Juan Merlo, quien aparentaba colaborar con ellos pero en realidad estaba ligado a la Sociedad Popular. Cuando iban a embarcarse en la costa a la altura de San Telmo, fueron atacados por una partida a caballo que dirigía Cuitiño. Intentaron resistirse, pero fueron

degollados. El episodio fue uno de los que más impresión causó en la época entre los porteños y los emigrados. La novela *Amalia*, que comenzaría a publicarse en 1851, se inicia con una versión de ese acontecimiento (Mármol se encontraba preso en Buenos Aires cuando ocurrió).

¿Y Lavalle? Había comenzado sus movimientos pasando de Montevideo a Martín García en julio de 1839; Rivera se había opuesto porque eso enturbiaba sus intentos de acordar con Rosas, pero los franceses lo auxiliaron. Desde allí, en septiembre, invadió la provincia de Entre Ríos (cuyo ejército estaba mayormente en el Estado Oriental, pronto para luchar con Rivera). Esa campaña del Litoral duró diez meses, en los cuales Lavalle consiguió un par de victorias pero ninguna ventaja decisiva, salvo por el hecho de que su presencia devolvió a Corrientes al bando antirrosista (mediante el reemplazo del gobernador). En julio de 1840 fue severamente vencido en Sauce Grande por las tropas de Echagüe, quien desde principios de año había regresado a Entre Ríos luego de haber sido derrotado por Rivera en la batalla de Cagancha. Por lo tanto, cuando Lavalle accedió a los reclamos franceses de abandonar el Litoral y marchar sobre Buenos Aires, no lo hacía en las mejores condiciones. Barcos franceses trasladaron a sus soldados a San Pedro en los primeros días de agosto, desde donde inició su avance sobre la capital provincial.

En el norte de la provincia, Lavalle consiguió varias adhesiones, pero comenzaron a hacerse más escasas a medida que se aproximaba a la ciudad. Aunque allí se generó una gran expectativa, no se detectó ningún movimiento a favor del ejército invasor (o libertador, dependiendo de quién lo juzgara). ¿Por qué? Para muchos, por su fidelidad federal y su animadversión a los extranjeros, que estaban aliados con Lavalle. Éste trató de ocultar lo más posible el apoyo francés, que sabía impopular, y sostuvo que no venía a representar a una forma de gobierno, para así evitar chocar con el preponderante federalismo; la lucha era contra la tiranía de Rosas. Sin embargo, esas precauciones no surtieron efecto. En el caso de aquellos que seguían siendo desafectos al régimen, su pasividad ante la invasión tuvo que ver con el temor a las represalias si la expedición fracasaba. *La Gaceta Mercantil* dejó entrever que no había lugar para neutralidades: “¡O nosotros o ellos!”

Rosas delegó el mando en Felipe Arana y salió de la ciudad. Se instaló en Santos Lugares, donde preparó un ejército para esperar a Lavalle. El 29 de agosto éste se detuvo en Merlo, a menos de veinte kilómetros de las fuerzas de Rosas. Acampó allí y aguardó. En los días venideros se enteró de que nada ocurría en la ciudad y de que el general Oribe venía de Entre Ríos con refuerzos, debido a lo cual decidió eludir una batalla que presagiaba poco favorable y em-

prendió la retirada hacia Santa Fe. En la primera semana de septiembre la noticia se supo en la ciudad, que al principio reaccionó con cautela. Rosas, que permaneció en Santos Lugares, se movió con energía: el 25 publicó un decreto por el cual se confiscaban las propiedades y los bienes de los unitarios. Simultáneamente llegó la nueva de que un enviado del rey de Francia había llegado a Montevideo para negociar con el gobernador porteño. Lo peor de la crisis parecía estar superado para el régimen.

En ese clima se desencadenó el terror contra los sospechados de unitarios. Según el ministro Mandeville, en carta a su gobierno del 15 de octubre de 1840: “Los excesos cometidos en Buenos Aires por la gratificación de venganza pública y privada, han llegado a un punto tan alto rara vez registrado en los anales de la historia. Durante los últimos tres meses, hasta los últimos días no pasó una noche, salvo en dos o tres ocasiones, sin que dos o tres asesinatos no tuvieran lugar”. Echaba la culpa de los actos a la Mazorca. La explicación es muy clara: la cantidad de muertes parece exagerada dado que los crímenes habían empezado un mes antes, pero es interesante que el impacto del hecho hiciera que el ministro lo alargara. Los asesinatos documentados son menos de los que sugiere el británico: veinte (aunque seguramente hubo algunos más). Pero además fueron acompañados de otros casos de individuos que no murieron pero fueron torturados y heridos. “Con el pretexto

de revisar las viviendas para buscar las personas ocultas o armas”, decía Mandeville, “las mujeres son golpeadas y maltratadas; las viviendas, robadas; y los muebles y propiedad, destruidos”. Eso ocurrió por ejemplo con la casa de la familia de Luis Manterola, un emigrado que estaba en el ejército de Lavalle: entraron y golpearon a los presentes, rompiendo todo. La residencia del comerciante Félix Castro fue atacada pero él pudo ocultarse; los mazorqueros se llevaron un cofre con mucho dinero (el afectado logró exiliarse al poco tiempo). Un testigo, Vicente Quesada, que era un niño en esa época, contó cómo una noche de ese mes terrible se sintieron golpes en la puerta de su casa. Su familia, aterrorizada, pensó que era la Mazorca, pero se trataba de la desesperada esposa de Gregorio Terry que pedía refugio: su marido acababa de ser capturado por mazorqueros en su propia vivienda y su hermano Manuel había escapado por la azotea. Terry fue azotado y luego liberado. Por su parte, José María Salvadores, que había sido oficial de policía, supo que lo perseguía la Mazorca y se escondió en un sótano que estaba oculto en su casa. Asistido por su esposa, se mantuvo allí durante doce años; salió a los pocos días de la batalla de Caseros “con la barba crecida y larga hasta el estómago” (según anotó Juan Manuel Beruti en su diario, donde aseguró haberlo visto).

Otros tuvieron menos suerte: Sixto Quesada, antiguo colaborador de Lavalle, fue capturado por un

grupo de mazorqueros en la puerta de su casa y llevado a las inmediaciones del cementerio del norte, donde fue degollado; el comerciante portugués Juan Nóbrega, ligado a la conspiración de Maza, fue atrapado cuando se dirigía a su quinta y degollado; José Pedro Varangot, francés de origen, que había estado vinculado al líder unitario Agüero, fue degollado delante de su residencia. Al menos diecisiete personas más corrieron la misma suerte. Tras más de un mes de terror, Mandeville consideró que era demasiado y se quejó. Rosas le contestó que no era difícil contener el furor federal contra los enemigos, pero la matanza se suspendió esa misma noche. La calma volvió a la atemorizada ciudad.

En Buenos Aires no se registraron más actividades políticas contrarias al régimen. La sociedad porteña continuó movilizándose para festejar las victorias federales, para concurrir a las fiestas patrias en las que se celebraba tanto a los héroes del pasado como a los de la Confederación, a las fiestas religiosas en las que se pedían gracias divinas para la causa federal y se politizaban las prácticas habituales. Por ejemplo, en Semana Santa solía quemarse un muñeco que representaba a Judas; ahora, tanto en los barrios de la ciudad como en los pueblos de la campaña, el lugar de Judas lo ocupaba un muñeco de Lavalle o de Rivera. La Sociedad Popular Restauradora se reunía con regularidad, convocaba a misas por la Santa Causa y organizaba periódicamente guardias de ho-

nor para el gobernador, en fechas como el comienzo de las sesiones de la Sala de Representantes. En marzo de 1841 hubo una nueva conmoción, y tal cual ocurrió luego del asesinato de Maza se celebraron misas, algunos banquetes y se enviaron cartas de felicitación al Restaurador por haber salvado su vida. La causa fue el descubrimiento de una "máquina infernal" para matar al gobernador. Su hija Manuela abrió un paquete destinado a Rosas en el cual había un aparato que disparaba pistolas en todas las direcciones, cuyo dispositivo falló. El ardid había sido planeado en Montevideo, donde se publicaba el inflamado periódico *Muera Rosas* y los emigrados mantenían las esperanzas en que la muerte del Restaurador pudiera terminar con su sistema. Pero por el momento parecía más probable que el gobernador porteño terminara con ellos.

A fines de octubre de 1840, el ministro Arana había firmado la paz con el barón de Mackau, enviado francés. Un cambio de ministerio en su país había decidido la modificación de la política rioplatense: en vez de insistir en perseguir el mismo éxito que habían conseguido recientemente en México, preferían retirarse de una situación que no veían de fácil solución. Francia obtuvo de Buenos Aires el pago de las indemnizaciones por las cuales había dado inicio a su intervención y el trato de nación más favorecida; los porteños consiguieron el levantamiento del bloqueo, la devolución de Martín García y de los

barcos que la escuadra invasora había capturado. El honroso tratado acrecentó el prestigio internacional de Rosas.

La partida de los franceses dejó desamparados a sus recientes aliados. Rosas pudo volcar su consolidado poderío contra Rivera, contra Lavalle, contra Corrientes y contra la Liga del Norte. El ejército porteño, al mando de Oribe, derrotó a Lavalle en Quebracho Herrado a fines de 1840 y dio comienzo así a la revancha rosista. Oribe avanzó sobre el Interior y venció varias veces a Lavalle, quien moriría asesinado en Jujuy cuando ya no quedaba nada de su ejército. Las poderosas fuerzas porteñas, con el apoyo de las de Cuyo, aplastaron a las tropas de la Liga del Norte y reimpusieron el orden federal a sangre y fuego. Esto es literal: las atrocidades cometidas por esa expedición no tenían precedentes. Es cierto que la guerra había ido tornándose cada vez más violenta y que los ejércitos de Rivera y de Lavalle también provocaron horrores, pero nunca se había visto nada comparado a las ejecuciones masivas que siguieron en el Interior a las victorias de Oribe. No está claro si algunos mazorqueros acompañaron a la expedición como fuerza represiva; se ha dicho que Cuitiño fue enviado a realizar degüellos pero no hay certezas al respecto. Lo que sí es muy claro son los resultados de la violentísima campaña: a lo largo de 1841 todo el Interior disidente fue reincluido en la Confederación.

Sin embargo, en el Litoral las cosas volvieron a hacerse difíciles. Mientras el interior colapsaba, el general Paz, al servicio del gobierno correntino, derrotó a Echagüe en la batalla de Caaguazú, en noviembre de 1841. Pasó seguidamente a Entre Ríos y en marzo de 1842 se hizo nombrar gobernador de esa provincia. La llegada de esa noticia a Buenos Aires volvió a generar un estallido de terror. La Mazorca ganó las calles y cometió varios crímenes: otra vez, al menos veinte personas fueron asesinadas. Si los ataques de 1840 habían sido nocturnos, algunos de los de abril de 1842 se cometieron a plena luz: el abogado José Zorrilla fue degollado un mediodía en su casa, ubicada a metros de la Plaza de la Victoria, y un tal Duclós fue asesinado en el mismo horario. La crueldad fue incluso superior a la anterior: un comerciante español llamado Martínez Eguilar fue degollado a una cuadra de la iglesia de San Juan “y medio vivo metieron el cuerpo en una barrica encendida de alquitrán”; José Dupuy, también comerciante, fue degollado en el cuartel de Cuitiño, y su cuerpo fue luego colgado en un hueco de la parroquia de San Nicolás (aparentemente hubo gente que celebró allí la presencia del cadáver tirando cohetes); un santafecino apellidado Sañudo también fue degollado; misma suerte corrió Esteban Llanés, cuya cabeza fue colocada junto a la pirámide ubicada en la Plaza de la Victoria... El horror se ciñó sobre la ciudad: Tomás de Anchorena, preocupado, le escri-

bió a su primo Rosas el 19 de abril para decirle que se pasaba el día contestando cartas y recibiendo visitas, “que bañadas en lágrimas, y llenas de angustia, horror y espanto vienen a suplicarme les dé algún consuelo o consejo para salvar sus vidas, porque han sido avisados por diversos conductos de que cierta e indudablemente intentan matarlos”.

Las razones de este renacer de la violencia las explicó en medio de la matanza la mujer de Arana, Pascuala Beláustegui, en una carta del 16 de abril dirigida a alguien que hacía tiempo no estaba en la ciudad. “Aquí hemos tenido algunos de los sucesos de octubre”, decía, haciendo referencia a lo ocurrido en 1840. “Yo lo previne ya porque sabía que en el campamento”, es decir Santos Lugares, “había mucha exaltación contra los salvajes, pues decían que cuando habían pensado en retirarse a sus casas a descansar venían estos malvados a empezar de nuevo la guerra, que era preciso que no quedase uno para que ellos y el país disfrutasen de tranquilidad”. La opinión corría “desde el Jefe hasta el último tambor, me dicen que es lo mismo que circula en el ejército”. Y sugería que las partidas eran numerosas: “Las reuniones federales que Usted ha visto aquí son tortas y papel pintado para las que hay ahora, el exterminio de los salvajes es lo único que se oye como único remedio a la terminación de la guerra pues ya han desesperado de que la moderación pueda jamás convencerlos”.

El 19 de abril, el edecán Corvalán escribió por orden de Rosas a los jefes de la Policía, el Ejército y la Milicia diciéndoles que el gobernador “ha mirado con el más profundo desagrado los escandalosos asesinatos que se han cometido en estos últimos días, los que aunque habían sido sobre salvajes unitarios nadie absolutamente estaba autorizado para semejante bárbara feroz licencia, siendo por todo aún más extraño a Su Excelencia que la Policía se hubiese mantenido en silencio sin llenar el más principal de sus deberes”. Estas palabras invitan a diferenciar el “terror” de 1842 del de 1840. En ese año, las muertes fueron si no ordenadas por Rosas —en el sentido de que no podemos saber si seleccionó a las víctimas y ordenó su muerte— sí toleradas por él. Cuando en 1853 se juzgó a Cuitiño, éste sólo aceptó haber recibido órdenes de Rosas para matar a los que habían querido emigrar en mayo de 1840 (es decir a Oliden, Riglos, Mason y Lynch). No sabemos si los otros agredidos fueron elegidos por él. Es probable que se lo consultara, dado que cuando se degolló a José Nóbrega, Rosas decidió fusilar a su matador, que había sido Gaetán, el asesino de Maza. ¿Por qué castigó a éste y no a los otros? Quizá Gaetán actuó sin autorización, sin seguir los lineamientos del gobernador.

Sin embargo, también es posible que el Restaurador sólo hubiera dado libertad de acción a sus fanáticos seguidores y no que les hubiera marcado las víctimas. A esta posibilidad la apoya el hecho de que

cuando el gobernador decidió matar a alguien mandó que se lo fusilara. Lo cierto es que dependían de él, pues apenas lo ordenó las muertes cesaron por completo. Los asesinatos de 1840 fueron para Rosas una forma de descomprimir a través de la acción de la Mazorca la tensión que vivía la ciudad. Pero sobre todo fue una forma de aterrorizar a la elite porteña. No bastaba ya con usar la divisa punzó y mostrar una total neutralidad: la sospecha de alguna simpatía unitaria podía llevar la muerte a la propia casa de los implicados. Era una solución a la tradición de actividad política de la elite, una forma de terminar de disciplinarla. Y, sin duda, fue efectiva en la ciudad.

En 1842, en cambio, la Mazorca parece haber actuado por su cuenta. El gobernador estaba de nuevo en Santos Lugares. La Policía no se dedicó a detener las muertes pues seguramente no sabía bien qué indicaciones habían recibido la Sociedad Popular Restauradora y su brazo armado de parte de Rosas. No podemos saber exactamente qué pasó, pero podemos inferir por lo expuesto más arriba que la matanza no fue ordenada por el Restaurador, quien ahora no la necesitaba porque la ciudad ya se había quietado y no estaba amenazada por ningún peligro inmediato, como sí sucedió en 1840. La masacre de abril de 1842 parece haber sido una venganza llevada a cabo por los federales extremos contra aquellos a quienes volvieron a indicar como unitarios, produ-

cida por el hastío de la guerra y en algunos casos, posiblemente, por el deseo de apoderarse de algunos bienes de las víctimas. La intervención del gobernador volvió a ponerle fin al período sangriento.

Las muertes del terror no fueron tantas en comparación con las que provocaron los enfrentamientos bélicos y los fusilamientos. Hay poco más de ochenta casos de ataques mazorqueros en el período rosista. Es indudablemente un número muy significativo, pero lo que más horrorizó a la población afectada fue el método: asesinatos “a domicilio”, la sensación de total indefensión y de estar expuestos a terroristas capaces de todo. Los que habían sido víctimas de la violencia rosista aseguraban que los mazorqueros usaban un cuchillo afilado cuando querían matar a un enemigo, pero que usaban una sierra desafilada para degollar a los unitarios de primer rango social, para hacerlos sufrir más. Se decía que llevaban a cabo su tarea mientras entonaban “la refalosa”, unos versos supuestamente compuestos por Mariano Maza: “El que con salvajes / tenga relación, / la verga y degüello / por esta traición. / Que el santo sistema / de Federación, / le da a los salvajes / violín y violón”. La verga remitía a una vejiga de novillo llena de aire, con la cual se golpeaba a las víctimas. Todo lo expuesto contribuyó a eternizar el recuerdo de ese horror, más aún en una ciudad que nunca había vivido ese tipo de violencia política.

La crisis del sistema rosista iba a concluir durante 1842. Paz tuvo que retirarse de Entre Ríos por la hostilidad que lo rodeaba, el ejército de Oribe se dirigió hacia allí tras someter al interior y en el camino terminó con la disidencia de Santa Fe, que se había plegado a Corrientes. Rivera invadió Entre Ríos y unió su ejército al de los correntinos. En diciembre de 1842, chocó en Arroyo Grande con las tropas de Oribe, que lo derrotaron completamente. Rivera huyó a Montevideo y Corrientes volvió a integrarse a la Confederación. A partir de ese momento, la única oposición a Rosas en pie fue la desesperada ciudad de Montevideo, que pronto sería sitiada por el ejército de Oribe. Rosas intentó rendirla bloqueándola con su escuadra, pero la intervención de Inglaterra lo evitó. Así, Montevideo pudo resistir durante nueve años, período en el cual el rosismo enfrentaría diversos desafíos, como un nuevo bloqueo —esta vez anglo-francés— entre 1845 y 1847, u otro alzamiento correntino. Pero esos episodios no alteraron la calma de Buenos Aires: ni la campaña ni la ciudad presenciaron movimientos contra Rosas. Las calles porteñas fueron escenario de episodios muy aislados, como el de un borracho que en 1843 fue detenido por gritar en la calle “¡Viva Juan Lavalle! Yo doy la vida por él”, pero poco más.

Al finalizar 1844, Juan Manuel Beruti escribió en su diario que el año “ha concluido sin más novedad

que la guerra que aún sigue con Montevideo; pero la ciudad muy tranquila, aunque muy pobres sus habitantes por la falta de gente del país que se halla emigrada y el comercio paralizado; pero gracias a Dios no ha habido insultos, embargos, confiscaciones ni degüellos ni se ha perseguido a nadie”. Es que ya no era necesario, la ciudad había sido disciplinada. Y así, el 1° de junio de 1846, el mismo cronista pudo anotar que “desde este día ha quedado disuelta la Sociedad Popular Restauradora, alias la más-horca, que tantos males y lágrimas ha hecho derramar”. Los cinco años que quedaban de gobierno de Juan Manuel de Rosas estuvieron signados por la tranquilidad. Podría aventurarse que la década de 1840 fue políticamente la menos agitada de esa urbe durante todo el siglo XIX. La vida política efervescente no volvería a aflorar hasta después de la batalla de Caseros.¹²

V. Donde se exploran algunos motivos acerca de por qué ocurrió lo que ocurrió

¿Cómo pudo Rosas llevar adelante esa política? ¿Cómo la legitimó ante sus gobernados, en particular sus seguidores? Hay varios puntos que contribuyen a explicarlo. Uno es el hecho de que la causa federal se hubiera sacralizado, como marca el grito “Viva la Santa Federación”. Combatir a una causa

santa demonizaba a quienes lo hacían y justificaba que se los eliminara. El recurso a una santificación de sus posiciones había comenzado con la denominación de “apostólicos” que tomaron sus seguidores en la lucha federal; contribuía a considerar a sus rivales como enemigos de la religión. Cuando asumió el mando por segunda vez, Rosas impulsó que los sacerdotes concluyeran sus sermones explicitando su adhesión a la causa federal y que se exhibiera en las iglesias su retrato. Con los años fue aumentando estos requisitos y logró que el obispo instruyera a los curas párrocos para que recordaran a los fieles que debían acudir a la iglesia luciendo la divisa punzó. Como los jesuitas, a los que había permitido volver a la ciudad, no se plegaron a estas prácticas, una multitud federal los agredió en 1841, acusándolos de unitarios; la orden terminó disolviéndose.

Otro elemento destacado en la legitimación de la acción rosista estuvo en que la causa federal fue identificada con la causa de la patria. La patria era una referencia fundamental en la sociedad rioplatense: por ella se había peleado la guerra de la Independencia y con el Brasil. Era un principio que aglutinaba y contaba con fuertes contenidos emotivos y afectivos en su invocación: la patria estaba por encima de todos. Si Rosas se presentaba como salvador y defensor de esa patria, y la intervención francesa parecía confirmar su posición, su accionar era legítimo. Eso se articulaba perfectamente con el republi-

canismo, que Buenos Aires había adoptado como forma de gobierno desde 1820 (y, de hecho, desde 1810). El republicanismo recogía la tradición del bien común, que en la sociedad colonial constituía un valor fundamental. El bien común estaba por sobre los individuos y así se podía justificar cualquier acción que lo preservara.

Rosas desempeñaba, sin que se lo nombrase así, un papel similar al que se le otorgaba al dictador de la Roma clásica: un protector de su patria y de la libertad republicana a través de normas excepcionales. De allí que sus propagandistas lo identificaran constantemente con Cincinato, un héroe de la República romana que en el siglo V antes de Cristo dejó de lado el arado para ser designado dictador y salvar a su patria de una invasión. Los seguidores de Rosas sostenían que en la lucha del gobernador para asegurar la independencia de la Confederación Argentina “¿qué importa que hayan suspendido las formas si preservan la esencia?”. A las acusaciones acerca del terror, respondieron con un argumento republicano que ponía a la comunidad por encima de las personas: en 1844 *La Gaceta Mercantil* sostuvo que “la inviolabilidad del asilo doméstico es un principio de las constituciones modernas, pero esta regla tan lata y generosa desaparece en circunstancias que así lo exigen la salud de la Patria, el bien de todos, la conservación del cuerpo político. Los otros derechos consignados en los códigos políticos, por

francos y liberales que sean, están sujetos a esa condición fundamental; y enmudecen en las circunstancias extraordinarias”.

Junto a esto, hubo un ingrediente “clasista” en el federalismo que fue decisivo para legitimar su accionar. Hemos visto que el federalismo ya tenía un componente plebeyo en Buenos Aires porque era heredero directo del Partido Popular que había liderado Manuel Dorrego. Más allá de que los referentes del federalismo integraban lo más granado de la elite porteña, la construcción discursiva que identificaba a los unitarios con una aristocracia perniciosa, proveniente de los años 1820, continuó presente. Para muchos federales parece haber habido un sentido social, en el terreno simbólico, en el enfrentamiento con los unitarios. Ello es claro en el uso de vestimenta popular por parte de los primeros, en la adopción del popular bigote y en el rechazo del frac y la patilla en forma de U que utilizaba la elite. Por supuesto, no todos los plebeyos eran federales, pero sí existió una identificación de ese partido con lo popular.

Un ejemplo servirá para explicarlo. En enero de 1839, cuando la crisis empezó a tensar las posiciones, el pardo libre Felipe Vilaró denunció al médico Antonio Abad ante la Policía. Vilaró dijo que su mujer era doméstica en la casa de Abad y que él estaba haciendo unos trabajos de albañil en el mismo lugar, a razón de lo cual solía charlar con Abad “sobre asun-

tos políticos y del Bloqueo, rebatiendo siempre el declarante al Doctor Abad por ser contrario al Sistema Federal, al Ilustre Restaurador de las Leyes y estar conforme con el Bloqueo". Vilaró dijo que nunca había podido tener otros testigos al respecto como para incriminar a su empleador, pero ahora los había conseguido. Sostuvo que Abad había dicho "ya tiene usted a Lavalle en Santa Fe, y al gobernador de esa provincia en esta Capital, pues yo lo he visto, ya Echagüe está asesinado y pronto se verán rodeados de enemigos que no han de poder salir ni a San José de Flores y sólo se oirán los gemidos porque serán degollados; las tropas se pasarán todas y el Bandido Rosas que los tiene alucinados a ustedes con los bailes, será quitado del medio". Vilaró dijo que él contestó que "si algún soldado de los de mi cuerpo se pasara yo sería el primero que le pegaría un balazo aunque el Señor Gobernador me fusilase después", tras lo cual se encargó de difundir lo ocurrido "en el barrio para hacerlo conocer como enemigo del Gobierno". Por eso, Abad no lo dejó entrar más a su casa. Otros dos albañiles, ambos morenos libres, corroboraron la información de Vilaró. Abad se defendió afirmando que todo era mentira y que "sólo sí recuerda haber dicho uno de los días anteriores a presencia de los tres declarantes que había oído decir que las fuerzas Orientales se hallaban en Santa Fe; que es cuanto ha hablado respecto de política con lo que contra él exponen, creyendo que Vilaró haya he-

cho su delación por reconvenções de trabajo”. La disputa muestra —además de la existencia de múltiples rumores falsos, porque Lavalle no estaba en Santa Fe— el potencial de zanjar disputas sociales (en este caso laborales) que daba la adhesión al federalismo. La fidelidad a la causa le permitía a gente de inferior condición social acusar a miembros de la elite en igualdad de condiciones. Esto era impensable en la década anterior, en la cual el Estado intervenía mayormente a favor de los estratos más altos. No era que el rosismo buscara transformar la sociedad, sino que la entronización de la filiación política por sobre cualquier otra permitió que algunas tensiones sociales afloraran en el interior de la lucha contra los unitarios.

De hecho, los opositores a Rosas señalaron ese apoyo plebeyo y ese igualitarismo como uno de los rasgos del régimen. En *Amalia*, Mármol definió cómo el régimen era interpretado por la plebe. Describió a dos mulatas y tres negras que departían en la sala de la casa de María Josefa Ezcurra con un soldado en el cual “no podía distinguirse dónde acababa la bestia y comenzaba el hombre”. Estos personajes, “por una ficción repugnante de los sucesos de la época, osaban creer, con toda la clase a que pertenecían, que la sociedad había roto los diques en que se estrella el mar de sus clases oscuras, y amalgamándose la sociedad entera en una sola familia”. Vicente Quesada comentó que en medio del período del te-

rror “era preciso aparentar la más indiferente serenidad, porque se había perdido la confianza, los criados podían ser espías; una palabra indiscreta podía comprometer la vida o la fortuna: no se podía ni reconvenirles ni mirarlos con severidad; la tiranía estaba en los de abajo”. Otro contemporáneo sostuvo que entre 1839 y 1840 se llenaron las cárceles “con lo más decente y notable de la población, de nuestras mejores y más virtuosas familias”. Por su parte, Beruti sostuvo que los asesinos de 1840 y 1842 pertenecían a la “ínfima plebe”. Indudablemente, éstas no son sólo reconstrucciones de memorialistas rencorosos. Había una identificación popular con el federalismo que contribuyó a que se viera la presión política ejercida sobre la elite como una suerte de revancha social.

También Rosas aseguró que los momentos de terror fueron protagonizados por la plebe. La diferencia era que él la consideraba espontánea, mientras que sus enemigos, al igual que la mayoría de los historiadores más tarde, se encargaron de enfatizar que fue el Restaurador el que dirigió la represión. De cualquier manera, esa apelación a que fue la furia popular la ejecutora de los ataques no debe ser considerada tan sólo como una afirmación de Rosas para justificarse ante sus opositores y los observadores extranjeros. También pudo ser usado para legitimarse ante la misma plebe, y a la vez contribuir a su desmovilización real. Porque si la plebe rosista se consideraba en algún punto representada por las ac-

ciones de los mazorqueros, entonces Rosas también avanzaba en su principal objetivo: la construcción de un orden. Esto puede contribuir a explicar el porqué de una acción “parapolicial” contra los opositores que devino en el terror. Mientras que a la plebe porteña se la vigilaba y disciplinaba con las pocas herramientas estatales existentes, fundamentalmente la Policía, a la elite disidente se la perseguía —y así también disciplinaba— apelando a grupos que de alguna manera se arrogaban una representatividad popular. Era un mensaje hacia la elite disidente, prácticamente la única que fue agredida en los meses del terror, y a la vez hacia abajo. En 1840 la elite tuvo miedo a la acción popular, pero ésta estaba en realidad, más que en ninguno de los episodios políticos con participación plebeya en Buenos Aires, controlada por las autoridades. El terror fue sólo parcialmente popular; se reivindicó como tal y quizá representó el deseo de muchos, pero de hecho quedó en pocas manos y se convirtió en una política de gobierno. A través de las actividades de la Sociedad Popular Restauradora y, sobre todo, de la Mazorca, el régimen rosista desmovilizó cualquier posibilidad de acción colectiva de sus mismos partidarios plebeyos y fue moldeando una sociedad con una agitación política muy inferior a la que había dado lugar al ascenso del Restaurador.¹³



Notas

¹ *La Tribuna*, Buenos Aires, 30/12/1853, N° 117, p. 2.

² Las denuncias contra la Mazorca fueron muchas. Entre los contemporáneos destacan los periódicos montevidéanos *Muera Rosas* y *El grito argentino*, la novela *Amalia*, de José Mármol, y las *Tablas de sangre*, del ex rosista José Rivera Indarte. Posteriormente, Eduardo Gutiérrez realizó un novelado y macabro cuadro de los crímenes mazorqueros en su serie folletinesca *Los dramas de la tiranía* (*La Mazorca*, *Viva la Santa Federación* y *El puñal del tirano*); también Adolfo Saldías (*Historia de la Confederación Argentina*) y José Ramos Mejía (*Rosas y su tiempo*) se ocuparon con profusión de la cuestión. Los atacantes del rosismo durante el siglo XX acudieron en general a todos esos escritos para realizar sus argumentaciones. Entre los defensores —provenientes de las filas del revisionismo— algunos pusieron en duda la existencia de la Mazorca (el llamado “terror” habría sido en realidad una expresión de descon-

tento popular), tal el caso de Vicente Sierra en su *Historia de la Argentina*; otros justificaron el accionar mazorquero, como José María Rosa en *Rosas: nuestro contemporáneo*. Dos libros que aportan miradas interesantes sobre las razones y las características del terror en tiempos de Rosas son *Juan Manuel de Rosas*, de John Lynch, y *De la Revolución de Independencia a la Confederación rosista*, de Tulio Halperin Donghi. Para las referencias de todos véase la bibliografía al final.

³ Las citas textuales son de una carta de Felipe Arana a Juan Manuel de Rosas del 28 de abril de 1833, en Celesia, *Rosas. Aportes para su historia*, t. I, p. 506; informe de Policía del 17 de junio de 1833, en Archivo General de la Nación, sala X, legajo 16-3-4; carta de Prudencio Rosas a su hermano Juan Manuel del 28 de septiembre de 1833, en Celesia, op. cit., t. I, p. 616.

⁴ En orden: periódico *El defensor de los derechos del pueblo*, 81, 1º de octubre de 1833; Tomás de Iriarte, *Memorias*, vol. 5, pp. 30 y 22; carta de Rosas del 17 de julio de 1833, en Celesia, op. cit., t. I, p. 576; cartas de Ezcurra, en Lobato, *La revolución de los Restauradores*, pp. 81, 82, 85 y 89.

⁵ AGN, X, 16-4-7, Policía, nota del 9 de julio de 1834; cartas de Maza, en Celesia, op. cit., t. I, pp. 561 y 564; carta de Rosas, en Lobato, op. cit., p. 90; carta de Parra y Cuitiño, en Celesia, op. cit., t. II, p. 143. Se cuenta con un solo testimonio sobre el origen de la Sociedad Popular. Se encuentra en *Rosas y sus opositores*, de José Rivera Indarte, un periodista que fue inicialmente un apasionado apostólico y más tarde se convertiría en un acérrimo antirrosista (por lo cual mucho de lo que escribió sobre el líder federal está plagado de exageraciones de todo tipo); a diferencia de otros pasajes de este autor, éste es verosímil (p. 134).

⁶ Ezcurra sobre "pasteleros", en Celesia, op. cit., t. I, p. 388; Gutiérrez, en Busaniche, *Rosas visto por sus contemporáneos*, p. 57; carta de Arana, en Celesia, op. cit., t. II, pp. 394 y 395; Encarnación, *ibídem*, p. 43; J. Mármol, *Amalia*, p. 153; carta de Julián Sa-

lomón a Rosas del 30 de septiembre de 1840, en Celesia, op. cit., t. II, p. 461; *La Gaceta Mercantil*, 7 de abril de 1841; *Archivo Americano y espíritu de prensa del mundo*, t. 1, pp. 56-57.

⁷ En orden: nota del jefe de Policía, en AGN, X, 16-7-3, 1/7/1835; notas de Cuitiño, *ibídem*, 7 y 21/9/1835, 3/3, 14/7, 5/5, 12/1 y 8/1 de 1836; el detenido sin papeleta en el mismo lugar, legajo 33-3-8, 1839, libro 113, exp. 243.

⁸ En orden: "Tribuno de la Plebe", en Iriarte, *Memorias*, vol. 1, p. 275; AGN, X, 29-10-4, Sumarios Militares, 213; "Causa criminal seguida de orden suprema a varios ladrones...", AGN, Tribunal Criminal, J-1/L-1, 1817; "Doña Manuela Padrón con Don Felipe López por haberle herido un negro", AGN, Tribunal Criminal, J-1/L-1; "Carta de Miguel Zañartu a Tomás Godoy y Cruz", cit. en Fabián Herrero, "Un golpe de estado en Buenos Aires durante octubre de 1820"; el duelo en AHPBA, 34-2-38, Juzgado del Crimen, 25 (1819); AGN, 29-10-2, Sumarios Militares, 160; *Almanaque Político y de Comercio de la Ciudad de Buenos Ayres para el año de 1826*, (hay un listado alfabético de comerciantes entre las pp. 92 y 153); carta de Balcarce, en Celesia, op. cit., t. I, p. 493; Gutiérrez, en Busaniche, op. cit., p. 56; carta de Rosas a Arana del 28 de agosto de 1833, en Celesia, op. cit., p. 529; J. M. Beruti, *Memorias curiosas*, p. 514; carta de Salomón a Rosas del 30 de septiembre de 1840, en Celesia, op. cit., t. II p. 462; nota del jefe de la Policía del 13/12/1835, en AGN, X, 16-7-3; Mármol, *Amalia*, pp. 149-150. La disputa entre Cuitiño, Benavente y Salomón, en AGN, X, legajos 16-3-5, 16-4-7 y 16-7-3.

⁹ En orden: carta de Cuitiño y Parra, en Celesia, op. cit., t. II, p. 44; Oscar Muiño, "La providencial traición de la 'Trinidad'", p. 79; *El Tiempo*, N° 5, 6 de mayo de 1828; Venancio Vivas en nota del 26/5/36, AGN, X, 33-2-7.

¹⁰ Citas en orden de aparición: carta de Mandeville a Palmerston, cit. en J. Lynch, *Juan Manuel de Rosas*, p. 233; los vivos de Eulogio Blanco, en AGN, X, 33-2-8, libro 91, 87; Máximo Salguero, en AGN, X, 33-3-4, libro 101, 116; las clasificaciones de Cuitiño, en AGN, X, 33-2-8, libros 90 y 91;

Martínez, en AGN, X, 33-3-3, nota del 21/7/1837; los Banguela, en AGN, X, legajo 33-2-8, libro 90, 77; las muñecas Ezcurra, en nota del 3/12/36, AGN, X, 33-2-7; la queja del maestro sastre, en AGN, X, 8-9-5; la otra queja de artesanos en el periódico *Eu não me meto com ninguém*, N° 1, 24/9/1821.

¹¹ En orden: AGN, 33-3-7, libro 111, 116; el testimonio y la poesía sobre los negros en las Fiestas Mayas cit. en G. Andrews, *Los afroargentinos de Buenos Aires*, p. 120; conspiración de Zelarrayán, en *El grito argentino*; el tedéum, en AGN, X, 33-3-7, libro 111, 25; la alianza antirrosista en J. L. Busaniche, op. cit., p. 204; versos en *La Gaceta Mercantil*, 22/1/1839, N° 4676, p. 2; informes de Cuitiño, en AGN, X, 33-3-8; Cienfuegos en *Cartas de Mariquita Sánchez*, carta del 24/7/1839; la mujer que pide por su hijo, en AGN, X, 33-3-8, 113; testimonios de Tejedor y Lafuente, en Enrique Barba, "Las reacciones contra Rosas", pp. 590-1; José María Paz, *Memorias póstumas II*, p. 205; carta de Rosas, en Celesia, op. cit., p. 467; carta de Cuitiño y Parra, en *La Gaceta Mercantil*, 7/8/1839, N° 4831, p. 2; felicitación de la Policía, en AGN, X, 33-3-8, 145, Manuel Campo, *ibidem*, 163 y los brindis, *ibidem*, 198.

¹² En orden: Andrés Somellera, *La tiranía de Rosas*, pp. 19 y 43; Paz, *Memorias póstumas II*, p. 209; el sombrero de Somellera, en *La tiranía de Rosas*, p. 56; el "paquete de frac", en AGN, X, 33-4-2; Mandeville en Néstor Montezanti, "Rosas y el terror", p. 33; Salvadores y muerte de Martínez, en Beruti, *Memorias curiosas*, pp. 490 y 519; Anchorena cit. en Francisco Romay, *Historia de la Policía Federal Argentina*, p. 242; cartas de Beláustegui y de Rosas cit. en Barba, "Las reacciones contra Rosas", pp. 690 y 691; la "refalosa", en Eduardo Gutiérrez, *Viva la Santa Federación*, p. 8; los gritos lavallistas, en AGN, X, 33-4-6, libro 130; Beruti, op. cit., pp. 454 y 460.

¹³ En orden: *La Gaceta Mercantil* cit. en Jorge Myers, *Orden y Virtud*, p. 234; el caso de Vilaró, en AGN, X, 33-3-8, 29/1/1839; Mármol, *Amalia*, p. 105; Vicente Quesada, *Memorias de un viejo*, p. 102; Santiago Calzadilla, *Las beldades de mi tiempo*, p. 214; Beruti, *Memorias curiosas*, p. 506.



Fuentes

Agrelo, Emilio: *Acusación del agente fiscal Dr. D. Emilio Agrelo, contra el reo Antonino Reyes*, Buenos Aires, Imprenta "La Tribuna", 1854.

Almanaque Político y de Comercio de la Ciudad de Buenos Ayres para el año de 1826, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1968.

Archivo Americano y espíritu de prensa del mundo, primera reimpresión del texto español conforme a la edición original 1843-1851, t. 1, Buenos Aires, Editorial Americana, 1946.

Archivo General de la Nación, sala X, legajos de:

Partes de Policía (33-1-9, 33-2-8, 33-3-4 y 33-3-7);

Policía (16-3-4, 16-3-5, 16-4-7, 16-7-3, 33-4-6, 33-4-8, 33-4-9, 33-5-1, 33-6-1);

Policía-Órdenes superiores (33-2-7, 33-3-3, 33-3-2, 33-3-8, 33-4-2);

- Solicitudes civiles (8-9-5);
 Sumarios militares (29-10-4);
 Tribunal Criminal (J-1/L-1).
- Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Juzgado del Crimen, legajo 34-2-38.
- Beruti, Juan Manuel: *Memorias curiosas*, Buenos Aires, Emecé, 2001.
- Busaniche, José Luis: *Rosas visto por sus contemporáneos*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.
- Caillet-Bois, Ricardo: "Quebracho Herrado y la muerte de Marco Avellaneda. Narrados por un testigo presencial", Trabajos y Comunicaciones, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 1958.
- Calzadilla, Santiago: *Las beldades de mi tiempo*, Buenos Aires, Jacobo Peuser, 1891.
- Celesia, Ernesto: *Rosas. Aportes a su historia*, t. I y II, Buenos Aires, Peuser, 1951.
- Echeverría, Esteban: *La Cautiva. El matadero. Ojeada retrospectiva*, Buenos Aires, CEAL, 1987.
- El defensor de los derechos del pueblo*, 1833.
- El grito argentino*, 1839.
- El tiempo*, 1828.
- Esteves Seguí, Miguel: *Defensa ante el juzgado de primera instancia en la causa seguida de oficio contra Antonino Reyes*, Buenos Aires, Imprenta "El Pueblo", 1854.
- Eu não me meto com ninguém*, 1821.
- Foreign Office (en Academia Nacional de la Historia), correspondencia oficial de Woodbine Parish, F. O. G/26 y G/27.
- Iriarte, Tomás de: *Memorias*, vol. 1 y 5 (*Luchas de unitarios, federales y mazorqueros en el Río de la Plata*), Buenos Aires, Sociedad Impresora Americana, 1944 y 1947.
- Isabelle, Arsenio: *Viaje a Argentina, Uruguay y Brasil en 1830*, Buenos Aires, Editorial Americana, 1943.

- La Gaceta Mercantil*, números alternados entre 1835 y 1841.
- La Tribuna*, 28 al 30 de diciembre de 1853.
- Manso, Juana: *Los misterios del Plata*, Buenos Aires, Imprenta Americana, 1855.
- Mármol, José: *Amalia*, Buenos Aires, Eudeba, 1964.
- Memorias de D. Antonio Alcalá-Galiano*, Madrid, Biblioteca autores españoles, 1955.
- Paz, José María: *Memorias póstumas II*, Buenos Aires, Emecé, 2000.
- Quesada, Vicente: *Memorias de un viejo*, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1998.
- Rivera Indarte, José: *Tablas de sangre*, Buenos Aires, El Ateneo, 1930.
- Rivera Indarte, José: *Rosas y sus opositores*, Buenos Aires, El Ateneo, 1930.
- Somellera, Andrés: *La tiranía de Rosas. Recuerdos de una víctima de la Mazorca*, Buenos Aires, Nuevo Cabildo, 1962.
- Vilaseca, Clara (comp.): *Cartas de Mariquita Sánchez. Biografía de una época*, Buenos Aires, Peuser, 1952.



Bibliografía

- Allende, Andrés: "La reacción de Buenos Aires después del sitio de Lagos. Los grandes procesos", en *Labor de los Centros de Estudios*, Universidad Nacional de La Plata, sección II, t. XXIV, p. 121, La Plata, 1941.
- Andrews, George: *Los afroargentinos de Buenos Aires*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1989.
- Barba, Enrique: "Formación de la tiranía" y "Las reacciones contra Rosas", en Academia Nacional de la Historia, *Historia de la Nación Argentina desde sus orígenes hasta la organización definitiva en 1862*, Buenos Aires, vol. VII, 1950.
- Barreneche, Oscar: *Dentro de la ley, todo. La justicia criminal de Buenos Aires en la etapa formativa del sistema penal moderno de la Argentina*, La Plata, Ediciones Al Margen, 2001.
- Brown, John: *Historia socioeconómica de la Argentina, 1776-1860*, Buenos Aires, Di Tella/Siglo XXI, 2002.

- Burgin, Miron: *Aspectos económicos del federalismo argentino*, Buenos Aires, Hachette, 1960.
- Cansanello, Orestes Carlos: *De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. Buenos Aires, 1810-1852*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2003.
- Chamosa, Oscar: "To honor the ashes of their forebears. The Rise and Crisis of African Nations in the Post-Independence State of Buenos Aires, 1820-1860", en *The Americas*, 59:3, 2003.
- Chiaromonte, José Carlos: "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX", en Marcello Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Chiaromonte, José Carlos: *Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846)*, Buenos Aires, Ariel, 1997.
- Cicerchia, Ricardo: *Historia de la vida privada en la Argentina*, Buenos Aires, Troquel, 1998.
- Cutolo, Vicente: *Nuevo diccionario biográfico argentino (1776-1930)*, 6 vol., Buenos Aires, Elche, 1968.
- Di Meglio, Gabriel: *¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.
- Di Stefano, Roberto: *El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.
- Fitte, Ernesto: "La Revolución de los Restauradores", *Separata Investigaciones y Ensayos N° 23*, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1997.
- Fradkin, Raúl: *La historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006.
- Garavaglia, Juan Carlos: "Paz, orden y trabajo en la campaña:

- la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires, 1830-1852”, *Desarrollo Económico*, 1997.
- Garavaglia, Juan Carlos: “Escenas de la vida política en la campaña: San Antonio de Areco en una crisis del rosismo (1839/40)”, en Garavaglia, *Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de la Plata, XVIII-XIX*, Rosario, Homo Sapiens, 1999.
- García, Carlos: “El proceso a los mazorqueros en el año 1853”, en *II Congreso Internacional de Historia de América*, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, t. III, 1938.
- Gelman, Jorge: “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX”, *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”*, tercera serie, N° 21, 2000.
- Gelman, Jorge: “La rebelión de los estancieros contra Rosas. Algunas reflexiones en torno de los Libres del Sur de 1839”, *Entrepasados*, N° 22, 2002.
- Gelman, Jorge: *Rosas, estanciero. Gobierno y expansión ganadera*, Buenos Aires, Editorial Claves para Todos, 2005.
- Goldberg, Marta: “La población negra y mulata de la ciudad de Buenos Aires, 1810-1840”, *Desarrollo Económico*, vol. 16, Buenos Aires, 1976.
- Goldman, Noemí y Ricardo Salvatore (comps.): *Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
- González Bernaldo, Pilar: *Civilidad y política en los orígenes de la Nación Argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1852*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- González Bernaldo, Pilar: “Sociabilidad, espacio urbano y politización en la ciudad de Buenos Aires (1820-1852)”, en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), *La vida política en*

- la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- González Espul, Cecilia: "Ciriaco Cuitiño: un personaje tenebroso", en *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, N° 33, Buenos Aires, 1993.
- Grupo Sociedad y Estado (director: Carlos Mayo): *Pulperos y pulperías de Buenos Aires / 1740-1830*, Mar del Plata, Facultad de Humanidades, UNMP, 1996.
- Guerra, François-Xavier: *Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Gutiérrez, Eduardo: *Juan Cuello*, Buenos Aires, Editorial El Boyero, 1894.
- Gutiérrez, Eduardo: *La Mazorca*, Buenos Aires, J. C. Rovira editor, 1932.
- Gutiérrez, Eduardo: *Viva la Santa Federación*, Buenos Aires, J. C. Rovira editor, 1932.
- Gutiérrez, Eduardo: *El puñal del tirano*, Buenos Aires, J. C. Rovira editor, 1932.
- Halperin Donghi, Tulio: *Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850)*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.
- Halperin Donghi, Tulio: *De la Revolución de Independencia a la Confederación rosista*, Buenos Aires, Paidós, 1985.
- Herrero, Fabián: "Un golpe de estado en Buenos Aires durante octubre de 1820", *Anuario del IEHS*, N° 18, Tandil, 2004.
- Ibarguren, Carlos: *Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama, su tiempo*, Buenos Aires, Theoria, 1961.
- Juárez, Roberto: "Muerte del Dr. Manuel Vicente Maza", *Todo es Historia*, N° 9, Buenos Aires, 1968.
- Lobato, Mirta: *La revolución de los Restauradores*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1983.

- Lynch, John: *Juan Manuel de Rosas. 1829-1852*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1984.
- Mariluz Urquijo, José: "La mano de obra en la industria porteña. 1810-1830", *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, Buenos Aires, N°33, 1962.
- Mayer, Jorge: *Alberdi y su tiempo*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
- Montezanti, Néstor: "Rosas y el terror", *Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas*, N° 43, Buenos Aires, 1996.
- Muiño, Oscar: "La providencial traición de la 'Trinidad'", *Todo es Historia*, N° 176, Buenos Aires, 1982.
- Myers, Jorge: *Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista*, Universidad de Quilmes, Buenos Aires, 1995.
- Myers, Jorge: "La Revolución en las ideas: La generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas", en Noemí Goldman (dir.), *Revolución, República, Confederación (1806-1852)*, t. 3 de la colección Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.
- Peña, Milcíades: *El paraíso terrateniente*, Buenos Aires, Fichas, 1972.
- Quiroga Micheo, Ernesto: "El mazorquero Leandro Antonio Alén. ¿Culpable o inocente?", *Todo es Historia*, N° 302, Buenos Aires, 1992.
- Quiroga Micheo, Ernesto: "Los mazorqueros, ¿gente decente o asesinos?", *Todo es Historia*, N° 308, Buenos Aires, 1993.
- Ramos Mejía, José María: *Rosas y su tiempo*, Buenos Aires, Emecé, 2001.
- Ratto, Silvia: *La frontera bonaerense (1810-1828): espacio de conflicto, negociación y convivencia*, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 2003.
- Romay, Francisco: *Historia de la Policía Federal Argentina*, tomo III, Buenos Aires, Editorial Policial, 1980.
- Rosa, José María: *Rosas: nuestro contemporáneo*, Buenos Aires, La Candelaria, 1970.

- Sáenz, Jimena: "Cuando el año cuarenta moría", *Todo es Historia*, N° 30, 1969.
- Saldías, Adolfo: *Historia de la Confederación Argentina. Rosas y su época*, Buenos Aires, Félix Lojaune, 1892.
- Salvatore, Ricardo: "Fiestas federales: representaciones de la república en el Buenos Aires rosista", *Entrepasados*, N° 11, Buenos Aires, 1996.
- Salvatore, Ricardo: *Wandering Paisanos. State Order and Subaltern Experience in Buenos Aires during the Rosas Era*, Durham and London, Duke University Press, 2003.
- Sierra, Vicente: *Historia de la Argentina*, Buenos Aires, Editorial Científica Argentina, t. VIII (1829-1840), 1969, y IX (1840-1852), 1972.
- Szuchman, Mark: *Order, Family and Community in Buenos Aires, 1810-1860*, Stanford, Stanford University Press, 1988.
- Ternavasio, Marcela: *La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.
- Yunque, Álvaro: *Leandro N. Alem. El hombre de la multitud*, t. I, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1984.



Agradecimientos

Quiero agradecerle a Jorge Gelman tanto la invitación a escribir este libro para la colección como sus observaciones sobre el texto y su paciencia. El trabajo de Virgina Macchi en la recolección de documentos fue muy importante; también lo fue la colaboración de Marina Di Meglio en la clasificación de esas fuentes. Raúl Fradkin, Noemí Goldman, María Inés Schroeder, Daniel Santilli, Fabio Wasserman, Nora Souto, Alejandra Pasino, Leandro González, Juan Pablo Fasano y Jorge Núñez me facilitaron materiales, recomendaciones y comentarios muy útiles. A todos ellos, muchas gracias. Otro agradecimiento es para quienes trabajan en la biblioteca del Instituto Ravignani (UBA), el Museo Mitre y el Archivo General de la Nación. Y agradezco de manera especial a Ximena Espeche por sus correcciones, sus ganas y su apoyo.



Índice

Introducción.....	9
La estrella federal.....	17
Gente de rojo	57
El ojo de la tormenta	119
Notas.....	199
Fuentes	203
Bibliografía	207
Agradecimientos	213